C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO ALVAREZ DE MIRANDA
Y TORRES

Sesión Plenaria núm. 16

celebrada el jueves, 22 de diciembre de 1977

S U M A R I O

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.

El señor Fajardo Spínola plantea una cuestión de orden, pidiendo que se altere el orden del día en el sentido de que el punto cuarto de éste, que se refiere a la creación de una Comisión de Encuesta para analizar los acontecimientos de Málaga y Tenerife, se examine inmediatamente después del debate y votación de los Presupuestos Generales del Estado. — Intervienen los señores Arias-Salgado Montalvo, García García, Verde i Aldea, Morodo Leoncio, Arzalluz Antia y Ramos Molíns, todos ellos en apoyo de la propuesta del señor Fajardo Spínola.—Hecha la oportuna pregunta por el señor Presidente, fue aprobada por unanimidad la propuesta de alteración del orden del día.

Primer punto del orden del día: Presupuestos Generales del Estado para 1978.

Discurso del señor Ministro de Hacienda (Fernández Ordóñez) sobre la situación económica, las medidas adoptadas para afrontarla y el contenido de los Presupuestos para 1978.

El señor Presidente expone el procedimiento a seguir para el debate en relación con el proyecto de Presupuestos, en el que podrán intervenir los representantes de los Grupos Parlamentarios que lo deseen. — El señor Fraga Iribarne, de Alianza Popular, renuncia a intervenir. — Intervienen los señores Tamames Gómez (Grupo Comunista); Sánchez Ayuso (Grupo Mixto); Martín Toval (Grupo Socialistas de Cataluña), y Barón Crespo (Grupo Socialistas del Congreso).

El señor Presidente anuncia que se va a proceder a continuación a la discusión y votación de las enmiendas presentadas a la totalidad de diversas Secciones del Presupuesto, y explica el orden del examen de dichas enmiendas.

Sección 2. Consejo del Reino.—Intervienen

los señores Múgica Herzog y Bravo de Laguna Bermúdez.—El señor Presidente anuncia que se va a proceder a la votación, la cual se hará por el sistema electrónico y recuerda a los señores Diputados el procedimiento a seguir en esta votación y en las sucesivas que han de tener lugar.—Efectuada la votación de la enmienda formulada por el Grupo Socialistas del Congreso, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; votos a favor, 134; en contra, 150; abstenciones, tres. *Queda rechazada la enmienda.*—Efectuada la votación del texto de la Sección, que figura en el proyecto de ley, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 164; en contra, 135; abstenciones, tres. *Queda aprobada la Sección 2.*

Secciones 11, 17, 18, 20, 24, 26 y 31.—El señor Presidente anuncia que se va a proceder a la discusión y votación de las enmiendas correspondientes a estas Secciones. — Intervienen los señores Lozano Pérez y Meilán Gil.—El señor Ministro de Hacienda (Fernández Ordóñez) hace algunas aclaraciones a las manifestaciones del señor Lozano Pérez.

Efectuada la votación de la Sección 11, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 184; en contra, 121; abstenciones, 17. *Queda aprobada.*

Efectuada la votación de la enmienda a la Sección 17, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 134; en contra, 172; abstenciones, 17. *Queda rechazada.* — Efectuada la votación de la Sección 17, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 177; en contra, 129; abstenciones, 16; votos nulos, uno. *Queda aprobada.*

Se vota la enmienda a la Sección 18, cuyo resultado es: votos emitidos, 325; a favor, 133; en contra, 175; abstenciones, 17. *Queda rechazada.*—Efectuada la votación de la Sección 18, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 177; en contra, 129; abstenciones, 15. *Queda aprobada.*

Se vota la enmienda a la Sección 20, cuyo resultado es: votos emitidos, 319; a favor, 129; en contra, 172; abstenciones, 18. *Queda rechazada.*—Efectuada la votación de la Sección 20, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 177; en contra,

128; abstenciones, 17; votos nulos, uno. *Queda aprobada.*

Se vota la enmienda a la Sección 24, cuyo resultado es: votos emitidos, 324; a favor, 131; en contra, 174; abstenciones, 19. *Queda rechazada.*—Efectuada la votación de la Sección, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 174; en contra, 128; abstenciones, 18. *Queda aprobada.*

Se vota la enmienda a la Sección 26, cuyo resultado fue: votos emitidos, 324; a favor, 134; en contra, 170; abstenciones, 20. *Queda rechazada.*—Efectuada la votación de la Sección 26, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 166; en contra, 139; abstenciones, 16; votos nulos, uno. *Queda aprobada.*

Se vota la enmienda a la Sección 31, cuyo resultado fue: votos emitidos, 321; a favor, 114; en contra, 174; abstenciones, 33. *Queda rechazada.*—Efectuada la votación de la Sección, el resultado fue el siguiente: votos emitidos, 320; a favor, 176; en contra, 112; abstenciones, 32. *Queda aprobada.*

Sección 32.—El señor Martín Toval defiende la enmienda en nombre del Grupo Socialistas de Cataluña.—Interviene el señor Bravo de Laguna Bermúdez.—Efectuada la votación de la enmienda, el resultado fue: votos emitidos, 312; a favor, 114; en contra, 183; abstenciones, 15. *Queda rechazada.*—Se vota la Sección, cuyo resultado fue: votos emitidos, 317; a favor, 186; en contra, 114; abstenciones, 17. *Queda aprobada.*

Para explicar sus respectivos votos intervienen los señores García Sánchez y De Vicente Martín.

Presupuesto-resumen de la Seguridad Social—El señor Presidente anuncia que se va a proceder a la discusión y votación de las enmiendas formuladas a la totalidad de este capítulo del Presupuesto.—Intervienen los señores Camacho Abad, Sánchez Ayuso, De Vicente Martín y Rovira Tarazona.—El señor Presidente propone la votación conjunta de las tres enmiendas a la totalidad, propuesta que es aceptada por la Cámara. — Efectuada la votación de las enmiendas, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 169; abstenciones, 17. *Quedan rechazadas.*—Se vota el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social, cu-

yo resultado fue: votos emitidos, 315; a favor, 165; en contra, 132; abstenciones, 18. Queda aprobado.

Secciones 1; 3 a 7; 12 a 16; 19; 21 a 23 y 25.—No habiéndose presentado enmiendas a estas Secciones, se procede a su votación en conjunto, cuyo resultado es el siguiente: votos emitidos, 311; a favor, 301; en contra, cinco; abstenciones, cinco. Quedan aprobadas.

Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la tarde.

El señor Presidente concede la palabra al señor Bono Martínez, quien hace uso de ella para explicar su voto a la Sección 14.

También explica su voto el señor Trias Fargas.

El señor Presidente anuncia que se va a entrar en el examen del articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículos 1.º al 7.º, que no han tenido enmiendas. — Efectuada la votación de estos artículos globalmente, tuvo el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 303; en contra, cinco; abstenciones, dos. Quedan aprobados.

Artículo 8.º—Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 197; en contra, tres; abstenciones, 106; nulos, cuatro. Queda aprobado.—Para explicar su voto intervienen los señores De Vicente Martín, Sánchez Ayuso, García Añoberos y Tamames Gómez.

Artículos 9.º al 13. — Efectuada la votación global de estos artículos, que no han tenido enmiendas, el resultado fue: votos emitidos, 310; a favor, 297; en contra, seis; abstenciones, cinco; nulos, dos. Quedan aprobados.

Artículo 14.—Interviene el señor Pons Irazábal para defender la enmienda en nombre del Grupo Socialistas del Congreso. — Contestación del señor Rovira Tarazona, en nombre de la Ponencia.—Se vota la enmienda, que tuvo el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 146; en contra, 167; abstenciones, cinco. Queda rechazada. — Efectuada la votación del texto del artículo

lo que figura en el proyecto, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 167; en contra, 146; abstenciones, cinco. Queda aprobado.

Artículos 15 al 27 y Disposiciones adicionales.—Efectuada la votación global de estos preceptos, que no han tenido enmiendas, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 305; en contra, seis; abstenciones, cinco. Quedan aprobados.

El señor Presidente anuncia que se pasa al debate y votación de las enmiendas parciales presentadas a las diversas Secciones del Presupuesto.

Sección 18.—El señor Barrera Costa retira su enmienda por las razones que expone. — El señor Solana Madariaga (don Francisco Javier) defiende la enmienda formulada por el Grupo Socialistas del Congreso.—Contestación del señor Benzo Mestre (de la Comisión).—Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 119; en contra, 183; abstenciones, tres. Queda rechazada la enmienda. — El señor Solana Madariaga (don Francisco Javier) explica su voto. — Observación del señor Presidente.—Interviene el señor Solé Tura para explicar también su voto.

Sección 21.—El señor Lluch Martín defiende la enmienda formulada por el Grupo Socialistas de Cataluña.—Contestación del señor Martínez-Villaseñor García. — Observación del señor Vidal Riembau a quien contesta el señor Presidente.—Efectuada la votación de la enmienda, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 147; en contra, 170; abstenciones, cuatro. Queda rechazada. — Observación del señor Peces-Barba Martínez en relación con el procedimiento electrónico que se emplea en las votaciones. — Contestación del señor Presidente. — Intervienen para explicación del voto los señores Bolea Foradada y Pau Pernáu.—El señor Tamames Gómez defiende las enmiendas del Grupo Comunista a esta misma Sección.—Efectuada la votación de estas enmiendas, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 141; en contra, 155; abstenciones, tres. Quedan rechazadas.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—Sección 22.—Intervienen los señores Alonso Sarmiento y Bravo de Loguna Bermúdez.—Efectuada la votación de las tres enmiendas del Grupo Socialistas del Congreso, en conjunto, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 142; en contra, 165; abstenciones, tres. Quedan rechazadas estas enmiendas.

Sección 23. — Intervienen los señores Lluch Martín, De Vicente Martín y De la Torre Prados.—Efectuada la votación de la enmienda del Grupo Socialistas del Congreso, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, cinco. Queda rechazada.

Sección 26. — Interviene la señora Bustelo García del Real para defender la enmienda del Grupo Socialistas del Congreso, y los señores Meilán Gil, para alusiones, y Rodríguez-Miranda Gómez, para defender el dictamen de la Comisión.—El señor Ministro de Cultura (Cabanillas Gallas) interviene para ampliar la información que en relación con esta Sección, que corresponde al Presupuesto de su Departamento, hizo en su día ante la Comisión.—Efectuada la votación de la enmienda, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 129; en contra, 169; abstenciones, cuatro. Queda rechazada.—Se pasa al examen de las enmiendas formuladas por el Grupo Comunista a esta misma Sección, que son defendidas por el señor Soto Martín.—El señor Rodríguez-Miranda Gómez interviene para defender el dictamen de la Comisión. — Efectuada la votación de las veintiuna enmiendas del Grupo Comunista, en su conjunto, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 118; en contra, 164; abstenciones, 14. Quedan rechazadas.

Presupuesto-resumen de la Seguridad Social.—El señor Camacho Abad defiende las enmiendas del Grupo Comunista.—El señor Sarroga Gómez interviene en contra de dichas enmiendas. — Aclaraciones del señor García Añoveros en nombre de la Comisión.—Efectuada la votación del conjunto de estas enmiendas, dio el siguiente resultado: votos a favor, 110; en contra, 162; abstenciones, 13. Quedan rechazadas.—Observación del señor Presidente en relación

con el desarrollo del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado y finalmente declara aprobados éstos.

Se entra a continuación en el examen y votación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que figuran en el orden del día, e invita al señor Secretario a que vaya dando lectura a los mismos.—Así lo va haciendo sucesivamente el señor Secretario (Ruiz-Navarro y Gimeno) con los siguientes proyectos de ley:

Crédito extraordinario de 716.000.000 de pesetas, al Ministerio de Agricultura, en concepto de subvención al FORPPA para compensar a las empresas extractoras de granos de girasol y de granos de cártamo. — Efectuada la votación de este proyecto de ley, fue aprobado por 260 votos a favor y 22 en contra, con cuatro abstenciones.—El señor Solé Barberá explica el voto del Grupo Comunista.

Crédito extraordinario de 7.274.262.394 pesetas, al Ministerio de Comercio, para que por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes puedan cancelarse varias pólizas de crédito concertadas con el Banco de España con motivo de la intervención en el mercado de aceite de soja.—Fue aprobado con el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 240; en contra, 30; abstenciones, 11.

Varios créditos extraordinarios, por un total de 8.774.000.000 de pesetas, al Ministerio de Obras Públicas, para pago de obligaciones por diversos conceptos anteriores al 31 de diciembre de 1975.—Fue aprobado con el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 243; en contra, 28; abstenciones, 11.

Suplemento de crédito de 2.311.500.000 pesetas, al Ministerio de la Gobernación, con destino a satisfacer los gastos que ocasionó la celebración de las elecciones legislativas.—Fue aprobado con el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 266; en contra, 13; abstenciones, tres.

Crédito extraordinario de 3.618.933.706 pesetas, al Ministerio de Agricultura, para abono al FORPPA de diferencias de subvenciones satisfechas por el organismo, correspondientes al año 1974.—Fue aprobado con

el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor 231; en contra, 33; abstenciones, 28.

Se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se abre el conjunto de sesiones que se inician, previa convocatoria, el día 22 de diciembre de 1977.

Antes de iniciar la sesión, yo quisiera advertir a los señores Diputados que tienen a su disposición la carpeta en la que figuran todos los documentos referentes al Presupuesto. No se les ha podido repartir en los escaños porque no teníamos todavía la situación exacta de su colocación, pero todos la tienen a su disposición en la sala contigua al salón del Pleno. *(El señor Fajardo Spínola pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Fajardo.

El señor FAJARDO SPINOLA: Para una cuestión de orden. En el orden del día del presente Pleno se encuentra, precisamente en el punto cuarto, el tema de la creación de una Comisión de Encuesta para analizar los acontecimientos de Málaga y Tenerife. Nosotros estimamos que este tema tiene la importancia y también la urgencia suficientes como para que fuera colocado dentro del orden del día de tal manera que pudiera ser tratado antes de la posible suspensión previa a estas fiestas de este Pleno. Entendemos esto —y habla un Diputado de Tenerife, un Diputado precisamente de la provincia donde se produjeron algunos de estos acontecimientos—, entiende esto, repito, este Diputado porque precisamente sabe que el pueblo de Tenerife, y piensa también que el de Málaga, está esperando con bastante interés que este Parlamento, atento a la evolución de todos los acontecimientos del país, se pronuncie oportunamente y dentro de tiempo sobre esos acontecimientos, y que ese pronunciamiento sea posterior a una investigación que, desde luego, debe iniciarse. Es por eso por lo que ruego a la Presidencia y también a los se-

ñores Diputados que, teniendo en cuenta esta petición de este Grupo Parlamentario, sea cambiado ese punto 4 del orden del día en el sentido de incluirlo inmediatamente después del debate y votación de los proyectos de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Sobre este tema, ¿hay alguna manifestación que hacer? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Arias-Salgado.

El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, Unión de Centro Democrático ha compartido siempre la importancia y la urgencia de crear una Comisión de Encuesta para investigar sobre los sucesos de Málaga, porque nos parece el cauce adecuado para el tratamiento de este tema. Unión de Centro Democrático apoyó la resolución o la proposición a esta Cámara de la creación de la Comisión de Encuesta, proposición que iba firmada por todos, absolutamente por todos los Grupos Parlamentarios, y entre ellos Unión de Centro Democrático.

Unión de Centro Democrático comparte, igualmente, la necesidad de que el Parlamento, por la vía adecuada y en debida forma, se ocupe de estos temas y, en consecuencia, como Grupo Parlamentario, no tiene ningún inconveniente en que el tema de la creación de la Comisión de Encuesta para los sucesos de Málaga y Tenerife pase a ocupar el segundo puesto en el orden del día de las sesiones que vamos a celebrar.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo Parlamentario quiere pronunciarse sobre la cuestión de orden planteada? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor García García.

El señor GARCIA GARCIA: Para apoyar la propuesta que se hace de cambiar el lugar en el orden del día, hecha por el Diputado de Tenerife y apoyada por el Diputado de UCD.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra manifestación? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Verde i Aldea.

El señor VERDE I ALDEA: En nombre de la Minoría Catalana, para decir que nuestro

voto también será favorable a que pase al segundo punto del orden del día la propuesta de creación de la Comisión de Encuesta.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morodo.

El señor MORODO LEONCIO: En los mismos términos, para adherirnos a la propuesta hecha.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arzalluz.

El señor ARZALLUZ ANTIA: La Minoría Vasca se adhiere también a la propuesta de cambio de lugar en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS MOLINS: Socialistas de Cataluña se adhiere también a la propuesta.

El señor PRESIDENTE: Podemos proceder a la votación sobre la propuesta formal de alteración del orden del día, en el sentido de que el punto 4, relativo a la creación de una Comisión de Encuesta sobre los acontecimientos producidos en Málaga y Tenerife, pase a ocupar el punto 2 del orden del día.

Todos aquellos señores Diputados que estén a favor de esta alteración tengan la bondad de levantarse. Se aprueba por unanimidad de la Cámara.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1978

El señor PRESIDENTE: A continuación corresponde, como primer punto del orden del día, el examen del dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Fernández Ordóñez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ni los Presupuestos ni ninguna decisión política se escriben sobre una

página en blanco; son el resultado de una larga historia, donde al final se cristaliza un debate y una peripecia política. Los Presupuestos significan, casi siempre, el esqueleto de un sistema económico-social cuando ha sido despojado de todas las ideologías; son siempre en parte una herencia, en parte una previsión y en parte un compromiso. La Ley de Presupuestos es así una ley de medios, una ley instrumental que sólo tiene sentido incorporada a su propio entorno político.

Pues bien, estamos a punto de volver la última página de un año singular de nuestra Historia. En 1977 se han legalizado los partidos políticos y los sindicatos, se ha concedido una amnistía política, se han celebrado unas elecciones generales y se han inaugurado unas Cortes Constituyentes. Y en el campo económico, ante una situación de gravedad excepcional, se ha formulado un programa de convergencia, aceptado no hace mucho por esta Cámara; un programa en el que los partidos políticos signatarios coinciden en un propósito esencial: dar una respuesta a la crisis desde la democracia, porque no habrá solución fuera de ella.

En este escenario de profunda renovación política se somete a la aprobación de estas Cortes nuestro principal documento económico. En el corto plazo de poco más de tres meses se ha elaborado, por primera vez en la historia financiera de España, un Presupuesto consolidado del sector público, que incluye, además del del Estado, los de 105 organismos autónomos de carácter administrativo; los de 93 organismos autónomos de carácter comercial y financiero, el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social y, a efectos de información, no exigido por la Ley General Presupuestaria, el Presupuesto de inversión de las empresas públicas; el Presupuesto de explotación de las empresas públicas con subvención, la estimación del Presupuesto de las Corporaciones locales, y, por primera vez también, las cuentas de las instituciones financieras públicas.

Estos Presupuestos contienen 11.000 rúbricas presupuestarias, con una clasificación basada en las recomendaciones de las Naciones Unidas. Se han elaborado con una clasificación funcional del gasto público del cuarto grado, con más de 100 rúbricas y con una

técnica que puede considerarse de las más completas de la Comunidad Económica Europea.

Se han profundizado los instrumentos de control, culminando con la fiscalización de la Seguridad Social por la Intervención General de la Administración del Estado. Y, además de ello, los Presupuestos se han elaborado desde una exigencia de veracidad. Se trata de unos Presupuestos donde no se infravaloran los gastos futuros ni se sobrevaloran los ingresos previstos. Unos Presupuestos donde está escrita la incómoda verdad de nuestra economía con el duro lenguaje de las cifras.

Yo quisiera agradecer a las señoras y señores Diputados que, conscientes de los problemas de tiempo con que este año nos hemos encontrado, hayan colaborado a una tramitación rápida del proyecto, cuando hubiera sido razonable y lógico un estudio más profundo.

Sin embargo, dicho todo esto, tengo que comenzar con una afirmación de autocrítica. Ni la clasificación funcional, ni la clasificación económica, aunque sea detallada, son plena garantía de eficacia en la asignación de los recursos públicos. España es uno de los países avanzados en técnicas presupuestarias, pero ni los mecanismos actuales de contabilidad pública de regionalización de gastos e ingresos y de valoración de sus efectos permiten al Ministro de Hacienda manifestar su satisfacción complaciente. En estos momentos, en muchos países se están iniciando procesos que tratan de sustituir el análisis en términos incrementales por nuevos procedimientos; se cuestionan programas de gastos ya consolidados y que en la mecánica tradicional son raramente objeto de consideración, porque es bien sabido que en la mayoría de los países, tanto en la decisión de gobierno como en la presupuestaria, la decisión final se reduce casi siempre a la parte visible del iceberg; las nueve décimas partes restantes han sido consolidadas ya antes por la propia realidad histórica y jurídica.

Pero todas estas técnicas, que culminan con el Presupuesto-base cero, exigen, entre otras muchas condiciones, la existencia de un Presupuesto basado en una estructura de programas, camino que se ha iniciado y está exigido para dos Departamentos en el próximo año por los «Acuerdos de la Moncloa».

Y en el mismo sentido, el problema de las autonomías regionales hace necesario conocer la distribución territorial de la inversión pública. En enero dispondremos del primer trabajo de investigación que nos permitirá elaborar una clasificación territorial del gasto de inversión fundamental para este propósito.

Y hecho este comentario a las técnicas de elaboración de este Presupuesto, creo que es necesario hacer una breve reflexión sobre lo que es el sector público en el cuadro actual de nuestra economía, desde dos perspectivas: los objetivos del Presupuesto, en primer lugar, y, en segundo lugar, la estructura y financiación del sector público. Desde la perspectiva presupuestaria, la política económica para el próximo año se ha encuadrado en tres objetivos: la lucha contra la inflación, la política de empleo y el reparto justo de los costes de la crisis.

Veamos, en primer lugar, el tema de la inflación. La incompatibilidad entre una estructura política antiinflacionista y el mantenimiento del empleo ha sido valorado a la hora de fijar el volumen total del gasto público, y ha sido uno de los puntos básicos de discusión en las conversaciones de la Moncloa, porque si se hubiera producido una drástica reducción de los programas de gastos destinados a suministrar servicios colectivos, si se hubiera producido una drástica reducción del programa de actividades para redistribuir la renta, se hubiera limitado, es evidente, mucho más la demanda del sector público, pero a un coste socialmente inaceptable.

Este difícil equilibrio entre la trilogía de objetivos: inflación, empleo y servicios colectivos, ha sido resuelto, en las propias conversaciones de la Moncloa, en un crecimiento del gasto global del 23,7 por ciento, porcentaje análogo al previsto para el crecimiento del producto interior bruto, en términos monetarios. Así, la utilización, por ejemplo, del modelo Bend Hansen para este Presupuesto de la Administración pública arroja un carácter prácticamente neutral, con un alcance de medio punto del PIB de 1977. Se trata, por tanto, de un Presupuesto de acompañamiento al programa de ajustes económicos.

De la cifra total me importa destacar que más de un 42 por ciento son retribuciones de

personal. Este porcentaje es bajo en relación con la renta nacional, pero muy elevado en relación con el Presupuesto, y revela un serio problema estructural. La verdadera jungla de normas que regulan todavía la función pública en España, su mecanismo de retribución, obliga y compromete a un tratamiento global en breve plazo de este tema fundamental para la eficacia de toda la actividad pública.

Los dos restantes aspectos de la política antiinflacionaria son: primero, la contención de los costes de las empresas, limitando las cotizaciones de la Seguridad Social en un 18 por ciento, porcentaje inferior al previsto para la masa salarial, con lo que se consigue con una desaceleración, que logra precisamente el trasvase de fondos del Presupuesto a la Seguridad Social, que pasa de 28.000 millones a 100.000 millones. Y el segundo aspecto de la política antiinflacionaria se manifiesta en el juego de la imposición directa, que trata de evitar toda incidencia en la presión de la financiación del gasto público.

El segundo gran objetivo presupuestario es la política de empleo. Para ello se ha manejado la inversión pública con un planteamiento muy selectivo en cuanto a sus efectos previstos. El importe total de la inversión del Presupuesto del Estado asciende a 368.000 millones de pesetas, que representa la cuarta parte del gasto total presupuestado, uno de los porcentajes más altos de Europa. Los sectores principales son: Educación, 70.000 millones; Agricultura, 46.000 millones; Transporte, 43.000 millones; Defensa, 42.000 millones, y Vivienda, 39.000 millones.

Este aumento de la inversión pública va a dar lugar a la creación de 80.000 nuevos puestos de trabajo, sin computar la creación indirecta que se produce a consecuencia del poder o efecto multiplicador del gasto.

Las inversiones estatales de todo el sector de las Administraciones públicas suponen, para 1978, el 11,7 por ciento de la inversión total del país, porcentaje muy superior respecto al de los ejercicios anteriores. Si añadimos los organismos autónomos y las sociedades del Estado, resultará que el 21 por ciento de la inversión total del país será realizado el año 1978 por el sector público.

Finalmente, la aportación del Presupuesto del Estado al Seguro de Desempleo permitirá

dedicar un total de 151.000 millones de pesetas, cuya utilización deberá ser cuidadosamente controlada por los organismos pagadores, pero que, en todo caso, implicaba un deber insoslayable de la sociedad española.

Y el tercer objetivo económico del Presupuesto para 1978 es el reparto equitativo de los costes de la crisis. Desde el punto de vista presupuestario, el principal método para repartir con justicia los costes de una crisis económica es actuar sobre la imposición directa de las personas físicas. La Ley de Medidas Urgentes, aprobada por esta Cámara recientemente por abrumadora mayoría, significa un paso importantísimo que permite que, por primera vez en nuestra historia financiera, aparezcan casi prácticamente nivelados los impuestos directos y los impuestos indirectos.

El segundo mecanismo es la provisión de servicios sociales. En este sentido, el importe del Presupuesto del Estado para 1978 destinado a actividades sociales asciende a 638.000 millones de pesetas, es decir, el 44 por ciento del total. Se ganan, por tanto, dos puntos y medio sobre 1977. Si incluimos el Fondo de Acción Coyuntural, significa un 46 por ciento, esto es, una participación análoga a la que existe en Europa.

Hemos elaborado este año por primera vez lo que podríamos llamar Presupuesto social del Estado. Este Presupuesto social del Estado, obtenido del Presupuesto consolidado, arroja un total de 1.810.000.000.000 de pesetas. Esta cifra sobrepasa al Presupuesto total del Estado en más de la cuarta parte, y se divide, fundamentalmente, en 600.000 millones de pesetas dedicados a pensiones, 348.000 millones a Sanidad y 294.000 millones dedicados a educación. Han aumentado, además, en un 30 por ciento las pensiones de las clases pasivas.

Sin embargo, todo este cuadro cuantificador de objetivos que configuran el gasto público para este Presupuesto no tendría sentido si no se hubiera abordado al mismo tiempo con firmeza la transformación de toda su estructura financiera. Porque un Presupuesto sólo se comprende cuando se sabe cómo va a financiarse.

Nos hemos encontrado con un sector público raquítico para atender necesidades mínimas de un país moderno. Tenemos un sis-

tema tributario desprestigiado por el fraude, por el anacronismo de sus normas, por el carácter regresivo de sus tributos más potentes, por la intolerable arbitrariedad de sus exenciones, por la incapacidad para superar un déficit crónico y creciente.

Y cuando un sistema fiscal acumula tal cantidad de defectos, sólo cabía la opción de abordar de una vez su reforma, no a nivel de la retórica política, sino de la prosa de la ley. Y éste es el camino que se ha emprendido con la seguridad de acometer una tarea de Estado que no sólo es oportuna, sino que es necesaria. Así, la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, aprobada en 14 de noviembre último, regirá en 1978. En 1979 y 1980 deben implantarse los impuestos sobre renta, patrimonio y sucesiones de personas físicas y sobre sociedades. Más tarde debe aplicarse el impuesto sobre el valor añadido.

Los impuestos sobre sociedades y valor añadido no se han remitido todavía por el Gobierno a las Cortes, pero ello tendrá lugar a principios del próximo año.

Se introduce así gradualmente un elemento de racionalización y neutralización en el sistema económico. Se simplifica la estructura del sistema vigente y se ofrece un tratamiento adecuado mucho más amplio que el actual para los procesos de ahorro y de inversión.

Ningún tributo se ha dirigido a las empresas, sino a los titulares de rentas y patrimonios, y se favorece la auténtica actividad empresarial, distorsionada por una estructura tributaria discriminatoria.

Las tarifas más bajas permitirán que pueda exigirse con todo rigor la realidad de las bases. Finalmente, la moratoria aplicable en 1978 permitirá una total exoneración para todas las cuotas pendientes por rentas y sociedades, si la declaración presentada a tales efectos es exacta.

En resumen, era necesario un cambio de actitud ante estos problemas; era necesario plantearse seriamente una financiación justa del Presupuesto; era necesario crear un clima nuevo de responsabilidad frente a una aceptación del fraude que había devastado la ética social ante las cargas públicas, y era

necesario que ello se hiciera desde la política de un Parlamento, que así lo ha decidido.

Señoras y señores Diputados, hay algo siempre, en situaciones como ésta, de apuesta histórica, y creo que todos somos conscientes del significado del desafío.

Las elecciones de 1977 han demostrado, frente a tantas apariencias, que no vivimos en una sociedad desencantada, en un viejo país en decadencia. Se trata, simplemente, de que el pueblo español aspira a edificar un modelo de convivencia libre que no admite la posibilidad de volver a destruirlo.

De cara a 1978, yo creo que podemos formularnos la vieja pregunta: ¿Qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros? No depende de nosotros la débil actividad de las economías europeas para 1978; ni el aumento del precio de los crudos, ni las perturbaciones monetarias internacionales, ni los costes de las materias primas, porque no es posible la solución súbita y milagrosa de unos problemas antiguos y profundos. Pero sí depende de nosotros cumplir un programa que está hecho de renunciaciones. Este es un Presupuesto donde faltan escuelas, viviendas, carreteras, hospitales, niveles adecuados de retribución. Esta es una sociedad que todavía está lejos de la justicia. Este es un sistema económico que tendrá que ajustarse a un marco social y político diferente, sabiendo que vivimos la hora difícil de una gran mutación histórica. Y éste es un país que tiene que aceptar que sus recursos son escasos, que la inflación, hasta ahora, ha sido el medio falso de hacer compatibles exigencias incompatibles y que el trabajo, la seriedad y la responsabilidad forman parte también de la convivencia democrática, y que, como en las palabras del «raport Tinbergen», la solidaridad es una idea antigua, pero lo que es nuevo es que es ya una condición para la supervivencia.

Señoras y señores Diputados, los Presupuestos para los que tengo el honor de pedir su voto son los Presupuestos para un tiempo de crisis, pero son también los Presupuestos para un tiempo de libertad. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 98 del Reglamento, corresponde ahora a todos los Grupos Parlamentarios fijar el criterio en orden al proyecto presentado, en este caso el de los Presupuestos Generales del Estado. Aun cuando el Presupuesto, como saben, tiene la declaración de procedimiento de urgencia y por consiguiente debería reducirse la intervención prevista a la mitad, habida cuenta de la importancia extraordinaria del tema, entiende esta Presidencia que cada uno de los representantes de los Grupos Parlamentarios que quiera intervenir para fijar este criterio tiene un tiempo de veinte minutos. Vamos a nombrarles por orden alfabético a efectos de que fijen el criterio general sobre el Presupuesto. El Grupo Parlamentario de Alianza Popular ¿quiere intervenir a estos efectos?

El señor FRAGA IRIBARNE: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Comunista? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Presupuesto, como todo el mundo sabe, es la concreción y síntesis de la actuación de la Hacienda pública que tiene, como es lógico, una gran influencia sobre todo el sistema económico. No es extraño, pues, que en todos los Parlamentos democráticos la discusión y el debate sobre el Presupuesto sea una de las principales tareas. Incluso el propio nacimiento de nuestras Cortes en los pueblos de España tiene una relación con el control de los gastos públicos.

Lo que aquí se va a decidir hoy tendrá una larga influencia en la marcha de la economía, en la vida de las empresas, en la vida de todos los ciudadanos. Va a influir en la evolución de una situación económica concreta, en la marcha de la crisis en que nuestro país, como gran parte del mundo, está inserto. Una crisis que ya podemos decir, y es una mera constatación histórica, que no va a ser corta porque ya no lo es; sin aceptar la tesis de un Forrester, que en un artículo recientemente publicado revivía la vieja teoría de Nicolai Kondratieff sobre las

ondas largas de la economía poniendo de relieve que podemos estar en la rama descendente de un ciclo largo de la economía. Lo cierto es que esto no es una crisis pasajera; es una crisis, más que coyuntural, de fondo, de donde saldremos, pero con un sistema económico amplia y profundamente modificado.

Esta crisis no se debe en España, y así hay que ponerlo de relieve de cara a la opinión pública, a los seis meses escasos que llevamos de democracia, sino que hay que atribuirle, además de al contexto internacional, a los muchos años de política económica autoritaria al servicio de intereses minoritarios, al crecimiento autoritario a partir de 1962, después del plan de estabilización que estuvo lleno de irracionalidades que hoy podemos contemplar al desnudo; a los cuatro años de permisibilidad de los últimos tiempos desde 1973, cuando se intentaba o se trataba de resolver todo con la medicina inflacionista, con la permisibilidad que ha hecho que estemos hoy, y no quiero con esto dramatizar, en una sociedad inflacionista donde todo se ha venido intentando lubricar con las alzas de precios olvidando que si eso lubricaba la maquinaria al final se planteaba un problema para su propio funcionamiento.

Estos cuatro años de permisibilidad en los cuales se publicaron nada menos que ocho paquetes de medidas económicas que no han servido absolutamente para nada, que a los pocos días o a lo sumo después de breves semanas quedaban absolutamente en el olvido.

A esta situación debemos enfrentarnos desde la incipiente democracia con la presentación de un Presupuesto que no debe ser un acto para simplemente aprobar rutinariamente una partida, sino también debe ser aprovechado para poner de relieve algunas cuestiones importantes.

La discusión del Presupuesto no es un mero problema contable ni debe ser un trámite para votar apresuradamente unas previsiones escasamente especificadas. Es necesario poner de relieve la necesidad de que el Estado ponga en orden sus cuentas después de tanto tiempo de desorden.

Sin ir más lejos, el Presupuesto de 1977,

que se presentó como un Presupuesto equilibrado, resulta que con los créditos extraordinarios va a superar un incremento real sobre el anterior de nada menos que un 20 por ciento. Esos créditos extraordinarios son uno de los mecanismos fundamentales del proceso inflacionista y significan que durante estos últimos años el Estado ha sido uno de los principales agentes de esa inflación, que, por otro lado, quería combatir.

Hoy todavía se puede afirmar que en este Presupuesto que se presenta hay mucho de dudoso a ese respecto, que todavía se puede apreciar toda una serie de proyectos que podrán generar créditos extraordinarios. No nos engañemos. Es el caso típico de los concursos del Estado, que son ganados por las grandes empresas a precios bajos para después introducirlos reformados, después de la revisión de precios para hacer que Presupuestos iniciados o planteados en 100 queden en 300 ó 400.

Con todo esto tenemos que acabar. Una democracia significa el poder del pueblo, y en términos presupuestarios significa una revisión profunda de los hábitos y tradiciones que están en el campo de las corruptelas.

Un Presupuesto resume toda la actividad financiera del Estado. Es, sencillamente, la expresión contable del plan económico de la Hacienda para todo un año que influye en la demanda efectiva y que condiciona toda la coyuntura. Pero políticamente el Presupuesto debe ser además la expresión de una democracia no sólo porque la recaudación de impuestos es la mayor expresión de la soberanía, sino porque también es el instrumento para ir introduciendo gradualmente una auténtica planificación democrática.

En este Presupuesto hay mucho que criticar, y por varias razones el Grupo Parlamentario Comunista estas razones las agruparía en tres categorías: Primera, la herencia del pasado al que voy a referirme brevemente porque creo que debemos mirar fundamentalmente hacia el futuro. Segunda, el método de elaboración. Y tercera, la inserción de los acuerdos del 25 de octubre en este Presupuesto.

La herencia del pasado constituye todavía un lastre importante en este Presupuesto. Se-

ría injusto no reconocer —como ha puesto de relieve el Ministro de Hacienda— que por primera vez se presenta un Presupuesto globalizado con los organismos autónomos y la Seguridad Social. Pero lo cierto es que hay todavía muchas cuestiones pendientes de reajuste. El peso de este pretérito se aprecia en aspectos como es la existencia de la Institución AISS; el mantenimiento todavía de gastos imposibles de comprobar y criticar en la Seguridad Social; la existencia de un Ministerio de Educación y Ciencia donde todo se está realizando a remolque de una Ley General de Educación, aprobada en 1970 y modificada varias veces, y donde el calendario inicial ha perdido toda su vigencia para estar en una situación absolutamente de incertidumbre en muchos aspectos que se manifiestan cotidianamente para centenares de miles de ciudadanos respecto de la educación de sus hijos; y también en el Ministerio de Cultura se aprecia el lastre del pasado en la larga herencia recibida de la Secretaría General del Movimiento, y de otros organismos.

A esas cuatro cuestiones a que me he referido va a prestar el Grupo Comunista la debida atención con la defensa de nuestra enmienda o con la explicación de voto cuando corresponda, pero hay otras situaciones, a las que no vamos a dedicar una atención tan desarrollada, pero que son importantes. El mantenimiento, por ejemplo, de situaciones inadecuadas en el Ministerio de Agricultura, donde el Instituto de Relaciones Agrarias significa todavía un proceso no adecuado que impide la verdadera representación de los agricultores, y donde hay una asignación de recursos a dicho Instituto que nos parece absolutamente desmesurada en relación con lo que tendría que haber de mayor atención a la agricultura de grupo y a todos los procesos de mejora de las explotaciones.

Estas son solamente algunas muestras de los muchos aspectos criticables de este Presupuesto.

Pero, en realidad, la crítica no hay que hacerla perdiéndose en minucias, sino refiriéndonos al método de elaboración. Un Presupuesto es la labor constante de una Administración, cosa que no ha sucedido en nues-

tro país hasta ahora y que no ha sucedido tampoco para este Presupuesto. Comprendemos las razones, también, del Ministro de Hacienda cuando nos decía que en tres meses ha tenido que realizarse lo que en una Administración democrática necesita un año. Ha habido un retraso para los parlamentarios en la remisión del Presupuesto de casi un mes. No hemos podido, por falta material de tiempo, conocer a fondo las situaciones concretas. Se puede afirmar que hay muchos elementos sin clarificar; que, incluso, las exposiciones presentadas por determinados Ministros han sido insatisfactorias absolutamente por la enorme falta de previsión de sus planteamientos.

Pero eso, mirando al futuro, habría que pensar en un método absolutamente nuevo para estudiar el Presupuesto; en un método que, incluso, tendrá que trasladarse a una serie de modificaciones al Reglamento de este Congreso. Es decir, la presentación del Presupuesto con mayor antelación; la discusión de este Presupuesto en las Comisiones de los Departamentos, que es donde se puede tener un conocimiento del organigrama no solamente, sino también del funcionamiento real de los Departamentos, que permita además consultar con las instancias populares, con las fuerzas ciudadanas que están interesadas en saber qué se va a hacer con el gasto público; una discusión en las Comisiones de los Departamentos para después pasar a la Comisión de Presupuestos, quizá en el plazo previsto del 15 de octubre; además la introducción de estos Presupuestos por Programas para las inversiones públicas será un factor importante en la idea de tener un Presupuesto más adecuado a las necesidades del cuerpo social del país, de los ciudadanos.

Finalmente, el tercer punto es la inserción del Presupuesto en sus relaciones con el Pacto de la Moncloa. Este es un tema especialmente importante. Se trata de una situación en la cual tenemos que rectificar viejos hábitos, como decía antes. Hay, en relación con la situación coyuntural presente, elementos alentadores. Desde el 25 de octubre, aparte de llover mucho, ha habido cambios y modificaciones importantes. Yo diría que la gran noticia es que la congelación de precios por seis meses de los países petroleros supone

un respiro para las economías occidentales y un respiro muy especial para la economía española. Como de confirmarse la noticia de que el coste de la vida subió en noviembre «solamente» (y lo pongo entre comillas) el 0,9 por ciento; elemento alentador en el sentido de que algunas de las previsiones hechas en octubre se están cumpliendo.

Yo diría, sin embargo, que hay toda una serie de elementos en los cuales tenemos que hacer también críticas. Es un Presupuesto limitado, pero yo diría que no es ejemplificador, que hay todavía muchos gastos en donde podríamos haber recortado y muchas inversiones y gastos que se podrían y deberían haber aumentado y que por esa falta de tiempo, esa falta de información, no ha sido posible.

Como también pensamos que ese planteamiento del Gobierno de los grupos de trabajo para el seguimiento del Pacto de la Moncloa puede ser, de cara a los primeros meses del año, una labor interesante en relación con una presentación nueva del Presupuesto. Como los Presupuestos por programas impedirán que en lo sucesivo no pase por esta Cámara toda una serie de inversiones que no demuestran adecuadamente una relación coste-beneficio adecuada.

El Grupo Parlamentario Comunista, como ustedes saben, presentó 162 enmiendas. Hemos reconsiderado muchas de nuestras posiciones y hemos atendido a bastantes de las explicaciones. Hemos mantenido alrededor de 40 enmiendas que van a ser defendidas aquí y algunas explicaciones de voto. Pero de cara a 1978 pensamos que el Presupuesto tendrá que incorporar no solamente los efectos de la Ley de Medidas de Reforma Fiscal, sino también los Presupuestos por Programas para todo el capítulo de inversiones. En resumen, mantenemos enmiendas a toda una serie de capítulos del Presupuesto. Explicaremos nuestro voto en algunas ocasiones. Y decimos que éste debe ser el último Presupuesto que tenga todavía esa herencia del pasado y que 1978 debe ser en estas Cortes un año de trabajo profundo, para ir liquidando situaciones anómalas, e ir haciendo que todos esos organismos heredados de otros tiempos se conviertan, o transformen, o desaparezcan, para dar lugar a una administración más eficiente,

más democrática, que es a lo que el pueblo aspira. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El representante del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)

Entonces, el representante del Grupo Parlamentario Mixto ¿desea hacer uso de la palabra?

El señor SANCHEZ AYUSO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quisiera exponer en una intervención breve la posición del Partido Socialista Popular, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto en relación con las líneas generales del proyecto de ley de Presupuestos.

En primer lugar, quería dejar constancia de un hecho: que la discusión de un tema tan importante como es el concerniente al Presupuesto, máxime cuando nos encontramos con la necesidad de una política económica para hacer frente a una crisis grave, ha tenido que hacerse muy rápidamente, tanto en el seno de la Ponencia como en el de la Comisión, dado que el Gobierno presentó el proyecto de ley muy tarde.

Nos damos cuenta de las dificultades que ha experimentado el Ministerio de Hacienda para confeccionar el Presupuesto, especialmente por presentarlo globalizado, cosa que es una novedad, pero también querríamos subrayar que hemos trabajado en condiciones de apresuramiento escasamente recomendables. Por otra parte, han limitado grandemente las posibilidades de una discusión en profundidad de los Presupuestos tanto la rigidez de nuestro actual Reglamento como la aceptación previa de las líneas generales del Presupuesto, consecuencia de los Pactos de la Moncloa.

La rigidez del Reglamento se manifiesta, entre otros factores, en la necesidad continua de, para demandar información, tener que efectuar enmiendas a la totalidad.

El «Pacto de la Moncloa», por otro lado, ha supuesto que estén aceptados «a priori» la tasa de crecimiento del gasto público, tanto el consuntivo como el de inversión, la magnitud del déficit total del Estado, el crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social, las cantidades transferidas a ella, etc. En su-

ma, las magnitudes globales que permiten apreciar la incidencia del sector público en la economía eran ya conocidas y previamente aceptadas a través del «Pacto de la Moncloa», de tal manera que lo que ha habido que hacer es analizar y debatir la distribución entre las secciones, además, por supuesto, de discutir los artículos generales referentes básicamente a los créditos de personal, a los créditos de inversiones, a las operaciones financieras y a las disposiciones concernientes a los organismos autónomos y a la Seguridad Social.

Por otra parte, quería señalar que, en cambio, no parece que se haya respetado en el proyecto de ley de Presupuestos la previsión según la cual la recaudación estatal aumentaría en un punto en términos de presión fiscal.

Me voy a referir ahora a algunos puntos en concreto, relacionados con las enmiendas presentadas por nosotros. En particular, a la Seguridad Social y a los créditos de personal. Hay otras enmiendas a las que no me voy a referir; por ejemplo, la presentada a la totalidad del Presupuesto de Agricultura, porque en el dictamen final de la Comisión se incluye al menos un incremento de 2.000 millones de pesetas para inversión con cargo a recursos de financiación exterior, lo que compensa en parte la necesidad de ampliar la dotación de dicha Sección, necesidad que motivó nuestra enmienda.

Examinando el Presupuesto de la Seguridad Social, se observa —y por ello presentamos una enmienda— que la falta de detalle en tal Presupuesto impedía apreciar clara y objetivamente su contenido, lo que se contradice con las afirmaciones del Gobierno de que los Presupuestos para el año 1978 iban a ser Presupuestos de cristal. He aquí un ejemplo importante de que esto no era así.

Por otra parte, y sin perjuicio de defender esta enmienda en su momento, realmente no puede decirse que se haya cumplido el artículo 148 de la Ley General Presupuestaria, en el sentido de que no hay un estudio demostrativo del coste de los servicios, lo que hace prácticamente imposible el análisis del Presupuesto-resumen.

En general, hay en todo este Presupuesto-resumen una falta de desglose de datos tal que hace muy difícil el análisis del Presu-

puesto, cuya cuantía económica, además, es extraordinariamente importante.

Quisiera ahora hablar de los créditos de personal, especialmente refiriéndome al artículo 8.º Es claro...

El señor PRESIDENTE: Perdone S. S.; este turno de intervenciones es sobre el carácter general del Presupuesto. Luego hay turnos correspondientes a las enmiendas de las Secciones y al articulado. Entonces, le ruego que si va a hacer una defensa de las enmiendas correspondientes al articulado las realice en su turno correspondiente, pues ahora no es el momento.

El señor SANCHEZ AYUSO: Señor Presidente, hay un problema. Cuando me estoy refiriendo aquí a los créditos de personal, lo estoy manifestando como un problema genérico del Presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Si está hablando de problemas genéricos, puede continuar en el uso de la palabra.

El señor SANCHEZ AYUSO: Es genérico, no es la defensa de una enmienda específica.

El señor PRESIDENTE: Entonces conforme.

El señor SANCHEZ AYUSO: Me refería a que en este artículo, que trata de las retribuciones de los funcionarios, hay apartados que se han incorporado al texto definitivo y que proceden de enmiendas presentadas por mi Grupo. Por ejemplo, la redacción referente a la suspensión de los grados iniciales.

También nos resulta satisfactorio que en el dictamen de la Comisión se congele la aplicación del Real Decreto-ley de 30 de marzo de 1977, dado que pensamos, y esto nos parece importante, que es precisa una ley, un Estatuto de la Función Pública, que contemple todos los aspectos de ella, incluidos los retributivos, como por otra parte ha solicitado la Comisión de Presupuestos a través de una moción.

Sin embargo, queríamos hacer constar dos claros problemas en la redacción final del proyecto de ley. Por un lado, no se admitie-

ron a trámite, por parte de la Mesa, enmiendas, entre ellas una nuestra, que aplicaba a los funcionarios la cláusula de salvaguarda de las limitaciones retributivas que se contienen en el Pacto de la Moncloa. Las retribuciones de los funcionarios se revisarán automáticamente, se decía en ella, si el crecimiento de los precios de consumo en el primer semestre de 1978 superara el 11,5 por ciento. El que esta cláusula no se contenga en la Ley de Presupuestos puede significar algo muy grave, y es que los funcionarios se consideren discriminados con respecto a los demás trabajadores.

Yendo al otro problema, quería destacar que este año el máximo de retribuciones permitidas por el Pacto de la Moncloa y el Decreto-ley subsiguiente podría repartirse entre los funcionarios de una forma lineal. Ese era el objetivo de las enmiendas, no solamente la de nuestro Grupo, sino las de otros grupos, y no han sido totalmente aceptadas porque se ha entendido que implicaban aumento de gasto, debido a la repercusión en los derechos pasivos. Pero consideramos que era básico, que era fundamental que con motivo de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos se eliminen, aunque sea a través de un proceso gradual, las diferencias tan grandes que existen entre las retribuciones de los funcionarios. La Comisión, siguiendo el informe de la Ponencia, ha reducido el abanico salarial entre los distintos índices de proporcionalidad, pero no se ha hecho nada en relación con las diferencias retributivas de funcionarios que se hallan en el mismo índice. Si nuestra enmienda se hubiera aprobado, para lo que se hubiera necesitado lógicamente ser admitida a trámite, se habría actuado en ese sentido.

Había otra enmienda, la del Diputado de la Unión del Centro Democrático señor Soriano, que tenía en cuenta este problema y que pecaba de inconcreción. Pienso que si el señor Soriano no la hubiera retirado (posiblemente por presión de su Grupo Parlamentario, que, desde luego, no la hizo suya) se podría, como dije en la Comisión, haber concretado la enmienda y de esta manera en la Ley de Presupuestos, si se hubiera aprobado una concreción de ella, figuraría una medida justa que significaría la reducción de las di-

ferencias existentes en el mismo índice de proporcionalidad. Para la concreción de esta posible fórmula se utilizaría en todo caso la explicación del voto cuando lleguemos al artículo 8.º de la Ley de Presupuestos.

Pero de lo que se trata, entre otras cosas, es de poner coto a la situación de privilegio de algunos Cuerpos en relación con otros, que llega al absurdo, tan corriente en nuestra Administración, de retribuir de forma totalmente dispar a funcionarios que desempeñan la misma función, pero que pertenecen a Cuerpos distintos.

Por último, quería destacar la necesidad, no cumplida totalmente en este Presupuesto, de regionalizar al máximo el gasto público, cosa que se comprende como una obligación dentro de la Ley General Presupuestaria.

Señoras y señores Diputados, voy a acabar mi exposición subrayando que el Presupuesto es un instrumento básico para poder satisfacer las necesidades colectivas de que tan necesitada está la sociedad española. Este Presupuesto todavía no es más que un indicio en ese sentido, pero yo rogaría que se convirtiera realmente el Presupuesto, en el futuro, en un instrumento de satisfacción de esas necesidades y en un instrumento redistributivo apoyado en un sistema tributario realmente progresivo. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Socialistas de Cataluña.

El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, una intervención muy breve en nombre del Grupo Socialistas de Cataluña, sólo para dejar constancia, como ya hicimos también en el debate de totalidad en la Comisión correspondiente, que si los Presupuestos Generales del Estado son uno de los instrumentos fundamentales de una política económica; que si en la situación actual de crisis económica esta política ha de estar dirigida a dar salida adecuada a esa situación, los Presupuestos Generales, por tanto, se convierten en un instrumento fundamental para la dirección de esta política económica.

Es obvio que los llamados «Acuerdos de la Moncloa» se insertan en esta alternativa de política económica propuesta por el Gobierno y aceptada, en tanto que principio de acción política económica, por la oposición. Ahora bien, lo que nosotros como socialistas entendíamos como pacto programático de control continuado en su ejecución y en su posterior desarrollo, creemos que está siendo incumplido por la práctica. Los llamados «Acuerdos de la Moncloa» no se están cumpliendo en sus aspectos fundamentales, y en lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado, como instrumento de política económica, tampoco han sido cumplidos.

Efectivamente, entraríamos en el tema de los problemas de política de rentas previstos en el «Pacto de la Moncloa», y los aspectos que se relacionan con esta política de rentas se contienen en los Presupuestos Generales del Estado y, concretamente, en la distribución de la masa salarial estatal y en los aumentos previstos en esa masa salarial estatal. Igualmente podríamos hablar del crecimiento del índice de presión fiscal previsto en un 1 por ciento de los «Acuerdos de la Moncloa», y no previstos así en los Presupuestos Generales, en el proyecto presentado por el Gobierno y en el proyecto que, en definitiva, se está discutiendo aquí hoy en este Pleno.

Igualmente podríamos dar idénticas razones en relación a la política de vivienda, de la enseñanza, al control y a la vigilancia de la gestión de la Seguridad Social; y, junto a todo ello, se mantiene en estos Presupuestos el financiar a través de ellos instituciones que nosotros entendemos que están ya obsoletas desde el punto de vista político y que económicamente son claramente inflacionarias y, por tanto, contrarias al «Pacto de la Moncloa». Aquí podríamos hablar de instituciones como el Consejo del Reino; podríamos hablar también de instituciones como el Instituto de Reforma Agraria, del cual hablaremos cuando defendamos la enmienda que hemos presentado y mantenido; y, por otro lado, aspecto que creemos también importante, de falta de claridad informativa en relación a elementos fundamentales de la política económica del Gobierno, centrada en

los Presupuestos; me refiero muy particularmente a la política industrial y a la falta o carencia de información prácticamente absoluta, en relación a los presupuestos del INI. Y, por otro lado, a la falta de claridad informativa importante en relación a la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales (AISS), donde particularmente el problema de las retribuciones es un problema grave y fundamental, que, como tendremos ocasión en su momento de argumentar, no se contiene en el informe o memoria presentado por el Ministerio de Hacienda.

En definitiva, también aquí creemos que se inserta, como elemento fundamental crítico de nuestras perspectivas y que se ha plasmado en enmiendas presentadas por nosotros, el elemento de la descentralización de las finanzas y de los gastos públicos del Estado.

Tanto el apartado I de los «Acuerdos de la Moncloa» como el III, 2.º, hablaban precisa y concretamente de este tema y los Presupuestos lo han obviado, han olvidado totalmente esta cuestión. Esto es aún más grave si se enlaza con la situación de las Haciendas locales, si se tiene en cuenta que en la previsión de los «Acuerdos de la Moncloa» el aumento de los costes de las Haciendas locales suponía el 8 por ciento, mientras que la previsión de inflación está en el 22 por ciento, y ello se inserta, además, en todo el proceso preautonómico.

Nosotros presentamos una enmienda al artículo 24 del texto articulado del Presupuesto, que finalmente ha podido convertirse, a través del consenso de la Comisión, en nuevo artículo 25.

Todas estas consideraciones las resumo en el incumplimiento por parte del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de lo que debía ser la política económica, y estos Presupuestos, evidentemente, son un instrumento de ella, y las resumo en las enmiendas presentadas y que defenderemos en su momento.

El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ha iniciado el señor Ministro de Hacienda su intervención con una definición, que completaría en otro punto de su intervención al decir que el Presupuesto es el observatorio ideal para poder comprender y contemplar la historia de una sociedad y las fuerzas que la condicionan.

El documento que tenemos ante nosotros expresa exactamente lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, en primer lugar cuál es el claroscuro de la actual situación del Estado, y, en segundo, la respuesta política que se da. La respuesta política está entre la reforma y el continuismo.

¿Cuál es el papel del Presupuesto? El papel fundamental de los Presupuestos Generales del Estado es el de informar de la actividad de los sectores públicos, es decir, del sector público propiamente dicho, de los organismos autónomos, de la Seguridad Social y de las Corporaciones Locales, de sus gastos y de sus ingresos, de cómo los obtiene, y, por otra parte, explica cómo se coordina esta actividad y con qué criterios se hace, pero el debate presupuestario no es sólo de información, en él se expresa la voluntad política del Gobierno y se expresan sus opciones.

En este sentido cabría hacerse una pregunta: ¿realmente este proyecto de Presupuestos que estamos examinando informa? Examinando la memoria presentada por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento del artículo 54 de la Ley General Presupuestaria nos encontramos con una autocrítica que ha sido repetida en el día de hoy: el retraso y la falta de detalle con que se han presentado los Presupuestos se debe a las elecciones del 15 de junio y a la posterior formación del Gobierno.

El pretexto realmente es débil, cuando la mayor parte del Ejecutivo sigue teniendo la misma composición. En estos momentos nos encontramos con que no sólo el Presidente del Gobierno sigue siendo el mismo de antes de las elecciones, sino también gran parte de dicho Gobierno. Resumiría esto diciendo que más que cambio de Gobierno ha habido cambio de camisetas dentro del mismo y no nos encontramos ante el Gobierno provisio-

nal con que soñaba Santiago Carrillo hace meses.

Problema más complejo que éste es el del retraso con que han llegado a la Cámara los Presupuestos. Nos ha llegado a la Comisión con retraso incluso uno de los documentos fundamentales, que es el anexo del programa de inversiones públicas, que fue encontrado por este Diputado en la Biblioteca del Congreso el sábado antes de vencer el plazo.

Ahora bien, el problema tampoco es solamente de plazo. En este año se ha aplicado por primera vez la Ley 11/1977, la General Presupuestaria, que evidentemente supone un avance importante. Es ésta una ley que tuvieron paralizada las últimas Cortes franquistas para que no se conocieran con detalle los Presupuestos de la Seguridad Social y no se ejerciera una labor de fiscalización parlamentaria.

Si los señores Diputados repasan los Presupuestos del año pasado se encontrarán con que la Seguridad Social el año pasado, concretamente, merecía media cuartilla de atención en el conjunto del Presupuesto, con una cifra que es casi la global de los Presupuestos Generales del Estado en singular. Sin embargo, esta ley no ha sido cumplida en su integridad; es una ley en la que se especifica una distribución territorial de la asignación de recursos —artículo 53, apartado 2— que no se nos ha entregado. Falta parte de la documentación prevista en el artículo 54, apartado 3, y en el artículo 55, y no hemos tenido la oportunidad de ver tampoco la documentación prevista en el artículo 91, referente a las Sociedades estatales, o aquellas que reciben subvención.

El valor informativo de los Presupuestos ha quedado, pues, enormemente reducido y no se ha resuelto tampoco con la comparecencia en la Comisión de algunos Ministros. Hago aquí salvedad expresa al Ministro de Educación y Ciencia, que ha tenido la cortesía de enviarnos posteriormente parte de la documentación que se le había pedido.

Por otra parte, son unos Presupuestos cuya generalidad impide entrar en los detalles y, además, en ellos hay temas graves e importantes como el tema de la AISS y Medios de Comunicación del Estado, que se han suscitado al necesario debate parlamentario.

Con estos Presupuestos iniciales, nos hemos encontrado que los debates en la Ponencia y en la Comisión han tenido que seguir esta línea. Con los Presupuestos que se han presentado no se podía hacer más que lo que se ha hecho; darles carpetazo, aplicar la ley de la mayoría, y conste que no me quejo de ello, porque es una ley que debe ser fortalecida en una Cámara que contiene, hoy por hoy, la esperanza democrática del país, pero sí señalar que realmente no ha habido posibilidad de entrar en detalles en la cuestión. Solamente nos hemos encontrado que cuando hemos pedido información se nos suministraba gota a gota parte de la documentación que solicitábamos con insistencia.

Por esta razón hemos mantenido nuestras nueve enmiendas a la totalidad de Secciones, para expresar cuál es la importancia de esa falta de información, con lo cual conseguimos, en algunos puntos, avances positivos, por ejemplo, el que la Ponencia y la Comisión acordaran, en moción, una reforma de los Estatutos de Clases Pasivas que hace que los señores Ministros, cuando cesen, tengan una indemnización por dos años y no se encuentren con una sinecura de por vida. También se ha aceptado nuestra protesta de hacer una transferencia de fondos para hacer efectiva la amnistía laboral; se ha mejorado la situación de la Universidad, e igualmente se ha corregido una transferencia negativa que quitaba autonomía y control a las Diputaciones provinciales, que es de esperar sean democráticas muy pronto, para darla a los Gobernadores Civiles y ello en un momento en que está planteado el tema de las elecciones municipales. Pero, en su conjunto, no se ha cambiado la estructura del Presupuesto, ni por los debates, ni tampoco por la posibilidad de negociación o de discusión.

Sin embargo, el problema tampoco es un problema de enmiendas; el problema es un problema de objetivos y, en este sentido, conviene, como se ha hecho aquí hoy, hacer algo de historia.

En los Presupuestos Generales del Estado, evidentemente, siempre hay un fondo consolidado importante; el punto de partida del Presupuesto son las obligaciones contraídas, en este caso, por un Estado cuyas características eran el no tener un plan riguroso presupuesta-

rio, el abuso sistemático de créditos extraordinarios, la financiación rígida, insuficiente y regresiva, unas Corporaciones Locales carentes de recursos y una Seguridad Social insuficiente y regresiva. Hasta ahora, las funciones del Presupuesto se pueden resumir en tres: en primer lugar, el tener una Administración capaz de sostener el aparato del Estado con un nivel de eficiencia mínima, salvo en lo que se refiere a las tareas represivas. En segundo lugar, producir los bienes y servicios no rentables para las empresas privadas, de tal modo que la actuación del sector público procure rentas externas para una distribución desigual de la renta a favor de los grupos hegemónicos que controlaban el Estado; y, en tercer lugar, producir beneficios directos a los grandes grupos oligárquicos a través de una política de exenciones, de bonificaciones y, especialmente, por medio de transferencias del Estado y de sus organismos, y también mediante la concesión de créditos oficiales a través de concesiones ventajosísimas.

Este es el modelo que se ha aplicado hasta ahora, y en este sentido cabe preguntar si cambia el actual Presupuesto respecto al pasado.

En primer lugar, hay un hecho importante, que es el de la cuantía global. Aquí se ha querido que se aproxime al del aumento del producto interior bruto. Eso es cierto; pero lo más importante de esa cifra, para que tenga valor político, es si va a ser respetada, porque nos encontramos —y lo vivimos en todo momento— con que la liquidación del actual Presupuesto es una liquidación de 190.000 millones de pesetas más, es decir, que frente al Presupuesto de 967.000 millones votado el año pasado, en éste hay un aumento del 19,8 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se burla sistemáticamente la soberanía del Parlamento, y se reemplaza también la recaudación fiscal por la máquina de emitir billetes, es decir, por el impuesto de inflación, que es un impuesto regresivo. En este sentido ha hablado también el señor Ministro de Hacienda del reparto equitativo de la crisis. Hay un aspecto importante en el cumplimiento de los «Acuerdos de la Moncloa», que es la igualdad entre impuestos di-

rectos e impuestos indirectos. El problema es que esta igualdad se va a considerar básicamente a través de un aumento en la recaudación del IRTP, que es regresivo.

También hay otro problema, y es que el aumento de presión fiscal, pese al endeudamiento exterior, se va a traducir en un aumento de 0,7 frente al punto que se acordó en la Moncloa, y en este sentido nos parece obligado señalar en estos momentos que uno de los objetivos esenciales de la consolidación de la democracia y lo que deben ser los Presupuestos democráticos es acabar con el deporte de lujo que es la defraudación de impuestos directos en España, que se eleva al 70 por ciento de la totalidad. Las medidas urgentes de reforma fiscal han de permitir que perdamos el triste puesto que tenemos en la cola de los países de la OCDE, en la que estamos por detrás de Turquía, Grecia y Portugal.

Con estos medios es imposible hacer una política avanzada desde el sector público. La democracia significa también que cada uno pague, según su capacidad, las cargas fiscales. Por eso resulta preocupante la situación actual, en la que unas medidas leves, que suponen un avance relativo, como son las de la reforma fiscal, se encuentren, en cierto modo, con el muro del dinero.

Querría hacer una referencia específica a la responsabilidad de algunos de los sectores más importantes de este país. Nosotros, que consideramos que las organizaciones empresariales tienen mucho que decir en este momento, manifestamos nuestra preocupación porque están llevando adelante una política asamblearia que contradice absolutamente la que aplican en el interior de sus empresas, y que, al mismo tiempo, están haciendo una presión sobre los órganos ejecutivos de la Administración del Estado en sentido absolutamente contrario.

Si democracia significa claridad, también debe significar respeto a la acción del Parlamento, y debe significar el que estas leyes sean aplicadas y no se bloqueen, como hasta ahora viene ocurriendo. En este sentido también queríamos nosotros manifestar nuestra preocupación por el retraso, no sólo de la presentación del proyecto de reforma fiscal

en esta Cámara, sino también por el desarrollo normativo y reglamentario, tanto de las medidas de reforma fiscal como de las medidas de reforma de la Inspección de Hacienda.

En cuanto al desglose del Presupuesto, el capítulo de personal ha bajado ligeramente, del 45,2 por ciento en el año 1977, al 44,3 por ciento. Realmente es una primera prueba de austeridad que el sector público aplica; pero esto no quiere decir —y es importante señalarlo— que el personal de la Administración esté bien pagado. El pluriempleo y el bajo nivel de productividad que se deriva de la desigualdad de salarios en el sector público se acompaña con la corrupción, y eso lleva a un deterioro cada vez mayor de la Administración. Para dar ejemplo, en este sentido los socialistas proponíamos el aumento lineal de las retribuciones en el sector público, y la no admisión de nuestra enmienda, por entender que implicaba un aumento de gastos, no nos ha permitido más que mejorar, en alguna medida, el proyecto inicial. Sin embargo, respecto a esto —y así lo manifestamos en un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno el día 24 de noviembre— entendíamos que era urgente constituir una Sección de las previstas en los acuerdos de la Moncloa, y, así, se ha constituido la Sección de retribución de los funcionarios públicos en el seno de la Comisión de Presupuestos, para poder proceder a una reforma profunda de la Administración, que no se limite, simplemente, a un desarrollo del Decreto-ley 22/1977.

Respecto al resto de los destinos de la actividad presupuestaria, lo que ha hecho la Comisión de Presupuestos ha sido la creación de Secciones que rompan con las características continuistas que tiene el actual Presupuesto.

En primer lugar están los gastos de capital, los que van a inversiones directas y que van teniendo cada vez menos importancia en el Presupuesto, lo cual se traduce en estos momentos en un déficit creciente de bienes y servicios públicos, y lleva a su vez a una regresiva distribución del gasto y a que la insuficiencia de infraestructura y equipamiento social produzca estrangulamientos en el país. Esto lo veremos en los próximos meses

con un problema tan complejo como el del transporte en las corporaciones locales.

En el sentido contrario están las transferencias que hace el Estado de fondos públicos a entes públicos o empresas privadas; esto se aumenta. No nos oponemos a las transferencias; lo que nos preocupa ahora es que estas transferencias no tienen un control real, no son discutidas con detalle en el Parlamento, y eso quiere decir que los grupos privados más poderosos siguen incidiendo decisivamente en emplear la infraestructura del Estado como una infraestructura de apoyo para aquellas actividades que no le son rentables.

Aquí entra el último problema general que presenta el Presupuesto, que es el de los gastos fiscales: esa red tupida de exenciones y bonificaciones existentes que supone alrededor del 40 por ciento de la capacidad contributiva actual y que se distribuye fundamentalmente a aquellos sectores en los cuales el capitalismo monopolista tiene más concentrados sus intereses.

Si añadimos a esta cifra de gastos fiscales las transferencias, nos encontramos con que todavía en este momento el Estado renuncia a ejecutar directamente un volumen similar al del Presupuesto, y ello, subvencionando a intereses privados que son —repito— los de los grandes grupos. Esto es una realidad que hace que, en estos momentos, aproximadamente el Presupuesto General del Estado sea la mitad de lo que podría ser.

En este sentido entran las otras dos Secciones previstas en el Acuerdo de la Moncloa. Nosotros hemos pedido su creación a la Comisión de Presupuestos. Estas Secciones son la de Transferencias y Subvenciones a organismos públicos y la Sección de Gastos Fiscales.

Frente a esto, los objetivos previstos en los Acuerdos de la Moncloa se han cumplido realmente en líneas generales, pero no son objetivos que permitan hablar de política del empleo. Permiten hablar de que se han aumentado en cierta medida las prestaciones frente al paro en un momento tan grave como este en que estamos, y que se ha aplicado el fondo de acción coyuntural a un desarrollo de la política de educación que puede generar empleo.

Pero esto no es una política de empleo ambiciosa ni a la altura de las circunstancias actuales. Salvo estos añadidos de última hora según lo pactado en la Moncloa, el Presupuesto es, en lo económico, hijo de políticas anteriores a este Gobierno, y en lo administrativo no supone una ruptura con el pasado. En estos momentos, el Gobierno ha repetido, pero sin innovar y en un momento en que las opciones de renovación deberían de reflejarse con claridad y audacia.

Frente a esto, ¿qué Presupuesto queremos los socialistas? En nuestra perspectiva, y dado que el debate sobre el Presupuesto es un debate sobre papel del sector público, hemos de acabar definiendo nuestra visión con respecto al mismo. Desde la cima de los Acuerdos de la Moncloa, hemos trabajado para que no fueran papel mojado, en primer lugar, luchando por explicar y hacer comprender al país la situación en que nos encontramos y los sacrificios que exige la salida de la crisis y, al mismo tiempo, procediendo al desarrollo parlamentario del trabajo a realizar.

Por el momento, sobre todo en el último mes, parece que el Partido del Gobierno entiende que en muchos terrenos es el único intérprete autorizado de lo que se debe hacer en esta Cámara, cuando lo desee el Partido del Gobierno, claro está. Sin embargo, esta creación de Comisiones impulsada por los socialistas en la Moncloa y después, entendemos que nos debe ayudar a conocer nuestra realidad para poder hacer un Presupuesto claro y eficaz; y aquí tiene pleno sentido el inciso. Hemos desarrollado una batalla política importante por que se cree otra Sección en el Congreso: la Sección de Política Monetaria prevista también en los Acuerdos de la Moncloa dentro de la Comisión de Economía.

Esto tiene importancia en el día de hoy, cuando el Gobernador del Banco de España ha explicado ayer a la prensa cuál es la situación en estos momentos de la evolución de la política monetaria; como saben Sus Señorías, se pactó en la Moncloa que se seguiría una senda cuyo punto medio sería un 17 por ciento de aumento de las disponibilidades líquidas.

No queremos hacer demagogia, pero es preciso corregir los fallos que ha habido, al menos, concretamente, en octubre. Según el in-

forme del Banco de España de este mes, las disponibilidades líquidas han crecido —en datos de fin de mes— el 2,2 por ciento y la media del año es 10,1. Entendemos que es preciso fijar la banda en la que deben moverse y, además, plantear una política monetaria en la que los que gobiernan tengan un control parlamentario, fundamental en una sociedad democrática. Esto es aún más importante —como sabe el señor Ministro de Economía— cuando nos encontramos con un sector público raquíptico y sin posibilidad de hacer política fiscal. Este instrumento es precioso.

En cuanto al tema de la homologación, ésta debe ser real con los países europeos. No solamente debemos homologarnos en algunos aspectos, sino también en el sentido de hacer del sector público un sector decisivo en la actuación económica y social, capaz de ser un núcleo impulsor en la consolidación de la política económica que requiere la democracia, no un sector subsidiario, como es ahora, incapaz de garantizar la gratuidad de la enseñanza, que favorece las autopistas y la motorización privada frente al transporte colectivo, que es incapaz de proporcionar viviendas y eliminar la especulación y que tampoco consigue una defensa nacional como la que el país requiere. Hemos de hacer un sector que sirva, en primer lugar, para redistribuir la renta con medidas que garanticen prestaciones adecuadas, que permita la descentralización del gasto público, avanzando paralelamente en el proceso autonómico y en la política económica y que tenga también un control racional del gasto con la debida publicidad y el detalle preciso, con la posibilidad de valorar la eficacia y la oportunidad del mismo.

Además, esta política del gasto público tiene una dimensión que no conviene ignorar en una situación como la actual de crisis mundial y española, que van para largo. Las fuerzas políticas y el país tenemos que proceder en estos momentos a revisiones profundas, yo diría casi desgarradoras, sobre el modo de vida actual. El debate sobre la energía que se tiene que producir en las Cortes lo probará. En este sentido, es preciso desarrollar todo tipo de fórmulas de consumo

colectivo que den una prestación adecuada de servicios sobre la base de la solidaridad y la colaboración, rompiendo con el modelo de desarrollo del «consume y cállate».

La democracia española ha de consolidarse con estas reformas y para comprenderlo basta con mirar alrededor de nosotros y examinar cuáles son los grandes debates públicos.

La democracia española ha de consolidarse con estas reformas y para comprenderlo basta con mirar alrededor de nosotros y examinar cuáles son los grandes debates públicos en el mundo. El primero es el de la energía, con todo lo que ello conlleva. La política económica y presupuestaria de este año no contempla desgraciadamente estas necesidades, porque —repito— el Gobierno no es capaz de imaginar con fuerza y vigor soluciones para las mismas.

El debate del Presupuesto, por tanto, señores Diputados, va a ser resuelto por la fuerza de los votos y con la premura del plazo que se acaba, pero para los socialistas esta cita no es hasta el 15 de octubre del año que viene. Las secciones creadas para el control del gasto público y para el conocimiento real de la Administración del Estado han de comenzar a trabajar en enero y la fiscalización del gasto y de sus criterios básicos, así como el control de los créditos presupuestarios, son elementos clave para introducir un nuevo tipo de moralidad política pública en España.

La observación con la que he iniciado mi intervención no tiene un valor meramente estético, sino profundamente político. En estos momentos tenemos ante nosotros opciones básicas que se traducen en el Presupuesto: una, seguir como hasta ahora, con algunos retoques superficiales; otra, optar por una democratización real y profunda de la sociedad y, por consiguiente, del Estado. Nuestra opción, la de los socialistas, es la segunda.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados.

Concedida la palabra a los representantes de los Grupos Parlamentarios de Unión de

Centro Democrático y de la Minoría Vasca, que no hicieron uso de la misma, dijo:

El señor PRESIDENTE: Pasamos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento, a la discusión y votación de las enmiendas presentadas a la totalidad de determinadas Secciones.

De conformidad con los deseos manifestados por los representantes de los Grupos Parlamentarios, estas enmiendas se han agrupado, a efectos del debate, de la manera siguiente: primero, va a ser discutida y votada la enmienda a la totalidad de la Sección 2, que corresponde al Consejo del Reino. Después van a ser debatidas las enmiendas correspondientes a la Sección 11, Presidencia del Gobierno; 17, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; 18, Ministerio de Educación y Ciencia; 20, Ministerio de Industria y Energía; 24, Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 26, Ministerio de Cultura, y 31, Gastos de diversos Ministerios.

Posteriormente, con independencia de esta agrupación, corresponderá el turno a la enmienda a la Sección 32, «Obligaciones de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales», y, finalmente, las enmiendas a la totalidad del Presupuesto-resumen de la Seguridad Social, por orden de presentación de las distintas enmiendas.

Las intervenciones se adecuarán, en el debate correspondiente a estas enmiendas a la totalidad, a lo previsto en el artículo 105. En consecuencia, pasamos a la primera de las enmiendas que corresponde a la totalidad de la Sección 2, Consejo del Reino, la número 209, presentada por el Grupo Socialista del Congreso.

Tiene la palabra el representante del grupo enmendante, señor Múgica Herzog.

El señor MUGICA HERZOG: Señoras y señores Diputados, dos minutos simplemente para un tema que no vale la pena, aunque sí valen los 17.155.000 pesetas que se nos pide. Cuando se planteó el debate sobre el Consejo del Reino, los socialistas no participábamos en el mismo; no participábamos porque se trataba de un anacronismo medieval y así lo afirmábamos. Nadie en la Ponencia

parece haberse pronunciado por su mantenimiento; entonces, ¿por qué se incluye?

El formalismo del Gobierno por mantener en pie un edificio en derribo resultaría gratuito si no se nos pidieran varios millones de pesetas. Entonces, en estos momentos iniciales, pensábamos que por parte de algunos Diputados de UCD se trataba de mantener el Consejo del Reino, como un gesto de homenaje a sus orígenes. Por parte de algunos otros Diputados de UCD se podía pensar que de lo que se trataba era de que los Diputados de Alianza Popular no ocupasen en su totalidad el Consejo del Reino.

Señores Diputados de la cuasi mayoría, ¡podéis estar tranquilos en relación con los Diputados de Alianza Popular! ¡Bastantes de vosotros sois intercambiables! Muchas gracias. (*Prolongados rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el defensor del dictamen, señor Bravo Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Los Presupuestos Generales del Estado se formulan por el Gobierno y reflejan las obligaciones económicas que el Estado y sus Organismos autónomos han de satisfacer para cumplir las obligaciones derivadas del régimen legislativo en vigor y de las diversas opciones que en el desarrollo de los servicios y actividades que tiene encomendados estime el Estado pertinentes.

Por consiguiente, los créditos de cada Departamento responden a las estructuras legales vigentes.

La ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, Ley Fundamental aprobada por referéndum, mantiene en vigor el Consejo del Reino, que se rige por su Ley Orgánica de 22 de julio de 1967.

Hasta tanto no se apruebe la Constitución o se suprima por la vía legal correspondiente el Consejo del Reino, el Presupuesto debe contener los gastos que se consideren necesarios para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas.

La supresión del Organismo, naturalmente, daría lugar a la eliminación o disminución proporcional de los créditos consignados en los Presupuestos. La postura, por tanto, de

mi Grupo Parlamentario no es un problema de formalismo, es un problema de coherencia política y legal.

Mi Grupo Parlamentario no plantea desde aquí la defensa o el ataque a la permanencia de un órgano como el Consejo del Reino. Dice simplemente que, en tanto exista legalmente, mediante una ley adjetiva y temporal como es la de Presupuestos, no se puede cambiar la legislación sustantiva. Por todo ello, señores Diputados, solicitamos el voto favorable al mantenimiento del texto del proyecto de ley de Presupuestos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún representante del Gobierno? (*Pausa.*)
Procedamos a la votación de esta enmienda.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Solicito dos minutos para que se recuperen las llaves.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante dos minutos para que los olvidadizos puedan recuperar las llaves. Les ruego no abandonen el salón.

Después de una breve interrupción, dijo

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la enmienda formulada respecto a la Sección 2, Consejo del Reino, por el Grupo Socialista del Congreso.

Después de la votación de esta enmienda, en caso de no obtener mayoría, se votará la Sección correspondiente del proyecto.

De acuerdo con el sistema electrónico, aquellos que voten a favor de la enmienda ya saben cómo tienen que introducir la llave. (*Pausa.*)

Está pasando el tiempo abierto para la votación. (*Pausa.*)

Resultado: 287 votos emitidos; a favor, 134; en contra, 150, abstenciones, tres.

Queda rechazada la enmienda formulada a la Sección 2, Consejo del Reino.

Ahora procedemos a votar la Sección 2, Consejo del Reino, incluida en el proyecto de ley de Presupuestos.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, habíamos entendido que se

iban a producir las votaciones positivas al final, y que ahora se iban a votar las enmiendas. Queríamos aclarar definitivamente si se va a votar ahora como está haciendo la Presidencia, o ha sido un error o equivocación.

El señor PRESIDENTE: Ha sido un acuerdo de la Mesa que se procediera así. Se reanuda la votación.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Señor Presidente. ¿Quiere repetir qué se vota?

El señor PRESIDENTE: Se está votando la Sección 2 del Presupuesto, correspondiente al Consejo del Reino, no la enmienda, sino la Sección.

Se inicia la votación. (Pausa.) Resultado de la votación: 302 votos emitidos; 164 a favor, 135 en contra y tres abstenciones.

Queda aprobada la Sección 2 del Presupuesto, correspondiente al Consejo del Reino.

Pasamos ahora, a continuación, a la discusión y posterior votación de las enmiendas correspondientes a las Secciones 11, Presidencia del Gobierno; 17, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; 18, Ministerio de Educación y Ciencia; 20, Ministerio de Industria y Energía; 24, Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 26, Ministerio de Cultura, y 31, Gastos de diversos Ministerios.

El Grupo Parlamentario enmendante tiene la palabra.

El señor LOZANO PEREZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me presento ante Sus Señorías para defender la agrupación de las siete enmiendas a la totalidad de siete Secciones, tal como ha informado el señor Presidente del Congreso.

Para la defensa de estas enmiendas tengo que partir de un doble enfoque. De un enfoque general sobre cuál es el espíritu que preside el planteamiento por parte del Grupo Socialista del Congreso de estas enmiendas, y de un enfoque especial, en relación a cuáles son los criterios que nos mueven a presentar la enmienda para cada una de ellas.

El fundamento general es claro. Se trata, señoras y señores Diputados, de determinar qué es un Presupuesto en un Estado democrático; qué función debe cumplir todo ese

conjunto de números que se someten a nuestra consideración y, en su caso, a nuestra aprobación. Y, en efecto, si el Presupuesto es un mero conjunto de números sin ninguna otra finalidad, yo tengo que aceptar que las enmiendas del Grupo Socialista del Congreso carecen de fundamento. Pero es que, a nuestro juicio, no debemos conformarnos con esa serie de números, números fríos, números que no dicen nada, absolutamente nada, porque, en definitiva, en un sistema democrático —y en esto tenemos que diferenciarnos del anterior— un Presupuesto es bastante más que todo eso.

El Presupuesto es la cuantificación económica de la política del Estado, política cuantificada en números que debe ser aplicada por el Gobierno, previa la aprobación por nosotros, en cuanto que nosotros somos los representantes del pueblo y, consiguientemente, tenemos la última palabra para determinar si esos criterios políticos y si los recursos que se van a intervenir en hacer frente a esos criterios políticos son los correctos o, por el contrario, no merecen nuestra aprobación.

Resulta así que un Presupuesto democrático debe tener dos requisitos fundamentales: en primer lugar, explicitar los criterios políticos que determinan cada uno de los gastos que en la presentación del Presupuesto se pretenden realizar; y, en segundo lugar, la aprobación por nuestra parte, aprobación —y esto es muy importante— que, naturalmente, no debemos producir en el vacío. No debemos dar nuestro sí sin conocer, sino que, por el contrario, tiene que ser previo el conocimiento tanto de esos criterios que han debido ser explicitados como de los fundamentos que cada uno de los gastos, para los que se nos pide el visto bueno, deben tener.

La aplicación de estos criterios es la que determinará la diferencia entre un sistema totalitario, en el cual las Cortes aprueban lo que les echen, y un sistema democrático, en el que nosotros, como representantes del pueblo, queremos conocer y queremos valorar. Y el Gobierno está obligado a informarnos y a rendirnos cuentas de su gestión económica, de su valoración económica, de su gestión política en estos momentos.

Estos que acabo de exponer no son sólo criterios del Grupo Socialista del Congreso, sino que, por el contrario, se encuentran explícitos y bien explícitos en la Ley número 11 de 1977, por lo que son los criterios legales que deben presidir la actuación del Gobierno, ley hibernada durante las Cortes franquistas, precisamente para evitar que en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se explicitasen todos aquellos criterios políticos que hoy reclamo en nombre del Grupo Socialista del Congreso y en cuya exposición de motivos se señala: «Las clasificaciones de los gastos deberán ser objeto de especial atención, con el decidido propósito de que el documento presupuestario ofrezca la mayor información desde todos los ángulos en que puede ser analizado y enjuiciado». Y sigo: «Por último, para el estado presupuestario de gastos se consagra la distribución geográfica de los mismos, para adoptar cualquier política de proyección territorial». Se anota asimismo, por último, dentro de esta exposición de motivos: «La riqueza informativa que, en lo sucesivo, ha de ofrecer la documentación anexa a los Presupuestos Generales del Estado, que ilustrará el juicio del Órgano Legislativo».

No sólo en la exposición de motivos, sino en los artículos 53 y 55, en relación con la regla 3.ª del 54, se contienen claramente cuáles deben ser los documentos que se deben acompañar a los Presupuestos Generales del Estado y la forma que tienen que tener estos documentos.

Pues bien, señoras y señores Diputados, en la documentación enviada a la Comisión de Presupuestos no figura, en absoluto, la especificación de los objetivos de cada gasto, que exige el artículo 53, norma 1.ª, apartado c) de la Ley General Presupuestaria; no existe una distribución territorial del gasto, tal como exige el mismo artículo 53, en su norma 2.ª; no se nos ha enviado la Memoria, puesto que el documento que se titula como tal no es más que un simple resumen de las partidas que componen el gasto, sin especificación de las metas que se pretenden perseguir con cada uno de los gastos cuya aprobación se nos solicita. Por último, no existe una liquidación del Ejercicio anterior, ni un avance del actual.

Pero además —y esto es lo más importante— la documentación en la Comisión de Presupuestos ha sido recibida por entregas, como aquellas novelas que también se entregaban como tales y que cada vez, como esas mismas novelas, aunque por motivos diferentes, han ido encogiendo el corazón de por lo menos los Diputados Socialistas, al ver la penosa información que si no nos hacía llorar es porque no teníamos tiempo para ello, tratando de discernir cuáles eran los criterios que inspiraban la política del Gobierno.

Además, señores Diputados, los números que se nos han mandado son totalmente absurdos, casi derivados de una ciencia hermética que a algunos de nosotros ha hecho pensar que en su preparación, más que un intento de enviar documentación a las Cortes, los que la han preparado han estado haciendo oposiciones a cabalistas mayores del Reino, pues no sabíamos muy bien si de cábala o de alquimia se trataba con tanto número indescifrable, carentes en absoluto de contenido.

Para solucionar estos problemas, los socialistas hemos propuesto y la Comisión ha aceptado que fuesen llamados los señores Ministros para explicarnos cuál era esa política. La venida de los Ministros nos ha hecho constatar que en Ubeda debían sentirse muy tristes sin sus cerros, porque todos estaban en la Comisión de Presupuestos para que los señores Ministros pudieran salirse por ellos cuando quisieran. Y ellos lo han hecho a modo, porque en absoluto nos hemos podido enterar, ni se nos ha aclarado, cuáles eran los criterios que los señores Ministros tenían al proponernos la aplicación de esos gastos.

Hemos conocido, señoras y señores Diputados, y lo hemos conocido muy bien, cómo se va a potenciar la música alsaciana en Alsacia, pero no nos hemos enterado de qué política sobre bibliotecas públicas se va a llevar a nivel de Estado español. Y éste es el botón que sirve de muestra para todo lo que se nos ha dicho en la Comisión de Presupuestos, que, desde luego, ha sido absolutamente insatisfactorio, pues ni una sola luz se ha abierto con relación a las cuestiones que el Grupo Socialista del Congreso tenía planteadas.

A la vista de estas críticas se preguntarán los señores Diputados que por qué sólo estas enmiendas y no una enmienda a la totalidad. Muy fácil: de la relación que el señor Presidente del Congreso ha hecho —a la cual después me referiré para tratar punto por punto, dentro de los criterios específicos, cuáles son las ideas que el Grupo Socialista del Congreso tiene para enmendar—, resulta claro que hemos enmendado aquellas secciones que más sangrantemente atentaban contra la claridad en lo que se refiere a objetivos políticos que el Gobierno pretende cumplir con los números que nos ha enviado. Se trata de unas secciones con una incidencia muy directa en la posible salida de la crisis económica, en los medios que el Gobierno quiere poner —y para lo cual nos pide que le aprobemos recursos— para empezar de nuevo el relanzamiento económico. Y en nada de esto, en ninguna de las secciones, ni en Obras Públicas y Urbanismo, ni en Transportes y Comunicaciones, ni en Industria ni en tantas otras, hemos podido obtener información sobre el particular.

Estas, señoras y señores Diputados, son las razones generales que movieron al Grupo Socialista del Congreso a no presentar su enmienda a la generalidad. Hay razones específicas para cada una de las secciones en concreto. Así, para la Presidencia del Gobierno, Sección 11, enmienda número 212, porque, señoras y señores Diputados, consideramos excesivos y sin fundamento los gastos cuya aprobación se nos pide; consideramos excesivo y sin fundamento que los gastos reservados y de libre disposición de Presidencia del Gobierno pasen de doce a setenta y ocho millones de pesetas sin explicación del fundamento de semejante incremento. Y los consideramos improcedentes en tanto en cuanto hay dotación tanto a centros de investigaciones sociológicas como para subvenciones a empresas de comunicación social, que nosotros, los Socialistas del Congreso, nos preguntamos que por qué esto radica en la Presidencia del Gobierno, salvo que con esos centros de investigaciones sociológicas y con esas subvenciones a empresas de comunicación social de lo que se esté tratando sea precisamente de condicionar desde la propia Presidencia del Gobierno el

resultado de los estudios que estas empresas vayan a hacer.

Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Sección 17, enmienda del Grupo Socialista número 216, encontramos innumerables defectos, de entre los cuales, y para no cansar la atención de Sus Señorías, quiero destacar aquí que no se cuantifica la política en suelo y en vivienda, política tan importante en tanto en cuanto el chabolismo, la insuficiente vivienda, es una de las lacras fundamentales que existen en la sociedad española. Y política fundamental, en tanto en cuanto los recursos a invertir precisamente en suelo y en vivienda van a servir como uno de los modelos fundamentales —o así lo creemos nosotros al menos— para el relanzamiento económico del que todos hablamos y del que tenemos que empezar a poner los medios oportunos y a explicar aquí el alcance y el fundamento de esos medios para que sean compartidos entre todos.

Y tampoco, señoras y señores Diputados, resulta del Presupuesto de Obras Públicas y Urbanismo una aplicación de los criterios adoptados en los acuerdos de la Moncloa, en relación a la política que se tiene que llevar en este Ministerio. Y no resulta, puesto que no se prepara dotación para la formación de un inventario de suelo urbanizado y urbanizable. ¿Cómo se podrá realizar este inventario sin la suficiente dotación de medios materiales y humanos para llevarle a cabo? No se presupuesta dotación para la adquisición de suelo para la promoción de viviendas sociales; no se detalla dotación para la aplicación del Reglamento de Expropiaciones Forzosas, que, según los «Acuerdos de la Moncloa», debe estar aprobado antes del próximo 31 de marzo, aprobación que, al no existir la correspondiente dotación presupuestaria para su posible aplicación, va a resultar, como tantas otras veces ha resultado en nuestra historia, que lo que se hará será una ley —en este caso un decreto, ya que se trata de una norma reglamentaria— que no se va a poder aplicar porque no va a haber medios económicos para aplicarla.

Dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, Sección 18, enmienda número 217 del Grupo Socialista del Congreso, encontramos que no existe criterio sobre cómo se va a lle-

var la política educativa en un estado democrático. ¿Acaso la política educativa en 1978 va a ser la misma que se ha seguido en España durante estos últimos cuarenta años? Porque al no señalar criterios, nos tememos que vaya a ser así, y si es así es precisamente por lo que establecemos esta enmienda a la totalidad de la Sección correspondiente, porque no estamos dispuestos —y, por supuesto, no voy a hablar ahora de los criterios sobre educación que tiene el Grupo Socialista del Congreso, que atañen a la Comisión correspondiente— a dotar de los recursos económicos necesarios para que la política educativa de estos cuarenta años vaya a seguir llevándose a cabo.

Hay una cuestión muy importante también dentro del Ministerio de Educación. Resulta que el crédito destinado a nuevas construcciones universitarias estatales disminuye aproximadamente de 4.130 millones de pesetas a 3.794 millones, señoras y señores diputados, sin que, como en tantas otras partes, se nos explique por qué este descenso en la construcción de Universidades del Estado. ¿Es que hay en España suficientes Universidades? ¿Es que estamos alcanzando ya el crecimiento cero o menos cero en el desarrollo de nuestra enseñanza universitaria? Los Socialistas del Congreso, señoras y señores Diputados, creemos que no.

Dentro del Ministerio de Industria y Energía, Sección 20, enmienda número 222, tengo que concretar todas aquellas referencias que, a lo largo de esta intervención, he venido haciendo sobre el hecho de que es necesario especificar cuáles van a ser los criterios que, en un sector tan importante como el industrial, piensa llevar el Gobierno para dar salida a la crisis económica en la que hoy está inmerso el Estado español. No existe ni uno sólo de estos criterios; no existe un criterio relativo a un plan de energía; no existe un criterio relativo a qué industrias son las que se consideran convenientes, a cómo se van a apoyar, si es que conviene apoyar, industrias de cabecera; en definitiva, cuál va a ser la política industrial que el Ministerio de Industria y Energía va a llevar durante el ejercicio de 1978.

Pero es que, además, no se nos presentan los Presupuestos exactos, desde el momento

que no se nos envía ninguna documentación relativa al Instituto Nacional de Industria, para el cual, sin embargo, se nos pide una cuantiosa subvención, superior a los 10.000 millones de pesetas, sin que, en definitiva, podamos saber, aprobando esa subvención, qué es lo que estamos apoyando y cómo lo estamos apoyando. Y se me ocurre recordar una anécdota vivida por mí cuando, hablando con un representante del Instituto Nacional de Industria de una empresa cuyo sector había obtenido pingües beneficios en general durante el año 1973 y, sin embargo, esa empresa había perdido dinero, a una pregunta mía relativa a cómo era posible que, habiendo ganado dinero todas las empresas del sector, en el Instituto Nacional de Industria se hubiese perdido, me contestó: Es que en el Instituto Nacional de Industria no estamos para ganar dinero. Curiosa respuesta que hace que los déficit del INI tengan que ser pagados por todos los españoles, sin que aquí, en las Cortes, podamos determinar si hay o no problemas de gestión en las empresas del INI, si en el INI se puede ganar dinero o no con otra administración y en qué empresas es posible esto.

Enmienda número 228, relativa a Transportes y Comunicaciones, correspondiente a la Sección 24. Con relación a Transportes y Comunicaciones, dos problemas fundamentales detectamos en el Presupuestos los Socialistas del Congreso. En primer lugar, tal como sucede con el INI en lo que se refiere al Ministerio de Industria y Energía, podemos decir con relación a la RENFE en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyas cuentas nos son desconocidas y, sin embargo, es un organismo para el cual se nos pide subvención. En segundo lugar, que no existe de estos Presupuestos la más mínima idea política en lo que se refiere a transporte público de viajeros, sector que está en crisis, sector sobre el que el Gobierno tiene que plantear decisiones rápidas y que, sin embargo, ni una sola resulta de los Presupuestos que nos han sido enviados.

Por último, antes de entrar en el grueso del asunto, en el Ministerio de Cultura, Sección 26, enmienda número 231, se nos piden subvenciones para organismos y entidades que de él dependen, cuando en estos momen-

tos estamos estudiando créditos extraordinarios para algunos de estos organismos con los cuales, al menos los Socialistas del Congreso, no estamos de acuerdo, precisamente por la falta de claridad contable, precisamente por la falta de controles en relación al gasto, y aquí en los Presupuestos para 1978 seguimos exactamente igual que estábamos con anterioridad.

Y llegamos, señoras y señores Diputados, al gasto de los diversos Ministerios, Sección 31, enmienda número 233. He querido traer el libro de los Presupuestos porque hay algunas partidas cuyo conocimiento quizá convenga a las señoras y señores Diputados para saber hasta qué punto se va a votar algo absolutamente desproporcionado en un capítulo que viene a ser un capítulo de «Varios», sin el más mínimo fundamento, dejando todo no ya oscuro, como en el resto de los Presupuestos, sino, además de oscuro, a disposición, en la mayor parte de los casos, del señor Ministro de Hacienda para que con este dinero pueda hacer aquello que mejor le parezca.

Resulta que se nos pide la aprobación de un crédito de 80 millones de pesetas para la racionalización y mejora del control del gasto público. Señoras y señores Diputados, 80 millones de pesetas para mejorar y racionalizar el gasto público no es nada, y no es nada más que un engaño para que en la rúbrica figure que se va a mejorar algo que con ese dinero es absolutamente inmejorable.

Y llegamos a que para atender el costo del régimen de complementos y otras remuneraciones de los funcionarios de carrera se nos pide que aprobemos 3.500 millones de pesetas, complemento de funcionarios que, naturalmente, no los perciben todos y, sobre todo, como todos sabemos, no los perciben, ni muchísimo menos, en la misma cuantía.

También, y para personal laboral, se nos dice lo siguiente: Para satisfacer los devenidos y diferencias que origine la aplicación de disposiciones legales, etc., crédito a transferir o a adscribir en su caso, por acuerdo del Ministerio de Hacienda, a los servicios cuya dotación resulte insuficiente para el pago de las citadas obligaciones. Y este crédito que el Ministerio de Hacienda puede

adscribir para quienes resulte insuficiente es ni más ni menos que 3.800 millones de pesetas.

Pero, señores, ¿con qué se ha tirado al hacer los Presupuestos Generales del Estado cuando se teme que para personal van a faltar ni más ni menos que 3.800 millones de pesetas? ¿Con qué criterios técnicos se han elaborado esos Presupuestos?

Y dentro de este gasto de diversos Ministerios, así todo (no quiero cansar más su atención, señoras y señores Diputados), hasta un total de 118.000 millones de pesetas. El 10 por ciento del Presupuesto para gastos de diversos Ministerios con idéntica fundamentación que la que acabo de exponer a Sus Señorías.

Cobran ahora, espero, total vigor los planteamientos que he hecho a ustedes sobre si aquí se trataba de hacer la cábala o de resolver un jeroglífico; jeroglífico en el que tengo que reconocer que los Socialistas no estamos muy duchos, porque no nos va el lenguaje hermético, sino que, por el contrario, nos va la claridad, claridad sobre todo cuando se trata de unos Presupuestos como los actuales, que son los primeros que establece la naciente democracia en el Estado español y en los cuales, precisamente por eso, tanto el Gobierno al presentarlos como nosotros al enfrentarnos con su aprobación o rechazo debemos dar una clara muestra de seriedad y de coherencia con esta democracia que todos queremos, democracia que creemos que empieza por la claridad en la gestión financiera de la Administración Pública.

Y para terminar quiero salir al paso de una posible afirmación que se haga con posterioridad, temiéndome que se presente ante ustedes, ya que fue alegada en la Comisión de Presupuestos correspondiente. Señoras y señores Diputados, no es en absoluto válido decir que devolver al Gobierno las secciones enmendadas a la totalidad por el Grupo Socialista producirá el colapso económico de la Administración Pública. Y no es válido decir esto porque están previstos los mecanismos legales oportunos para que se produzcan las prórrogas del Presupuesto en vigor hasta tanto el Gobierno cumpla con aquellos requisitos a los que está obligado, de informarnos con toda claridad sobre cuáles

son estos Presupuestos. Y tampoco es válido decir, como se ha alegado en la Comisión de Presupuestos, que devolver estos Presupuestos al Gobierno supone que se queden sin cobrar los funcionarios públicos la paga correspondiente al próximo mes de enero, no sólo porque la prórroga legalmente prevista haría que pudiesen cobrar, sino porque, en definitiva, un crédito extraordinario para atender a ese pago arreglaría el problema y nosotros nos enfrentaríamos con un crédito extraordinario fundado y no con la serie de créditos extraordinarios que se nos están presentando para su aprobación y cuyas cuentas, señoras y señores Diputados, los socialistas no alcanzamos en absoluto a comprender. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En defensa del dictamen tiene la palabra el señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados: la finalidad de mi intervención es muy clara, es señalar, inequívocamente, la postura de Unión de Centro Democrático en mantener el dictamen de la Comisión de Presupuestos y, por tanto, rechazar las enmiendas defendidas por el representante del Grupo Socialista del Congreso.

Espero que el número de decibelios baje en mi intervención. He escuchado con notable atención e interés, yo diría que con simpatía, las vibrantes manifestaciones de mi querido compañero. Me ha tranquilizado ver en un momento que la posible desesperación al enfrentarse por primera vez con un documento tan complicado, ciertamente lo es aquí y en cualquier país occidental, como los Presupuestos, no haya llegado al extremo del paroxismo, de caer en una actitud de llorar, que sería de todos lamentable.

Mi finalidad, por tanto, es muy concreta. No voy a hacer un discurso. Eso sería robarle el papel al señor Ministro de Hacienda que ya lo ha hecho. Creo que tienen que tener en cuenta toda una serie de precedentes para no repetir, para no hacer esta sesión demasiado cansada. Estos precedentes son, como es lógico, primero, el proyecto del Gobierno; en segundo lugar, el trabajo de la Ponencia, donde debo decir, porque fui po-

nente, que hemos llegado a muchos puntos por unanimidad, hemos llegado al consenso sin pasar por la vía del sincretismo, hemos mantenido nuestra posición ideológica y, sin embargo, hemos encontrado un punto en el que todos estábamos de acuerdo.

Por último, hay que tener en cuenta las intervenciones habidas en el seno de la Comisión por los Ministros que acudieron allí y que dieron una puntual e implacable información y, por supuesto, las intervenciones que han tenido lugar aquí, en esta Cámara, en los debates de totalidad.

Dicho esto, he de afirmar también que no voy a cansarles a ustedes con la enumeración detallada de las mil y una partidas que constituyen este documento, ciertamente complejo, que es el Presupuesto. Trataré de reconducir las afirmaciones que se han hecho, también en algunas líneas maestras, y trataré de ilustrarlas porque quizá quien hace un cesto hace ciento y un ejemplo vale por mil teorías:

Dos han sido fundamentalmente las observaciones que se han hecho, y al hilo de ellas trataré también de concretar en la medida de lo necesario y en la medida de lo indispensable, por un lado, la queja, amarga queja, acerca de la falta de claridad y de la insuficiente información. Yo repetiría, ya se ha dicho aquí, y lo voy a hacer simplemente como una alusión de pasada, que éste es el primer Presupuesto en el que se aplica, y se aplica cumplidamente, la Ley General Presupuestaria.

No tengo los dones de adivino de mi querido compañero del Grupo Socialista para saber cuál fue el motivo de la entrada en vigor precisamente de la Ley 11/1977, que al parecer se cita ahora así, porque para acudir solamente a uno de los ejemplos que ha citado, concretamente algo tan grato para el que habla como la distribución territorial de los gastos, con la complejidad que eso supone y que yo deseo que en breve se lleve a la práctica, la Disposición Transitoria primera establece una aplicación gradual del tema y por eso, por su complejidad, quizá no ha habido tiempo todavía para aplicarla; pero que conste que al presentar los Presupuestos, como se ha hecho esta mañana, y como se ha hecho en su momento debido al pre-

sentar el proyecto correspondiente a estas Cortes, no se ha hecho más que aplicar la Disposición Transitoria primera en correlación con el artículo correspondiente, citado por mi querido compañero.

El problema de la información no es que sea escasa. Yo creo que tiene, aunque sea paradójico, otro problema. La información que se ha entregado es bastante voluminosa. Lo que sucede es que es difícil de digerir. Entiendo que precisamente en estos ejercicios de precalentamiento, característicos de esta situación que está dominada por los pre, preconstitucional y preautonómico, en estos ejercicios de precalentamiento el Grupo Socialista, al enfrentarse con los Presupuestos, haya tenido alguna dificultad al digerir esa información, porque la información corresponde a un documento altamente tecnificado. A veces la gente llega a la música clásica a través de un arreglo del difunto Waldo de los Ríos. Y es un buen camino, pero para llegar a saborear la música clásica a veces hace falta un aprendizaje.

Voy a concretar estas afirmaciones, intentando, como es lógico, no digo que desdramatizar, sino aligerar un poco el tono de esta reunión en torno a tanto número y a tanta cifra, con algunos ejemplos que han sido citados precisamente en las enmiendas que acaban de ser aquí defendidas.

Por ejemplo, por lo que se refiere a los créditos 11.01.171, 172 y 173, de la Presidencia del Gobierno, relativos a personal eventual, contratado y vario, los enmendantes se encuentran con un aumento del crédito consignado en estos renglones presupuestarios y lógicamente se alarman. Pero realmente no hay motivo para esa alarma, porque si examinase con más profundidad el tema, se darían cuenta de que, por ejemplo, el Centro de Estudios e Investigaciones Sociológicas y el organismo ahora denominado Instituto Nacional de Prospectiva eran antes de este Presupuesto servicios públicos centralizados, una categoría administrativa sin duda poco simpática, pero que exigía un Presupuesto independiente que ahora deja de serlo y se ha incorporado, en virtud precisamente de la aplicación de la Ley General Presupuestaria, a los Presupuestos Generales del Estado.

Y lo mismo podríamos decir del personal

«vario», que se refiere al Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas, que ha pasado del capítulo dedicado al Ministerio de Defensa al capítulo que está dedicado a la Presidencia del Gobierno.

Algo por el estilo podría decirse respecto a la alusión que se ha hecho a la Sección 20, relativa al Ministerio de Industria y de Energía, y es que esa información (que es voluminosa, sin exagerar, por el número de volúmenes que hemos recibido y por el número de páginas que tiene) exige un manejo complejo de los mismos. Es decir, no basta con ver un solo volumen, sino que hay que ir a otros volúmenes. Si se manejan conjuntamente y se utiliza también el volumen azul, entonces se entiende con bastante claridad qué es lo que hay detrás de esa aportación al Instituto Nacional de Industria, para subvenciones, por ejemplo, para Astano, Bazán o para incrementar su capital.

Todo esto figura con una correlación, como no podía ser menos exacta, en el capítulo 1.º del Presupuesto del INI, que figura en el tomo azul —lo digo así para localizarlo más fácilmente— que se ha enviado también como documentación a esta Cámara.

Así podríamos continuar examinando los distintos aspectos de las enmiendas aquí referidas, por ejemplo la relativa al inventario del suelo urbanizado. Estudiando los Presupuestos o leyéndolos con detenimiento, se encuentra con que el INUR dispone de un crédito de 220 millones de pesetas destinado precisamente a contratación de personal y de actividades que tengan como finalidad asegurar ese inventario del suelo urbanizado que, lógicamente, preocupa a mi querido compañero del Grupo Socialista.

La exposición que he hecho del grupo «Varios» es alarmante para una persona que no esté familiarizada con las técnicas presupuestarias. Es la Sección 31, que, por su naturaleza, podría ser un cajón de sastre donde, sin embargo, están juntas, pero no confundidas —lo que es importante para la transparencia presupuestaria— toda una serie de asignaciones que podría citar, y que no lo haré para no cansarles, pero que se pueden deducir de su simple lectura.

Esto por lo que se refiere a la falta de información o a la falta de claridad, que pro-

viene, yo diría, en muy buena medida, de la complejidad técnica. ¡Qué le vamos a hacer si es así, si es complicado el tema de los Presupuestos! Confieso que debe trabajarse todo lo que se pueda por aumentar la transparencia y la claridad, pero entiendo que éste es un problema que se encuentra en cualquier país donde exista Presupuesto, es decir, en cualquier país donde funcione plenamente el Parlamento. Son comunes y generales las quejas en cuanto a la cierta desigualdad de posición en la que se encuentran los Parlamentos frente al Ejecutivo, con sus servicios altamente cualificados, con una información muy cuidada y, sobre todo, hay que reconocerlo, con un tiempo que supone una ventaja respecto de los Parlamentarios.

Personalmente (y creo que esta opinión puede ser compartida) es preferible esta queja —que revela que existe la posibilidad de un control— al silencio que se da en estos países donde no existe Presupuesto, concretamente en aquellos Estados a los que les vale simplemente una cuenta de sus actividades, como una cuenta doméstica, porque no hay control, porque no hay Parlamento.

La segunda línea fundamental de la argumentación, si no he entendido mal, podría titularse como falta de determinación, indeterminación o ausencia de criterios políticos que justifiquen las cifras, las partidas de que consta el Presupuesto. En definitiva, la indeterminación de la política a seguir.

Suscribo personalmente la opinión (creo que en este aspecto no habrá discusión) de que el Presupuesto es una ocasión magnífica, es una ocasión obligada para discutir globalmente la política de un Estado, para ver cuáles son las distintas políticas que componen los distintos aspectos de esta política global.

Basta mirar a los ingresos para saber cómo es un país, cuál es la sociedad a la que corresponde, cuál es el modo de vida que defiende. Basta examinar los distintos conceptos que hay en la partida de gastos para ver si el Presupuesto es un Presupuesto expansionista, si es un Presupuesto antiinflacionario, si es un Presupuesto que trata de conformar una sociedad, si es un Presupuesto que trata de consolidar una sociedad. Pero entiendo que esta discusión, que puede ser y debe ser indudablemente mejorada en posteriores edi-

ciones, que debería ser incluso —a mi modo de ver— previa a estas explicaciones de voto posteriores al estudio y debate en la Comisión de Presupuestos, tiene que ser hecha aquí no de una manera enciclopédica, sino como en escorzo, ligadas al hueso duro de las cifras presupuestarias, que es de lo que aquí se trata.

Hay en el Presupuesto obligaciones asumidas y hay también —cómo no— previsiones, porque el Presupuesto refleja (trata de prever) el futuro, trata de caminar hacia el futuro y también, como es lógico en un Estado de derecho, tiene que hacer frente a las realidades del presente.

Pues bien, entiendo que puede haber un desenfoque en alguna de las manifestaciones que hay implícitas en las enmiendas aquí presentadas puesto que, si SS. SS. no están de acuerdo con el principio político que se refleja en el Presupuesto, de lo que se trata es de variar justamente esos principios políticos, es decir, las normas de donde vienen las obligaciones que tienen que ser reflejadas en un Presupuesto, porque el Presupuesto, Señorías, no es un dogal, es la expresión cifrada, como dice el artículo 48 de la Ley General Presupuestaria, de esas obligaciones del Estado.

Pero no es un dogal, puesto que ese condicionamiento previo puede ser lógicamente cambiado; y puede ser cambiado si, efectivamente, hay un cambio en la orientación política, promovido y conseguido por quien lo sostiene.

Decir que hay una ausencia de criterios políticos me parece que es una afirmación un tanto exagerada. Y para eso voy a coger también algún ejemplo de los que aquí se han citado. Concretamente el ejemplo de la educación.

Creo que la postura del Presupuesto (y, por tanto, del partido que la defiende) no es una postura de absoluta neutralidad o de absoluta indiferencia. La posición de Centro en este sentido no es una posición residual, es una posición positiva y yo diría, en un lenguaje que creo sería grato a los miembros del Grupo Socialista, que está más bien en la línea de la síntesis superadora de la tesis y de la antítesis.

Digo esto porque, como ha dicho esta ma-

ña en su intervención el Ministro de Hacienda, llamó la atención globalmente en términos absolutos las cifras dedicadas a la educación, que vienen a representar un 18,4 por ciento del Presupuesto del Estado, y si se le adicionan los 40.000 millones de pesetas de la dotación de Acción Coyuntural se eleva a un porcentaje del 20 por ciento, que es altamente significativo y que está diciendo cuál es la intención política que hay detrás de estas cifras; intención política que se subraya si tenemos en cuenta, por ejemplo, que dentro de la Educación el primer renglón, como es lógico, lo ocupa la Enseñanza General Básica que viene a suponer el 56 por ciento del total de gastos relativos a la Educación. Evidentemente, esto está apuntando a qué sociedad se quiere, a una sociedad que trata de limar, de hacer desaparecer las desigualdades injustas, que trata de hacer desaparecer las discriminaciones que aparecen muchas veces desde el nacimiento del niño, por razones del ambiente social en donde se produce, o por razón del ambiente geográfico en el que se va a desenvolver su vida.

Pero es que, además, esta misma posición, que revela una actitud positiva cerca de la sociedad que se quiere ofrecer, que se quiere que esté enraizada en España, se demuestra con algo que ha sido precisamente debatido, que es el tema de las asignaciones a los centros privados, y en relación con las asignaciones públicas. Pues bien, el Presupuesto refleja un equilibrio. Esos 40.000 millones de pesetas están dedicados, en virtud de los «Acuerdos de la Moncloa», al sector estatal, a la construcción y ampliación de centros estatales, y también el Presupuesto recoge, como no podía ser menos, las subvenciones al sector privado en un equilibrio que es un poco el reflejo de la sociedad donde tienen que conjugarse los grandes principios de la justicia y de la igualdad con ese otro gran principio de la libertad.

Señoras y señores Diputados, podríamos, y no terminaríamos, enzarzarnos en una compulsiva concreta de cifras, de datos, de renglones presupuestarios. Creo que con lo dicho me parece suficiente como para decir cuál es la actitud de Unión de Centro Democrático en relación con las enmiendas presentadas. Este es un Presupuesto que, como todos, va

a durar un año. Es un Presupuesto para 1978 y que refleja el ambiente preciso en el que nos movemos; ese ambiente preconstitucional, ese ambiente que corresponde en definitiva a un momento de transición.

Sería mucho peor parar la vida que tratar de reconducirla a esas cotas y esas metas que todos deseamos que son la consolidación de la democracia. Esta es una de las exigencias del sentimiento de la vida continua. No se puede parar la vida, hay que asumirla y proyectarla hacia el futuro porque el Estado que ha de ser democrático ha de ser también Estado de Derecho. Por todas estas razones, la Unión de Centro Democrático se manifiesta conforme con el dictamen de la Comisión de Presupuestos y, en consecuencia, en contra de las enmiendas defendidas por el representante del Grupo Socialista del Congreso.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Hacienda tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Fernández Ordóñez): Cinco o tres minutos nada más para precisar algunos puntos.

Creo que nada más reconfortante como que un Presupuesto se discuta con vehemencia, con pasión y con la Cámara llena. Nada más triste que el espectáculo de otros años de un Presupuesto discutido tristemente y con la sala vacía. Esto es una prueba de que algo han cambiado las cosas.

El lenguaje del Presupuesto es un lenguaje contable. Esto quiere decir que es un lenguaje lacónico, pero el laconismo no es necesariamente imprecisión. Yo querría aclarar varios puntos de la intervención del Diputado señor Lozano, cuya honestidad me consta y cuya sinceridad de su preocupación me consta también.

Primer punto concreto, el que se refiere a los criterios. Es evidente que éste no es un Presupuesto de medios. Es un Presupuesto con una clasificación económica y funcional, pero tampoco es un Presupuesto de programas. Esto quiere decir que los criterios políticos no están todavía incorporados al documento presupuestario y no lo estarán mientras no tengamos un documento de programas; un documento donde podamos determinar los costes «standard», un documento

donde realmente toda la política esté incorporada al propio Presupuesto. Esto quiere decir que este año, aparte de las razones de premura de tiempo, sería, o hubiera sido necesario, y lo ha sido, recurrir a las Memorias de los Ministerios para descubrir cuáles son los criterios políticos que están detrás del laconismo de las cifras. Ello no quiere decir que estos criterios no existan. Quiere decir —y tiene razón el señor Lozano— que estos criterios, como es lógico por las características de este Presupuesto, no están incorporados a sus cifras.

El punto relativo a la distribución territorial del gasto público es un problema que nos ha preocupado en el Ministerio de Hacienda, porque no existen en este momento mecanismos suficientes para conocer cuál es la distribución territorial del gasto público, y a esto me he referido en mi discurso de presentación. Pero es que el artículo 53 de la propia Ley General Presupuestaria dice que la distribución territorial se aplicará gradualmente en la forma que reglamentariamente se determine. A este respecto, en enero vamos a disponer ya de la primera documentación de investigación que nos va a permitir conocer cuál es esa distribución territorial del ingreso y del gasto público, que, como he dicho antes, considero absolutamente fundamental desde el punto de vista de las autonomías regionales.

Quería referirme también a la célebre Sección 31, y digo «célebre Sección 31» porque es un tema que tradicionalmente ha sido siempre objeto de debate. La Sección 31 no es un «cajón de sastre»; la sección 31 se configura como aquella Sección donde están los créditos que atienden obligaciones que son interdepartamentales, que no pueden imputarse a un solo Ministerio, y por eso están en una Sección especial.

¿Qué contienen los célebres 118.000 millones de la Sección 31? Fundamentalmente lo siguiente: Primero, las participaciones de las Corporaciones Locales en ingresos del Estado. Se trata de la participación del 5 por ciento en los impuestos indirectos y la participación en el 90 por ciento de las Contribuciones Rústica, Urbana, y Licencia Fiscal, aparte la tasa de juego. Se han consignado en

el Presupuesto del Estado para estas atenciones 64.000 millones de pesetas.

Segundo, la adquisición de acciones en empresas con participación del Estado, porque el Estado participa en una serie de sociedades, las cuales amplían capital, y se trata de operaciones a las que es necesario acudir, para lo que está prevista la cifra de 11.000 millones de pesetas.

El tema de los derechos económicos, trienios y complementos de los funcionarios, que figura en la Sección 31 —y me importaba mucho aclarar este punto— no tiene otra justificación que la elevación del salario mínimo el 1 de abril de 1978 y la realización de los convenios colectivos. Esto produce una serie de efectos que tienen repercusión en el personal laboral y que obliga a prever una cantidad que se ha cifrado en un crédito de 14.000 millones de pesetas.

El cuarto punto es la aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, civiles y militares, para lo que se ha consignado un crédito de 14.000 millones de pesetas.

Y, por último, las insuficiencias que la elevación del salario mínimo el 1 de abril de 1978 y los convenios colectivos producirán en cuanto a Organismos autónomos administrativos y comerciales en 1978, que generan un crédito que se ha previsto en 6.000 millones de pesetas.

Quería aclarar este punto nada más. No tiene otro propósito mi intervención que explicar por qué existe la Sección 31, discutible como todas las Secciones del Presupuesto; cuáles son sus finalidades, y por qué esta Sección 31, que es interdepartamental, figura explícitamente con estas características. Precisamente porque afecta al gasto de varios Departamentos es por lo que se ha configurado con estas características.

Insisto en el punto de la claridad. En carta dirigida a los jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria, con fecha 4 de noviembre, les ofrecí cuanta información fuera necesaria y no se pudiera aportar en aquellos momentos. Soy consciente, y era consciente entonces, de que el Presupuesto hecho en tres meses para desarrollar la Ley General Presupuestaria podría plantear pro-

blemas en cuanto a la información. Esta información no será, sin embargo, nunca incorporada plenamente al Presupuesto mientras el Presupuesto español —lo mismo que trabajosamente intentan otros Presupuestos europeos— no incorpore totalmente el mecanismo del Presupuesto de programas. Muy certeramente en los «Acuerdos de la Moncloa» se ha iniciado este camino. Muy certeramente hemos sido conscientes quienes discutimos aquellas posibilidades de que sólo gradualmente se podría ir a un Presupuesto por programas, y muy certeramente en los «Acuerdos de la Moncloa» se determinó que serían dos Departamentos con los que tendríamos que empezar a trabajar en este aspecto el próximo año.

Nada más, señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a continuación a la votación de las enmiendas a la totalidad de las Secciones, que han sido agrupadas en su defensa por los representantes de los Grupos Parlamentarios enmendantes.

En consecuencia, se somete ahora a votación la enmienda correspondiente a la Sección 11, «Presidencia del Gobierno». *(Pausa.)*

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 314 votos emitidos; a favor de la enmienda, 128; en contra, 171; abstenciones, cinco.)

Queda, por consiguiente, rechazada la enmienda correspondiente a la Sección 11.

Se procede ahora a la votación de la Sección 11, «Presidencia del Gobierno». *(Pausa.)*

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 322 votos emitidos; a favor, 184; en contra, 121; abstenciones, 17.)

Queda, por consiguiente, aprobada la Sección 11 del Presupuesto, correspondiente a la «Presidencia del Gobierno».

Se procede a la votación de la enmienda formulada a la Sección 17, correspondiente al «Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo». *(Pausa.)*

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 323 votos emitidos; a favor de la enmienda, 134; en contra, 173; abstenciones, 17.)

Queda, por consiguiente, rechazada la enmienda formulada a la Sección 17.

Se procede ahora a la votación de la Sección 17, correspondiente al «Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo». *(Pausa.)*

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 323 votos emitidos; a favor, 177; en contra, 129; abstenciones, 16, y un voto nulo.)

Queda, por consiguiente, aprobada la Sección 17 del Presupuesto, correspondiente al «Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo».

A continuación procederemos a la votación de la enmienda de la Sección 18, «Ministerio de Educación y Ciencia».

Se vota la totalidad, porque luego hay alguna enmienda correspondiente al articulado; pero ahora lo que votamos es la enmienda a la totalidad. *(Pausa.)*

(Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: 325 votos emitidos; 133 a favor, 175 negativos y 17 abstenciones.)

Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda correspondiente a la Sección 18, «Ministerio de Educación y Ciencia».

Procedemos ahora a la votación correspondiente a la Sección 18 del Presupuesto, «Ministerio de Educación y Ciencia». *(Rumores.)*

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Perdon, señor Presidente, al haber una enmienda parcial a esta Sección, entendemos que no se puede votar la Sección en este momento; hay que demorarla, porque, si se aprueba, ¿cómo se va a discutir después una enmienda parcial?

El señor PRESIDENTE: Había entendido la Mesa que afectaba a la totalidad de la Sección, sin perjuicio de que luego, si se votara la rectificación del articulado, se rectificaría así. Este fue el criterio de la Mesa.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Criterio que no comparte el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Se vota ahora la cuantía total, no la distribución. *(Rumores.)* En consecuencia, procedemos a la votación de la Sección 18. *(Pausa.)*

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 321 votos emitidos; 177 votos a favor; 129 votos en contra y 15 abstenciones.)

Queda consiguientemente aprobada en su

totalidad la Sección 18, correspondiente al «Ministerio de Educación y Ciencia».

Parece que había la solicitud de explicación de votos respecto de la Sección 18, que se acaba de poner a votación, por parte del Grupo Parlamentario Comunista. Nos habían pasado a la Mesa la petición. ¿Se mantiene? (Pausa)

Pasamos entonces a la votación correspondiente a la enmienda a la Sección 20, «Ministerio de Industria y Energía».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 129; en contra, 172; abstenciones, 18.)

En consecuencia, queda rechazada la enmienda correspondiente a la Sección 20, «Ministerio de Industria y Energía».

Procedemos ahora a la votación correspondiente a la Sección 20 del Presupuesto, «Ministerio de Industria y Energía».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 177; en contra, 128; abstenciones, 17; nulo, uno.)

En consecuencia, queda aprobada la Sección 20 del Presupuesto correspondiente al «Ministerio de Industria y Energía».

Procedemos a la votación de la enmienda presentada a la Sección 24, «Ministerio de Transportes y Comunicaciones».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 131; en contra, 174; abstenciones, 19.)

Queda rechazada la enmienda correspondiente a la Sección 24 del Presupuesto.

A continuación procedemos a votar la Sección 24 del Presupuesto, correspondiente al «Ministerio de Transportes y Comunicaciones».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 174; en contra, 128; abstenciones, 18.)

Queda, consiguientemente, aprobada la Sección 24 del Presupuesto, correspondiente al «Ministerio de Transportes y Comunicaciones».

Corresponde ahora votar la enmienda formulada a la Sección 26 del Presupuesto, «Ministerio de Cultura».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 134; en contra, 170; abstenciones, 20.)

Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda formulada a la Sección 26, «Ministerio de Cultura».

El señor PECES - BARBA MARTINEZ: También hay una enmienda parcial del Grupo Socialista, y queremos saber si la mesa va a persistir en el error o va a rectificar. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: La Mesa persiste en su criterio sea o no erróneo.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Entonces deseamos que conste en acta nuestra oposición.

El señor PRESIDENTE: Que conste.

El señor TAMAMES GOMEZ: ¿Se entiende, por consiguiente, que la defensa de la enmienda parcial se hará después de estas votaciones?

El señor PRESIDENTE: Por supuesto.

Se procede ahora a la votación correspondiente a la Sección 26 del Presupuesto, «Ministerio de Cultura».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 322 votos emitidos, 166 a favor, 139 en contra, 16 abstenciones y un nulo.)

En consecuencia, queda aprobada en su conjunto la Sección 26 del Presupuesto, «Ministerio de Cultura».

Corresponde ahora la votación de la enmienda formulada a la Sección 31, «Gastos de diversos Ministerios».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 321 votos emitidos, 114 a favor, 174 en contra y 33 abstenciones.)

En consecuencia, queda rechazada la enmienda formulada a la Sección 31, correspondiente al capítulo «Gastos de diversos Ministerios».

Corresponde ahora la votación de la Sección 31 del Presupuesto, «Gastos de diversos Ministerios».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 320 votos emitidos, 176 a favor, 112 en contra y 32 abstenciones.)

En consecuencia, queda aprobada la Sección 31 del Presupuesto, correspondiente a «Gastos de diversos Ministerios».

Terminada la votación de esta serie de enmiendas agrupadas para su defensa, nos corresponde ahora la enmienda formulada a la Sección 32 por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña. El Grupo Parlamentario enmendante tiene la palabra.

El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el dominador común de las discusiones que se están teniendo hoy en esta Cámara... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señores Diputados, guarden silencio.

El señor MARTIN TOVAL: El eje central de estas discusiones está siendo la falta de información, no ya tan sólo cuantificada o numérica, sino política, como ha reconocido recientemente el señor Ministro de Hacienda desde esta misma tribuna, que ha impedido y que impide la discusión en profundidad, y que implica, creo, una actitud desconsiderada del Gobierno hacia estas Cortes.

La enmienda que yo defiendo en nombre del Grupo Socialistas de Cataluña es la enmienda a la totalidad de la Sección 32, «Obligaciones derivadas de la incorporación al Estado de las funciones atribuidas al Organismo Autónomo AISS», que cuenta con una asignación global de 25.000 millones de pesetas.

En nuestra enmienda centrábamos las motivaciones de la misma en dos aspectos. El primero, la falta de especificación y detalle del concepto correspondiente a personal, y así tenemos que en el capítulo I de esta Sección se asignan 19.000 millones de pesetas para gastos de personal, no especificados ni razonados convenientemente, ni en particular, y esto es lo importante, la decisión política del Gobierno sobre la adscripción de estos funcionarios a tareas que serán estatales. Incluso en el informe económico financiero del Ministerio de Hacienda, incorporado como justificación, entre otros, al proyecto de Presupuestos, al tratarse de la incidencia de los sueldos y salarios del personal del Estado, no se tiene en cuenta estos 19.000 millones de pesetas. No sabemos cuál

es la justificación que pueda tener el Ministro de Hacienda para no tener en cuenta aquí la incidencia de estos 19.000 millones de pesetas. Pero aquí es importante y fundamental el tema de la información política. ¿Qué se piensa hacer, por parte del Gobierno, con estos funcionarios? ¿Qué se piensa hacer con el Patrimonio Sindical?

Otra razón que nosotros dábamos al presentar nuestra enmienda era la falta de explicación del detalle de una transferencia de 480 millones de pesetas al Ministerio de Cultura. El Ministro de Cultura, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, trató este tema, casi textualmente, con las siguientes palabras: No tengo información directa sobre el tema, pero creo que debe referirse a la financiación del diario «Pueblo».

Información puntual e implacable, que ha sido como ha calificado este tipo de información el señor Meilán.

Es cierto que estamos en una etapa pre-democrática, preconstitucional y preautonómica, y espero que los señores miembros de UCD superen su precalentamiento democrático y sepan, en otro momento, porque en éste no ha sido posible y no lo han hecho, aceptar dar las explicaciones políticas de fondo, los porqués fundamentales de una política presupuestaria que no consiste sólo en números, como aquí se ha explicitado por el señor Ministro de Hacienda, sino en explicación del por qué se asigna una determinada cantidad a unas determinadas partidas y por qué se determina un cierto volumen global de ingresos.

Señores del Gobierno, los socialistas no podemos dejar que pública e impunemente se aprueben estos Presupuestos con el asentimiento tácito de los Diputados aquí presentes. Somos conscientes de que el peso de los votos hará que se apruebe este proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno, pero tenemos la responsabilidad de decir al pueblo, y a nuestros representados, que el Gobierno no nos ha permitido estudiar y discutir, con todos los elementos de juicio necesarios, estos Presupuestos y particularmente esta enmienda tan importante que supone la salida definitiva a todo el problema del sindicalismo vertical, que defiende y man-

tengo en nombre de mi Grupo Parlamentario. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En defensa del dictamen, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las dotaciones que figuran en el Presupuesto con destino a las obligaciones del Organismo «Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales» se destinan a aquellas partidas que se han considerado imprescindibles para el pago de personal y mantenimiento de los servicios, cuidado de los inmuebles y actividades que han de continuar en funcionamiento.

Las obligaciones que asume el Presupuesto del Estado se derivan de lo previsto en el Real Decreto-ley 31/1977, de 2 de junio, en cuyo artículo 3.º se establece que, una vez finalizado el proceso de transferencia, se utilice el personal correspondiente en otras dependencias y organismos de la Administración del Estado.

Asimismo, el artículo 1.º señala que los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines que tiene asignado este Organismo serán garantizados por el Estado mediante la oportuna consignación presupuestaria. Por tanto, dicha consignación responde a un imperativo legal.

La AISS se venía financiando anteriormente con cargo a la exacción parafiscal a que se refiere el artículo 5.º del Real Decreto-ley 19/1976, de 8 de octubre, la cual quedó suprimida desde 1 de julio de 1977. A partir de dicha fecha, y en el mes de octubre del corriente año, la financiación de los gastos del Organismo se ha realizado mediante la aplicación de los remanentes y cantidades pendientes de cobro por la indicada tasa, así como de los ingresos generados por la actividad de ciertos servicios, tales como residencias, turismo social, etc., que se han producido en ese período. Pero, agotados esos fondos a partir del mes de noviembre, ha sido preciso tramitar un crédito extraordinario en estas mismas Cortes por importe de 8.000 millones de pesetas, el cual fue informado favorablemente por el Consejo de Estado y aprobado

por el Consejo de Ministros, y se encuentra ya también aprobado por esta Cámara. El destino de este crédito extraordinario era financiar los gastos de personal de dicho Organismo. Por otra parte, hay que señalar que las cifras consignadas en los Presupuestos para el año 1978 son inferiores en 7.000 millones de pesetas a las de 1977.

Hay una cuestión concreta que ha planteado el enmendante en relación con una partida de 480 millones de pesetas en el capítulo 4.º, servicio 03. Ya antes de que el señor Ministro de Cultura informase en la Comisión correspondiente, al responder en la Comisión a esta enmienda a la totalidad de la Sección, se explicó que la no aparición en la documentación que se había entregado a los señores Diputados respondía a un error de fotocopia, pero que en el original de dicha documentación, que obraba en las Cortes, figuraba que esta asignación obedecía a la cantidad que ha de atender al déficit de explotación del diario «Pueblo».

Por lo que se refiere a unas dotaciones del capítulo 2.º, que también aparecen referidas en la enmienda, por importe de 3.700 millones de pesetas, se destinan, según el Presupuesto presentado por la AISS a atender gastos indispensables de funcionamiento del servicio y mantenimiento de edificios y oficinas, es decir, para hacer frente al pago de los gastos que se produzcan como consecuencia de dicho mantenimiento, pero, en ningún caso —esto debe quedar bien claro—, incluye dotaciones para la iniciación de nuevos proyectos, y todo ello, naturalmente, sin prejuzgar el destino final del patrimonio que está adscrito al Organismo.

En consecuencia de todo lo anterior, defendemos el dictamen de la Comisión de Presupuestos en el sentido de que debe mantenerse la dotación presupuestaria de la Sección 32, en la que concurre, además, la circunstancia de todos conocida de que afecta a más de 34.000 funcionarios. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, tenemos que proceder a la votación de la enmienda correspondiente a la Sección 32, «Obligaciones derivadas de la incorporación al Estado de las funciones atribuidas

al Organismo Autónomo Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales».

Se recuerda a los señores Diputados que durante el transcurso de la votación no pueden entrar ni salir del Salón de Sesiones. *(Pausa.)*

(Efectuada la votación de la enmienda dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 114; en contra, 183; abstenciones, 15.)

Consiguientemente, queda rechazada la enmienda formulada a la Sección 32 del Presupuesto.

A continuación corresponde la votación de la Sección 32 del Presupuesto: «Obligaciones de la Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales».

(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 317 votos emitidos, a favor 186, en contra 114 y abstenciones 17.)

En consecuencia, queda aprobada la Sección 32 del Presupuesto.

Señoras y señores Diputados, vamos a levantar la sesión hasta las cinco de la tarde...

El señor GARCIA SANCHEZ: Pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto a la totalidad de esta Sección tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Comunista, don Cipriano García.

El señor GARCIA SANCHEZ: Señoras y Señores Diputados, el Grupo Parlamentario Comunista ha votado favorablemente a la totalidad, consciente de que contraía una gran responsabilidad. No podíamos empujar a más de treinta y cuatro mil funcionarios a la inseguridad y al desempleo. Por ello hemos decidido votar favorablemente, pero al mismo tiempo que hemos dado nuestro voto favorable tenemos que llamar la atención del Gobierno sobre toda una serie de hechos que vienen aconteciendo en el último período, a fin de que el Parlamento y el Gobierno presten atención al destino de los fondos que se conceden a estos Presupuestos.

Nos hemos enterado por la prensa de lo que ha supuesto el caso del señor De la Torre, Presidente de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos. Nos hemos enterado también por la prensa de lo que ha supuesto el mantener durante años al chófer del

señor Girón. Por todo ello es necesario un control parlamentario sobre el destino de estos fondos.

Al mismo tiempo que el Grupo Parlamentario Comunista da su voto favorable, queremos también criticar la forma en que se nos ha presentado este Presupuesto, la forma en que se nos ha dado a conocer, y consideramos que en lo sucesivo el Parlamento debe conocerlo con anterioridad para tener el tiempo suficiente de poder discutir todas y cada una de las materias que conciernen a estos aspectos presupuestarios, a fin de que podamos tener, con el tiempo debido, un criterio, y poder así fijar también con antelación una posición más en consonancia con lo que estamos debatiendo.

Por un lado, nuestro voto está en función de lo que representa esta gran masa de funcionarios; pero, por otro, nos preguntamos cuándo los bienes inmuebles, los fondos acumulados a lo largo de estos cuarenta años van a pasar a ser propiedad de los trabajadores bajo el control y la gestión de los mismos, a través del trasvase de dichos bienes a las organizaciones sindicales.

Si en el «Pacto de la Moncloa» se contempla que los trabajadores tendrán el control y la gestión de la empresa pública, cabe pensar que, con más razón aún, tienen el deber y el derecho de disponer de aquello que es suyo, de aquello que ha sido una masa acumulada a lo largo de cuarenta años.

Nada más, señoras y señores Diputados, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Vicente, para explicación de voto.

El señor DE VICENTE MARTIN: El Grupo Socialista del Congreso, que ha votado en la anterior votación la enmienda postulada por el Grupo de Socialistas de Cataluña, no ha querido en ningún momento poner en tela de juicio a los funcionarios de la Organización Sindical. Entiende el Grupo Socialista del Congreso que poner por delante a los funcionarios de la Organización Sindical, es decir, afirmar que se está de acuerdo con todo, excepto con lo relativo a las retribuciones de los funcionarios, significa ni más ni menos que utilizar —lo decimos con respeto humano, pero sin

respeto político— la demagogia al servicio de unos argumentos.

Nosotros no cuestionamos el derecho de los funcionarios, de los auténticos funcionarios, a su estabilidad. Cuestionamos, señoras y señores Diputados, el derecho que no reconocemos a quienes, utilizando prebendas políticas de etapas anteriores, han logrado por medios absolutamente espúreos beneficios que están todavía pendientes de resolución y sobre los que estamos seguros que el Gobierno tomará buena nota con miras a la solución que deban tener. Estamos —repito— contra quienes, partiendo de lo que se llamaba representatividad —perdonen la palabra SS. SS.— en la etapa anterior, han logrado no sólo una prebenda económica durante la misma, sino que están a punto, al parecer, y queremos evitarlo, de lograr un puesto de funcionario público.

Esta es, señoras y señores Diputados, la opinión del Grupo Socialista del Congreso. ¿Hasta cuándo —se ha preguntado aquí— va a subsistir esta situación? En esta Sala se encuentran los Ministros responsables de la materia y, específicamente, como Presidente de la AISS, el Ministro de Trabajo. Pero ha de quedar claro al Gobierno, y especialmente al señor Ministro de Trabajo, que nosotros tenemos un cuándo, que en todo momento se basa en que se resuelva esta situación de inestabilidad de estos funcionarios de la Organización Sindical, con respeto a quienes lo sean, pero sin respeto —y estamos dispuestos a denunciarlos— a cuantos, a través de lo que entendemos no es otra cosa que corrupción, intenten incorporarse para hacer más difícil todavía la explicación del Presupuesto del Estado del año 1979.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A pesar de que hayamos pensado suspender la sesión hasta las cinco de la tarde, con objeto de examinar en esta primera fase de la sesión todas las enmiendas a la totalidad y dejar para esta tarde las enmiendas al articulado y las parciales, vamos a proceder a la discusión y votación de las tres enmiendas formuladas al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social, que han sido presentados, respectivamente, por el Grupo Parlamentario Comunista, el

Grupo Mixto y el Grupo Socialista del Congreso.

El representante del Grupo Parlamentario Comunista tiene la palabra, a efectos de mantener la enmienda.

El señor CAMACHO ABAD: Señoras y señores Diputados, la Minoría Comunista, como no podía ser menos, da una gran importancia a la Seguridad Social, como es lógico, a su Presupuesto y a estas cifras tan importantes a que abarca. Está claro que nosotros consideramos que en la presentación de un Presupuesto globalizado de alguna manera podría parecer como que se inicia un cierto control sobre todos los recursos que de alguna manera figuran en el Presupuesto. La realidad es que nos encontramos con que lo que se refiere a la Seguridad Social, lo mismo que a otros capítulos de los que ha hablado Ramón Tamames, siguen en cierta medida la herencia del pasado. Es por esto, porque hay una falta de control real sobre cifras y hechos tan importantes por lo que la minoría comunista decide presentar la enmienda a la totalidad. El Presupuesto de la Seguridad Social, tanto en su clasificación funcional como económica, presenta un grado de agregación tal en todos sus datos que impide un adecuado conocimiento de los ingresos, de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, y, sobre todo, de sus gastos. Impide un control parlamentario efectivo de cuya importancia habla por sí solo el billón doscientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta millones que constituyen el total del Presupuesto neto. Tal situación es especialmente grave cuando con ello se incumple lo acordado en el Pacto de la Moncloa, referente al control parlamentario de los Presupuestos, gastos y gestión de la Seguridad Social, sobre todo en su punto 6, apartado b). En segundo lugar, al no presentarse el estudio demostrativo del costo de los servicios de la Seguridad Social, se incumple el párrafo 2 del artículo 148 de esta Ley General Presupuestaria, impidiéndose, además, cualquier intervención parlamentaria tendente a corregir los excesivos gastos burocráticos, las deficiencias de gestión, la irracionalidad en la aseguración de recursos, e incluso la corrupción a que hayan podido dar lugar tantos años

de descontrol e impunidad en el manejo de unos fondos de financiación tan importantes.

En tercer lugar, al incluirse en el costo de los servicios y prestaciones la amortización de los bienes patrimoniales afectos a dicho servicio, se distorsiona la información de tal modo que resulta imposible conocer el valor real de dicho servicio y prestaciones.

Hay también, en cuarto lugar, la falta absoluta de desglose de la partida de sueldos y salarios que impide al Parlamento cualquier intervención racionalmente justificada, suponiendo esta partida el 14,46 por ciento del gasto bruto de la Seguridad Social y el 15,15 por ciento del gasto neto.

Lo mismo se puede decir de los gastos de administración, que suman cuarenta y seis mil setecientos cuarenta millones.

Por otro lado, en quinto lugar, de las prestaciones sólo es posible conocer su volumen global, según los regímenes y servicios, pero al desconocerse sus distribución por tramos salariales de los beneficiarios, y al no proporcionarse información sobre los mínimos correspondientes, así como los porcentajes de población afectados por los mínimos, resulta prácticamente inviable cualquier intervención parlamentaria orientada a mejorar eficazmente las prestaciones.

Especialmente grave es el caso de las pensiones en donde el incumplimiento del crecimiento pactado del 30 por ciento en los Acuerdos de la Moncloa depende de la validez de la estimación hecha por el Gobierno de la cifra para 1977, de la que el Parlamento no conoce ningún tipo de justificación.

En su punto 6, todas las transferencias internas al sistema de seguridad por operaciones corrientes, que suman 778.646 millones de pesetas, y por operaciones financieras, que suman 33.287 millones, resultan completamente imposible de controlar al no figurar las personas jurídicas que transfieren y que reciben. Lo mismo es aplicable a las transferencias externas por operaciones corrientes, que suman 5.378 millones de pesetas, lo que representa además un incremento del 80,4 por ciento respecto al año anterior.

Por otro lado, en el proyecto de Presupuestos únicamente se da la partida global de asistencia sanitaria con medios ajenos, que

suma 44.201 millones de pesetas. En dicha partida se incluye todo el coste derivado de los conciertos de la Seguridad Social con entidades privadas. El control de dicha partida resulta inviable si no se conoce cuáles son las entidades privadas beneficiarias de tales conciertos y el volumen de fondos que reciben de la Seguridad Social. Y conste que nosotros en este caso no tratamos de impedir que algunos centros en los que el trabajo se encuentra amenazado a consecuencia de la crisis no tengan una cierta asistencia, lo que queremos es que esto esté controlado por el Parlamento y sepamos exactamente a que sirve asegurar el trabajo y la asistencia médica o a asegurar los beneficios de empresas extremadamente confusas en todos los órdenes. El control de esta partida es extraordinariamente importante para impedir la progresiva privatización de la Seguridad Social para combatir la corrupción que pueda existir y permitir el abaratamiento de los costes de la asistencia sanitaria, ya que en dichos conciertos se incluyen unos beneficios de las entidades privadas, lo que supone un encarecimiento de la asistencia en comparación con la prestación por las entidades del Estado y por la propia Seguridad Social si su gestión estuviese adecuadamente saneada.

En el «Pacto de la Moncloa» se contempla, en el punto 6, apartado b), el objetivo de traspasar a la Administración del Estado el servicio de empleo y acción formativa, la promoción profesional obrera, el servicio de Emigración, el Servicio de Universidades Laborales, así como el Servicio de Seguridad e Higiene, excepto en las funciones que éste realice de medicina preventiva laboral. A pesar de ello, en el proyecto de Presupuestos presentado para 1978, tales Servicios aparecen de nuevo financiados íntegramente por la Seguridad Social. Si la voluntad de traspaso fuese efectiva había de comenzar a decidir gradualmente su financiación al Estado y esto se debería recoger en los Presupuestos de 1978. De esta forma se mantiene la situación de que una parte de los ingresos obtenidos se dirigen a colectivos diferentes del protegido por la Seguridad Social, teniendo, en la mayoría de los casos, un efecto perturbador sobre la distribución de las rentas y al continuar

realizando la Seguridad Social funciones específicas de la Administración del Estado se desvirtúa el contenido real, también, de esos 151.000 millones de pesetas por lo que, según los «Acuerdos de la Moncloa» y con arreglo a lo que nos acaba de decir el Ministro de Hacienda, se va, en cierta medida, a contribuir a la financiación de la Seguridad Social con el objetivo de mejorar el seguro del paro.

Tampoco se dice gran cosa de cómo se van a dar los pasos necesarios para pasar del régimen especial de la Seguridad Social en el campo al régimen de seguridad general, y muy especialmente al paro agrícola en el campo, que empieza a crear situaciones extremadamente graves en Andalucía, Extremadura, Canarias y en tantos lugares del país.

Las dotaciones por inversiones reales no aparecen especificadas por programas, lo que impide al Parlamento incidir tanto sobre su racionalidad económica como sobre su justificación social, impidiéndose, por lo tanto, la fijación de prioridades para las inversiones de la Seguridad Social.

Por último, el Presupuesto de la Seguridad Social mantiene un superávit por operaciones corrientes de 61.125 millones; aplicados a operaciones de inversiones reales 49.505, siendo el resto destinado a operaciones financieras que suponen un ahorro efectivo por parte de la Seguridad Social.

Con ello se quebranta el objetivo de equilibrio presupuestario que debe ser norma para el sistema del reparto de la Seguridad Social, pero que en todo caso debe ser norma para una situación de crisis en que la Seguridad Social debe ser un instrumento eficaz para aliviar el peso sobre las capas sociales más afectadas, incrementando su gasto en prestaciones y servicios.

Señoras y señores Diputados, está claro que, como decía Tamames y algún otro compañero, observamos todavía la herencia del pasado, pero es necesario que esto se liquide de una vez y que entremos, naturalmente, en una política en la cual el Parlamento controle prácticamente, con datos, con elementos, todos los gastos, todos los ingresos, y muy especialmente los de la Seguridad Social. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra a efectos de la defensa de su enmienda.

El señor SANCHEZ AYUSO: Voy a efectuar una intervención muy breve para defender nuestra enmienda a la totalidad del Presupuesto-resumen de la Seguridad Social. Y la voy a hacer muy breve, porque va a coincidir con la exposición del Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, y me figuro que también con la intervención del Diputado que va a seguir después, dadas las defensas de estas enmiendas que se hicieron en la Comisión de Presupuestos.

La enmienda a la totalidad se fundamenta, y así está explicada, en algo muy claro: por una parte, que este Presupuesto-resumen tiene una falta de detalle tal que nos impide poder efectuar una apreciación objetiva de su contenido.

También, y esto ya lo afirmamos esta mañana, no se puede decir que se haya cumplido el artículo correspondiente —si no recuerdo mal el 148— de la Ley General Presupuestaria, porque no hay un estudio demostrativo del coste de los servicios que con su falta nos hace prácticamente imposible un análisis riguroso del Presupuesto-resumen.

Además, en todo el Presupuesto se ve una falta de desglose de datos tal que hace difícil un análisis que, por otra parte, sería muy importante hacerlo, dado la cuantía económica tan extraordinariamente importante de toda la Seguridad Social.

Por lo tanto, el control parlamentario de este Presupuesto no es viable, por lo que aquí no se cumple efectivamente lo que se decía al respecto en el «Pacto de la Moncloa».

Quería también destacar que no se están haciendo las transferencias de servicios previstas en los Acuerdos, como ha subrayado el Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra. Y nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar a su consideración una enmienda a la totali-

dad del Presupuesto de la Seguridad Social, que es la que figura con el número 235 en el folleto de enmiendas editado por la Cámara.

Vamos a hacer la defensa de esta enmienda, de esta expresión de nuestra voz con un tono normal, sin la humildad que el señor Meilán ha puesto en su intervención (perdone el señor Meilán que seamos egoístas en favor de él y le regalemos toda la humildad), pues, como SS. SS. saben, no hay en las filas socialistas hombres humildes en el tono y ambiciosos en los objetivos. (*Risas.*)

Lo vamos a hacer, señoras y señores Diputados, con la captación que tenemos los socialistas, puesta de relieve fuera de esta Cámara—cuando no podíamos estar aquí—, y en esta Cámara a partir del 15 de junio, aunque, evidentemente, con la inexperiencia de no haber estado aquí, señor Meilán, antes del 15 de junio.

Nosotros, señoras y señores Diputados—permítanme que repita—, tenemos capacidad y creemos, asimismo, tener experiencia, pero no la experiencia que el señor Ministro de Hacienda nos ha recordado en una intervención breve, pero eficaz, la experiencia de venir a votar desde el bar, o incluso desde el cercano edificio de los Sindicatos a un timbrazo de esta Presidencia (no de la actual); nosotros, señoras y señores Diputados, tenemos capacidad de sorpresa. Por eso no nos ha extrañado que el señor Meilán, en forma humilde, repito, con un tono evidentemente tranquilo, nos haya hablado del Presupuesto de 1978, porque ese tono, con el tono azul que asimismo podíamos haber oído, entendemos que es una, si no total, sí al menos aceptable síntesis de alguna parte de los Grupos Parlamentarios que están sentados en esta sala; puesto que no es menos cierto, entendemos, que en el Partido del Gobierno hay respetables excepciones personales, y perdonen que vuelva a citar al Ministro de Hacienda; pero dado que no estoy en su partido, creo que no habrá riesgo de interpretación de mi cita, dando honrada y, a mi juicio, cumplida contestación a la posición del señor Meilán con su referencia a aquellas salas vacías que, en años anteriores, aprobaban—llenándose de repente y vaciándose seguidamente— los Presupuestos Generales del Estado.

En todo caso, lo vamos a hacer, entiendo, y me circunscribo ya a la presente legislatura, señoras y señores Diputados, con un profundo conocimiento de causa, con el que da el haber estado en todas las sesiones de la Ponencia a diferencia, no sé si tal vez las ocupaciones del señor Meilán no se lo permitieron, o tal vez su evidente experiencia en Presupuestos de años anteriores no justificaba, en su opinión, que puesto que dado, pienso interpretarían él, poco iba a cambiar, no hacía falta que estuviera aquí.

En todo caso, hechas estas consideraciones, quisiera pasar de lleno a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, recordando a SS. SS. que, como ustedes conocen perfectamente, el artículo 148 de la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, dispone que el Gobierno remitirá a las Cortes el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social—así se le llama en la ley—acompañado de una Memoria explicativa, un Informe económico financiero y un Estado demostrativo del coste de los servicios prestados por el sistema de la Seguridad Social.

Partiendo de ese precepto, partiendo de la documentación remitida por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que, justo es decirlo, en algún punto supera las exigencias legales, son varios los motivos por los que el Grupo Socialista propone a SS. SS. la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Seguridad Social.

Pero yo quisiera, antes de entrar en el análisis concreto de los aspectos que motivan nuestra enmienda de totalidad, hacer algunas referencias que son obvias para quienes estamos militando en un partido obrero, y que son, sucintamente, las relativas a la profunda sensibilidad popular que la Seguridad Social tiene para todo el pueblo español. La relación de intermediación, el contacto directo que entre los asegurados y los beneficiarios existe día a día, no sólo en las elementales prestaciones de asistencia sanitaria o farmacéutica, sino, incluso, en las propias oficinas de la Seguridad Social, hace que ésta sea una zona de la actividad pública extremadamente sensible a la crítica del pueblo, a la razonada crítica del pueblo, que deriva de que muchos ciudadanos coinciden, con independencia de

su adscripción política, en lo mal que funciona la Seguridad Social.

También quisiera hacer una observación previa, repito, a una constante histórica que en alguna medida subsiste, esto es, a la marginación de la clase trabajadora española en la gestión de la Seguridad Social.

No voy a referirme, porque sería entretener la atención de SS. SS., a la pantomima de presencia de la clase trabajadora en etapas anteriores; pero sí quiero señalar que, como SS. SS. conocen, está actualmente suspendida esa (y vuelvo a pedir perdón por la palabra; perdonen mi insistencia) representación, de tal suerte que en estos momentos ni verticalistas, ni sindicatos democráticos se hallan en la gestión de la Seguridad Social, y que si bien es cierto que en los «Acuerdos de la Moncloa» se prevé el envío a esta Cámara de un proyecto de ley regulando la gestión democrática de la Seguridad Social, quisiéramos decirle al señor Ministro de Sanidad y Seguridad Social, aquí presente, que estamos esperando con notoria impaciencia desde altas organizaciones sindicales democráticas (obviamente cuando habla un socialista, habla de la Unión General de Trabajadores) la llegada de ese texto legal, puesto que parece ser que es competencia exclusiva del Gobierno la promoción de las normas emanadas de acuerdos adoptados en el seno de los «Acuerdos de la Moncloa».

También quisiera, señoras y señores, antes de entrar en el detalle del Presupuesto, hacer una referencia que creo que todos ustedes conocen, al carácter inflacionista de los Presupuestos de la Seguridad Social. La Seguridad Social, señoras y señores, en la medida en que las cotizaciones están vinculadas a la masa salarial, ha sido pagada formalmente por los empresarios y por los trabajadores de este país, pero como SS. SS. (especialmente aquellos que conocen las técnicas presupuestarias, que también los hay entre los socialistas) saben, hay una cosa que se llama la incidencia, esto es, quien paga formalmente un impuesto o una cuota; y otro juego es el de las transferencias, que es de quien lo acaba pagando definitivamente. Y sepan (que creo que lo saben, y perdonen SS. SS. por ese recordatorio) que la transferencia, respecto de las cuotas de

la Seguridad Social, determina que éstas, cuya cuantía es importante y motiva fundadas quejas de los distintos sectores económicos y sociales vinculados a la Seguridad Social, acaban siendo pagadas a través de los precios del consumo y perfectamente saben ustedes la incidencia relativa alta que éstos tienen en las rentas de las personas que viven de su trabajo.

Hechas estas observaciones previas, quisiera detenerme por unos minutos, muy breves por supuesto, en señalar las características que desde el punto de vista técnico-financiero y contable reúne este Presupuesto-resumen de la Seguridad Social para señalar a SS. SS. por qué nosotros pedimos, sin más, su devolución al Gobierno y ulterior reconsideración. El alto grado de agregación del Presupuesto de la Seguridad Social hace, en nuestra opinión, absolutamente imposible en términos de seriedad; evidentemente otra cosa es que lo haga en términos de falta de seriedad, que los Diputados que carecen del entramado de los Presupuestos de las Entidades Gestoras, una a una, como es nuestro caso, puedan valorar adecuadamente este Presupuesto, analizarlo y juzgarlo en detalle.

No olviden SS. SS. que cuando hablo del entramado del Presupuesto me estoy refiriendo, nada más y nada menos, que a 68 Entidades Gestoras del Régimen General de la Seguridad Social, que me estoy refiriendo a los Presupuestos de 18 Entidades Gestoras de los distintos Regímenes Especiales, que me estoy refiriendo a los Presupuestos de tres servicios sociales y a cinco servicios comunes y que me estoy refiriendo a los Presupuestos de la nada despreciable cifra de 185 Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.

Resulta imposible, señoras y señores Diputados, analizar y juzgar un Presupuesto de 1.285.350.000.000 de pesetas, en el que hay nada menos que 812.000 millones de transferencias internas, respecto de las cuales quien les habla puede afirmar que no sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Y no tengo duda de que van y vienen, de que éste es el proceso y de que el viaje se produce dentro del sistema de la Seguridad Social, que no es ésa mi preocupación, señor Ministro; es, simplemente

te, de qué parte de la Seguridad Social vienen y a qué parte de la Seguridad Social van.

¿Cómo controlar, por tanto, señoras y señores, esos flujos financieros, si no se sabe el detalle de quién los transfiere y quién los recibe? Creemos, por otra parte, señoras y señores Diputados, que con lo dicho bastaría para que SS. SS. quedaran suficientemente informados de la desinformación que contiene el Presupuesto de la Seguridad Social; pero por si alguien fuera incrédulo y necesitara algún dato más para convencerse, yo me atrevo a proponerles el difícil, tal vez el imposible, ejercicio parlamentario —diría yo— del control de las inversiones reales previstas por el sistema de la Seguridad Social para el año 1978.

Se trata, créanme —así nos parece— de una tarea prácticamente imposible en el marco de un Presupuesto que, como el que estamos impugnando, tienen unas inversiones reales que no aparecen especificadas por programas. Nos encontramos, entendemos los socialistas, en la más absoluta oscuridad en el tema de los Presupuestos de la Seguridad Social, debido a que al Congreso se le hurtan legalmente —y perdonen que invente esta figura del «hurto legal»—, esto es, en cumplimiento de una Ley Presupuestaria que no nos convence (y haré referencia a ello), los Presupuestos de todas, repito, las Entidades Gestoras, Servicios Comunes, Servicios Sociales y Mutuas Patronales que constituyen lo que hasta ahora he llamado el sistema de la Seguridad Social de acuerdo con los términos convencionales, pero que SS. SS. me harán la licencia de que llame la jungla de la Seguridad Social.

Por ello, el Grupo Socialista del Congreso propuso una enmienda, la 336, que no se va a discutir hoy en esta Cámara, consistente en la inclusión en el articulado de una nueva disposición adicional por medio de la cual postulábamos la reforma de los artículos 51 y 148 de la Ley General Presupuestaria, de tal suerte que en nuestra postulación se pretendía que a esta Cámara se enviaran no sólo el Presupuesto-resumen, sino los Presupuestos, repito, de toda esa jungla de entidades, servicios, mutuas patronales, etc., que integran lo que

convencionalmente se llama el sistema de la Seguridad Social.

La enmienda no fue admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Presupuestos. Por ello, hoy no se encuentra esta enmienda aquí a debate, pero creo que no por eso hay que silenciarla. Si, como creemos, su aceptación hubiera evitado la repetición de la situación en 1978, procuraremos por nuestra parte poner los medios parlamentarios oportunos para que no ocurra a fin de ese año lo que este año, para que no nos encontremos —repito— a finales de 1978 en la situación en la que, honradamente, creemos que nos hemos encontrado en este invierno de 1977 a la hora de analizar los Presupuestos de la Seguridad Social, es decir, en la imposibilidad de analizarlos y de juzgarlos con la seriedad que esta Cámara requiere.

Pero la oscuridad informativa del Presupuesto, señoras y señores Diputados, entendemos que no queda desvelada por la lectura, por detenida que sea, de la memoria explicativa que se acompaña al mismo, ni por la de los libros de la colección verde que acompaña al Presupuesto-resumen, ni por el análisis del informe económico-financiero. Entre uno y otro documentos (y ruego a SS. SS. entretengan algún tiempo de estas Navidades en comprobar estas afirmaciones) hay repeticiones de datos, de tal suerte que lo que en la memoria se explica en cifras absolutas, en el informe económico-financiero se expresa en cifras relativas, esto es, en porcentajes. Si de uno y otro documentos eliminamos lo que de repetición de textos legales hay para información de los que no leen habitualmente el «Boletín Oficial del Estado» y eliminamos lo que de glosa en ellos hay de los Acuerdos de la Moncloa y la relación detallada de las 248 Entidades Gestoras, Servicios Sociales, Servicios Comunes y Mutuas Patronales, bien poco queda —aunque queda algo, evidentemente— para poder juzgar seriamente el sistema de la Seguridad Social y para poder llamar o, al menos, para poder utilizar el pomposo nombre de «Informe económico-financiero» que lleva en su apartado inicial el que así se llama. Ni tan siquiera, en nuestra opinión, el más mo-

desto de «Memoria» con que se titula la otra publicación.

Nada se dice en un Informe económico-financiero de algo que está en la realidad de nuestro país y que es absolutamente importante para que nos planteemos la evolución futura de la Seguridad Social y para que este Parlamento pueda debatir públicamente en el seno del mismo sobre lo que la Seguridad Social ha de ser; me estoy refiriendo concretamente a la morosidad de la Seguridad Social, ni en sus términos absolutos ni en sus términos relativos, esto es, en lo que podríamos llamar el ritmo, que entendemos es acelerado, de impagos. Evidentemente, tenemos cifras que conocemos sobre estos niveles de impagos, pero nuestra desinformación oficial es lo suficientemente grave como para que no podamos darlas, aunque, en todo caso, creemos que rebasa cumplidamente la cantidad de 200.000 millones de pesetas el volumen general y que los ritmos de impago no son inferiores al 15 por ciento.

No acaba aquí, señoras y señores Diputados, la desinformación con que el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social ha distinguido a esta Cámara, ya que el Gobierno, con manifiesto incumplimiento del artículo 148 de la Ley General Presupuestaria, no ha cumplido con la obligación de enviar a la misma el estado demostrativo del coste de los servicios.

Se trata, señoras y señores Diputados, de un documento que no se ha enviado; se trata, señoras y señores Diputados, de que existía la obligación legal de enviarlo; se trata, señoras y señores Diputados, de un quebrantamiento legal que, por sí solo, justificaría la devolución al Gobierno de los Presupuestos de la Seguridad Social y de la llamada documentación anexa. Se nos ha dicho en la Comisión de Presupuestos, por el representante del partido del Gobierno, que sí, que el estado demostrativo del coste de los servicios estaba allí, en los Presupuestos. Y para ello se ha acudido a la, para nosotros, falacia de identificar el concepto de gastos con el concepto de coste. Se nos decía que hay allí unos gastos y, evidentemente, que los hay en el resumen, y que éstos son los costos. Pregunta este Grupo Parlamentario, si así es —y ya

la palabra Presupuestos entraña, de una parte, ingresos y gastos—, ¿por qué el legislador especificó de manera concreta un documento que se llamaba estado demostrativo del coste de los servicios?

Como consecuencia de este quebrantamiento legal, el Gobierno ha impedido que esta Cámara conozca aspectos tan importantes que no están en el Presupuesto-resumen y que, por tanto, no salen del análisis de los gastos, como —valga unos ejemplos— para que SS. SS. tomen plena conciencia de los mismos. Por ejemplo —ya se ha aludido anteriormente aquí, pero la coincidencia demuestra, tal vez, que quien habló antes y quien habla ahora tiene la razón—, el coste detallado de los conciertos de asistencia sanitaria con clínicas privadas, que hacen de la sanidad un negocio, y con las que la Seguridad Social tiene conciertos que le van a costar, de no impedirlo SS. SS. con el voto favorable a la enmienda que les proponemos, la importante cifra de 44.201 millones de pesetas durante 1978, manteniéndose en no pocos casos, al menos en algunos, como le consta a este Diputado, pues ocurre que, por su circunscripción, una residencia de la Seguridad Social, la de la Virgen de la Arrixaca, de Murcia, con apenas siete años de existencia y simultáneamente con conciertos con empresas privadas en la misma ciudad. Entendemos, por tanto, que la omisión de este documento impide conocer a SS. SS., por ejemplo, el coste de las prestaciones médicas y económicas de los accidentados, como consecuencia de su trabajo, cuando esta específica contingencia del accidente de trabajo es cubierta no sólo por una mutua patronal que, como SS. SS. saben y el Ministro de Sanidad y Seguridad Social dijo en la Cámara, en una sesión que tuvimos en la Comisión de Sanidad y Seguridad Social, es una entidad privada, sino que comportaría un análisis, a nuestro juicio importante, qué cuesta la prestación de accidentes de trabajo en una Mutua patronal; qué cuesta en una Mutua laboral. Pues como SS. SS. saben, especialmente los que viven de su trabajo, hay una propensión genérica en las Mutuas patronales a cortar médicamente los períodos de convalecencia que no sucede por bien del servicio en las Mutuas laborales, sin que, por

otra parte, este Grupo Parlamentario esté pidiendo licencias ni patentes de curso para vagos, en absoluto. No se trata del caso. Se trata, simplemente, de que quede claro que existe una discriminación en el trato, que hubiéramos podido, tal vez, llegar a ella de manera objetiva y analizarla si hubiéramos tenido un estado demostrativo de los costos de los servicios y, lo que es lo mismo, un estado comparativo.

Nos impide, por otra parte, señoras y señores Diputados, la omisión de este documento, conocer los gastos de administración de la Seguridad Social en su detalle, que no en sus grandes partidas, o conocer el detalle de los gastos de las prestaciones farmacéuticas y lo que de ella acabe siendo exportación de divisas en favor de laboratorios multinacionales que tienen colonizado el país y que viven de la Seguridad Social.

La omisión de este documento, señoras y señores Diputados, nos hunde, a nuestro juicio, más, si es que cabe, en el pozo sin luz que es la Seguridad Social. Pero yo pregunto y termino, señoras y señores Diputados, ¿por qué no se ha enviado este documento? Sólo hay dos posibles soluciones: o existe o no existe. Yo no voy a dudar de que si existiera aquí estaría. Evidentemente sucede, señoras y señores Diputados, que el documento no existe, que no se ha elaborado, y nos parece que lo correcto hubiera sido decirlo claramente y no definir o tratar de defender que este documento es un gasto y que, por tanto, no hace falta traerlo de manera concreta, puesto que ya está incluido en el capítulo de gastos. Parlamentariamente, la verdad a veces es muy importante.

Quisiera, de todas formas, señalar que la desinformación que ha padecido la Comisión de Presupuestos en materia de Seguridad Social ha sido complementada, a nuestro juicio erróneamente en cuanto al lugar, por el titular del Ministerio de Sanidad y de la Seguridad Social en el seno de la Comisión de Presupuestos en reciente conferencia. No se trata de que hubiera venido el titular del Departamento a la Comisión de Presupuestos; se trata de que en política parlamentaria hay un estricto cumplimiento de ley, y nosotros hubiéramos preferido que las importantes informaciones que allí se dieron, y que no

figuran en el Presupuesto-resumen ni en la memoria ni en el informe, hubieran sido dados por escrito en el contenido de esos documentos que han sido remitidos a la Cámara.

Por lo hasta aquí dicho, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso pide a SS. SS. que no aprueben las «cuentas del Gran Capitán», que entendemos que son las cuentas de la Seguridad Social que hoy se someten a su consideración bajo la eufemística denominación de «Presupuesto-resumen de la Seguridad Social», y que, por su falta de claridad, nosotros llamamos «Presupuesto de cemento de la Seguridad Social», y que, por el contrario, aprueben y den su voto favorable a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, a fin de que se devuelvan al Gobierno los Presupuestos de la Seguridad Social, sin que ello entrañe ni paralización de la Seguridad Social —como ha dicho mi compañero Baldomero Lozano cuando ha hablado de los Presupuestos Generales del Estado—, ni cuestionar en absoluto importantes temas, como la revisión de las pensiones, que queda pendiente de resolver en estos momentos, por una omisión por el Gobierno de una revisión que estaba prevista para noviembre de 1977, que no se ha visto por ninguna parte, y que parece destinada a desaparecer; pero, en todo caso, pedimos se vote para que se devuelvan estos Presupuestos, sin cuestionar el funcionamiento normal, como es obvio, de la Seguridad Social.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rovira, para la defensa del dictamen de la Comisión.

El señor ROVIRA TARAZONA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, yo creo que puede admitirse que en la historia de la Seguridad Social, en la historia de los Presupuestos y en la historia de este Parlamento constituye hoy un acontecimiento, un hito que viene a marcar una nueva etapa en una institución tan vital y tan importante cual es la de la Seguridad Social.

Y es curioso: yo les invito a ustedes, señoras y señores Diputados, a que se pasen por la biblioteca y comprobarán que justamente

son los Presupuestos más importantes los que fueron más combatidos en su momento, los que fueron objeto de mayor polémica, y eso es sumamente razonable. Es lógico que en estos momentos nosotros actuemos sin poder percibir, por falta de perspectiva, lo que esto representa, lo que supone el que traigamos a esta Cámara un Presupuesto de la Seguridad Social, aunque sea un Presupuesto-resumen, porque así está establecido por la ley que está vigente. Yo creo, señores, que en ningún otro país del Mercado Común Europeo, y eso es fácilmente comprobable, los Presupuestos de la Seguridad Social son aprobados por las Cámaras. Tienen unos procedimientos absolutamente distintos. Solamente se aprueban por los Parlamentos aquellas subvenciones del Estado que aparecen en sus respectivos Presupuestos, pero jamás las de las distintas entidades gestoras, y ello como consecuencia de la gran complejidad de la Seguridad Social, complejidad que se ha puesto de manifiesto esta mañana al señalar que son 284 las entidades gestoras, cada una de las cuales tiene que elaborar su Presupuesto, que debe ser aprobado por su respectivo órgano de gobierno, para ser luego remitido al Ministerio de Sanidad para que compruebe si se ha verificado la clasificación funcional y económica en la forma adecuada, y para que lleve a cabo ese trabajo tan importante que es el de la consolidación. La consolidación de los Presupuestos de la Seguridad Social encierran una de las claves misteriosas de la misma, que estriba justamente en la existencia de las llamadas transferencias internas de la Seguridad Social. ¿Por qué existen transferencias internas? Existen porque a diferencia del Estado no hay una Caja única, hay diversidad de Cajas, cada entidad cuenta con sus respectivos ingresos y éstos son insuficientes en muchos de los casos, mientras que en otros hay superávit para poder atender a las respectivas necesidades y prestaciones. De ahí las transferencias que todas las Mutualidades Laborales realizan a la Caja de Compensación, las que luego realiza la Caja de Compensación a favor de aquellas Mutualidades Laborales que no tienen los suficientes recursos para atender a las mejoras de pensiones, así como en favor de aquellos re-

gímenes especiales, como es el régimen agrario, cuya insuficiencia es notoria, ya que no solamente no le bastan sus 49.000 millones de pesetas (ni siquiera los que recibe del Estado, 31.000 millones de pesetas), sino que recibe una cantidad importantísima de 139.000 millones de pesetas del Régimen General de la Seguridad Social. Y eso mismo ocurre con la minería del carbón, que necesita del Régimen General de la Seguridad Social 10.000 millones de pesetas, o con otros regímenes especiales.

Existen también las transferencias en favor del Fondo de Pensiones y Garantías, que son consecuencia de la constitución de los capitales-renta, a fin de hacer frente a los posibles futuros accidentes de trabajo y que deben de constituirlos las respectivas entidades gestoras, Mutualidades Laborales o Mutuas patronales. Ahí encontraremos también una explicación de los 61.000 millones de pesetas destinados a inversión, de los cuales 41.000 millones son para inversiones reales por construcción de instalaciones sanitarias, o de otros servicios, y justamente la cantidad de los 20.000 millones restantes que es la que queda como capital y que se materializa en inversiones financieras.

Yo creo que es muy importante que al darnos cuenta de este momento histórico comprobemos el viraje que se da en el control de la Seguridad Social. Me parece que no es justo el presentarse hoy con una crítica tan negativa y rotunda, simplemente porque se ha cumplido lo que dispone la ley. En todo momento se podrá modificar la ley y, en todo caso, habrá que exigir su cumplimiento; pero, entretanto, debemos ser respetuosos con la ley vigente, valorando la importancia de este acontecimiento.

El control que se inicia en estos momentos es seguido por el control posterior de la Intervención General del Estado, establecido mediante una disposición reciente y el control posterior que se realiza presentando las cuentas del Tribunal de Cuentas del Reino quien deberá unir las a la Cuenta General del Estado para que, con su dictamen, lo remita a las Cortes y nuevamente sean éstas las que de forma exhaustiva ejerzan ese control y fiscalización de toda la gestión de la Seguridad Social.

Yo creo que en el Presupuesto de este año se han producido hechos sumamente importantes. No solamente es este que señalamos, que supone una variación en el control, iniciándose una etapa nueva en esta materia, sino que existen también principios importantes a los que no se han aludido esta mañana, pero que yo quisiera hacer resaltar. Por una parte, está el relativo a los ingresos, la importancia que ya va a tener para el futuro la financiación a través de la aportación del Estado. En el año 1977, el presente año, la aportación del Estado es exclusivamente del 3,29 por ciento; en los nuevos Presupuestos que se someten hoy a la Cámara se acerca ya al 8 por ciento y en los «Acuerdos de la Moncloa» se dice que se inicia así un nuevo camino, que es el de ir incrementando la aportación del Estado hasta llegar al 20 por ciento en el año 1983, cifra que nos homologa con el resto de los países europeos y que, por consiguiente, supone un avance importante, ya que en Francia, por ejemplo, su aportación es exclusivamente del 10 por ciento; en Alemania, del 20 por ciento; en Italia, del 23 por ciento, etc.

Hay una denuncia fundamental muy concreta en la enmienda del Grupo Socialista que verdaderamente podría, quizá, colocar el dedo en la llaga de si se ha cumplido o no con la legislación vigente, y que consiste en si falta o no el que se ha llamado estado demostrativo del coste de los Servicios. Lo que exige la ley es que con el Presupuesto-resumen se acompañen las cuentas y balance de la Seguridad Social que se han presentado.

En tercer lugar, un informe económico y financiero explicativo de la estimación de los ingresos y gastos y estudio demostrativo del coste de los servicios. Pero esto último no se incluye en un mismo apartado, y por ello hay que concluir que se trata de un mismo documento. Es el informe económico-financiero. En ese informe económico-financiero se incluye ese estudio. ¿Hay o no ese estudio? Yo tengo que decir con toda sinceridad, con la sinceridad que exige un Presupuesto que, por supuesto, no va el estudio demostrativo que pide el Grupo Socialista, sino que va el estudio demostrativo que es coherente con un Presupuesto-resumen que se está refiriendo a unas cifras globales, en

las que no se menciona cuáles son las entidades concretadas, no se detallan, como se ha pedido, tantos y tantos desgloses de las respectivas partidas. Pero lo que ahí sí se recoge, por cada una de las prestaciones, es cuál es su coste y, sobre todo, se marca el énfasis en cuál es la justificación en relación al incremento que experimentan en este Presupuesto.

Creo que es un punto importante el que podamos ver cuál es la evolución de estas prestaciones para el año 1978, porque ahí debe estar la clave de la política de la Seguridad Social, y así vemos que las pensiones se incrementan en un 30 por ciento, mientras que, en cambio, el incremento del coste sanitario es el 13 por ciento. La incapacidad laboral transitoria y la invalidez profesional se incrementan en tres puntos más que lo que permiten los «Acuerdos de la Moncloa» en relación a los incrementos salariales y, en cambio, el incremento de los servicios sociales es cuatro puntos por debajo de ese tope.

En cuanto a los gastos de administración, se dice con toda claridad que consisten en el 3,63 por ciento del Presupuesto de la Seguridad Social, el más bajo de los últimos años y, por supuesto, inferior al índice autorizado, que es el del 5 por ciento. Esto quiere decir, entonces, que se ha cumplido la ley, pero basándose en que el cumplimiento de la ley obliga a la presentación de un Presupuesto-resumen y que los documentos son coherentes con la presentación de ese Presupuesto-resumen, porque los apartados a), b) y c) vienen a acompañar la primera obligación, que es la de que el Gobierno unirá a los Presupuestos Generales del Estado el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social. Es razonable que los documentos que acompañan a este Presupuesto-resumen tengan que ser coherentes con él y tengan que estar explicando las cifras que vienen en el Presupuesto-resumen.

Por consiguiente, en el caso de que el Parlamento desee que ese Presupuesto que se presente a las Cortes sea un Presupuesto por entidades gestoras o tenga un mayor detalle es preciso modificar la ley. Creo que el representante del Grupo Socialista lo ha dicho perfectamente: La ley se ha cumplido. La ley le podrá o no gustar, pero se ha cumplido y,

por consiguiente, lo necesario será, si es que procediera, el cambiarla, pero, entre tanto, en ningún caso devolver unos Presupuestos que se ajustan al cumplimiento de la ley.

En cuanto a si se ha cumplido o no el «Pacto de la Moncloa» en relación al traspaso de determinados servicios al Estado, hay que tener en cuenta, a su vez, las siguientes circunstancias. Los Presupuestos tienen que hacer en estos momentos referencia a las situaciones actuales; los acuerdos deben ser instrumentados con las correspondientes leyes, así se dice en el «Pacto de la Moncloa» en relación a este apartado. El Presupuesto no puede modificar por sí mismo la situación actual.

Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, creo que nos encontramos, como decía al principio, en un momento importante, en un momento en que se inicia una nueva era de la Seguridad Social, que podrá perfeccionarse —como todo lo humano es perfeccionable—, pero creo que en estos instantes lo más importante de valorar no son aquellas críticas que a toda obra humana pueden hacerse, sino el hecho político trascendental de que a partir de esta sesión el Parlamento, «a priori» y «a posteriori», podrá controlar la Seguridad Social y podrá tener conocimiento de cuáles son sus cuentas y sus gastos.

El señor PRESIDENTE: A continuación, señoras y señores Diputados, corresponde la votación de las enmiendas formuladas al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social.

Entendemos que, como las tres son enmiendas a la totalidad, en vez de votar una a una (a no ser que los representantes de los Grupos Parlamentarios así lo pidieran), podríamos hacer una sola votación para las tres enmiendas. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)

Procedemos, pues, a la votación de las tres enmiendas formuladas al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 161; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las enmiendas formuladas al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social.

Ahora procede la votación del Presupuesto-resumen de la Seguridad Social.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 165; en contra, 132; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social en su totalidad.

Para terminar todos los capítulos correspondientes a la totalidad de las Secciones, y habida cuenta de que hay Secciones que no han sido objeto de enmienda, vamos a proceder a la votación en bloque de todas las Secciones no enmendadas; es decir, las Secciones 1, 3 a 7, 12 a 16, 19, 21 a 23 y 25, que, como digo, no haya sido objeto de ninguna enmienda a la totalidad.

Vamos a votar, por tanto, en un solo bloque todas las Secciones que no han sido objeto de enmienda.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 301; en contra, cinco; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las Secciones no enmendadas del Presupuesto sometido a la consideración de la Cámara.

Señoras y señores Diputados, antes de levantar la sesión, quiero recordar a los miembros de la Comisión de Presupuestos que la misma se reúne esta tarde a las cuatro.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Comunista para explicación de voto.

El señor BONO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados. Al final

de esta mañana hemos aprobado una serie de artículos y Secciones, entre las cuales está la Sección 14, que corresponde al Ministerio de Defensa.

El Grupo Parlamentario Comunista ha dado su voto positivo, no obstante quisiéramos aprovechar esta ocasión de explicación de voto para hacer una serie de observaciones que creemos de gran interés para la soberanía nacional y, en concreto, nos referimos al servicio correspondiente al antiguo Ministerio de Marina.

El Grupo Parlamentario Comunista presentó una enmienda en esa dirección, la 27, que no fue admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Presupuestos por implicar un aumento del gasto sin disminución de otras partidas de la misma Sección. Sin embargo, creemos que ésta es una buena ocasión para reflexionar sobre este tema.

En efecto, según el proyecto del texto constitucional en su artículo 10 se dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Sin embargo, la partida presupuestaria que Hacienda ha concedido este año a la Armada en concepto de combustible trae como consecuencia la imposibilidad real por parte de la Marina de hacer frente a las obligaciones que le son inherentes.

En efecto, si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda concede la cantidad de pesetas 945.954.000, máximo autorizado por el Real Decreto-ley 5/1977, de 5 de enero, sin embargo suprime el crédito suplementario que concedía todos los años por este concepto y que, en los tres últimos años, ascendió a la cifra de 408 millones de suplemento anual, reconociendo la insuficiencia de esta partida.

La realidad de estas cifras es concluyente. Con la dotación actual la Marina se verá inexorablemente obligada a reducir sus salidas al mar en más de un 70 por ciento durante el año que viene.

Si tenemos en cuenta la peculiaridad de nuestros límites geográficos, con más de tres quintas partes de frontera marítima, es fácilmente perceptible que la Marina debe jugar un papel destacado dentro de las Fuerzas Armadas en la defensa de nuestra soberanía

nacional. Si, además, tenemos en cuenta la presumible ampliación de nuestras aguas jurisdiccionales al límite de 200 millas, la necesidad de atender el enclave estratégico de las Islas Canarias, el apoyo a nuestra flota pesquera, son más que motivos para tener en cuenta la insuficiencia que implica esta falta de dotación. Además, esta reducción del 70 por ciento de sus salidas al mar supondría para nuestra flota una pérdida absoluta de eficacia y operatividad, siendo extremadamente costoso en tiempo y diseño volver a alcanzar las cotas anteriores de rendimiento, situación que conlleva un debilitamiento de nuestra defensa exterior y un profundo malestar del personal profesional que se ve imposibilitado así de cumplir las tareas que el país le ha encomendado.

En relación a las inversiones, la Ley de 21 de julio de 1971, número 32/1971, de la Jefatura del Estado, reguló el programa de inversión de los tres Ejércitos por un período de siete años...

El señor PRESIDENTE: Se recuerda la cortesía parlamentaria, porque está interviniendo un compañero de este Congreso. Por favor, silencio. Atiendan ustedes.

El señor BONO MARTINEZ: En su artículo 2.º dispuso, para la realización del mencionado programa en el año 1972, un crédito de 19.000.350.000 pesetas a repartir entre los tres Ejércitos y el Alto Estado Mayor, para todos los capítulos, excluido el de personal, estipulándose que en años sucesivos los créditos de gastos militares tendrían un porcentaje de incremento anual acumulativo igual al del ejercicio de 1972, lo que significa un incremento anual para la Marina de un 19,2 por ciento.

Dicha ley preveía, asimismo, su revisión a mitad de su vigencia para atenuar los efectos negativos de la inflación en el programa de inversiones. Sin embargo, la revisión no se realizó en 1975, como estaba previsto, sino en enero del año en curso en virtud del Real Decreto de 25 de enero de 1977, número 5/1977, que modificó y prorrogó la vigencia del anterior hasta el 31 de diciembre de 1982, según dispone su artículo 1.º, para la realización del programa conjunto de inversiones,

mantenimiento y reposición de materiales y armamento.

La revisión efectuada a tenor de su artículo 2.º supone un aumento global de 4.544 millones de pesetas, de los cuales corresponden a la Marina unos 1.100 millones de pesetas, lo que significa un incremento anual del 30,58 por ciento. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y aplicando ese incremento del 30,58 por ciento al Presupuesto del año 1977, resulta una cifra aproximada de 22.104 millones de pesetas frente a los 21.000 millones concedidos por Hacienda, con un saldo negativo del orden de los 1.100 millones de pesetas. A esta cantidad hay que añadir los 408 millones correspondientes a combustibles y 315 millones, aproximadamente, correspondientes a dietas. Ambas partidas pertenecen al capítulo 2.º, que al suprimirse los créditos suplementarios concedidos por Hacienda en años anteriores por estos conceptos e incluirse en el ámbito de aplicación de la presente ley suponen una detracción «de facto» de los recursos destinados a inversiones propiamente dichas, alcanzándose en total una reducción del orden de casi 2.000 millones de pesetas y produciéndose, en consecuencia, una rebaja aproximada del 10 por ciento de las inversiones del programa naval.

Ignoramos, señoras y señores Diputados, los motivos por los que Hacienda ha incumplido los preceptos legales antes citados, pero todo hace suponer que se ha producido una aplicación indebida del «Pacto de la Moncloa» al capítulo de inversiones, pues la reducción parece coincidir con el techo del 22 por ciento que, lógicamente, sólo debiera aplicarse a los sueldos del personal militar.

Si por otro lado tenemos en cuenta que el tonelaje de la flota era de 240.000 toneladas el año 1973 y que ahora es de 190.000 toneladas y que, de persistir los actuales criterios de inversión, dicho tonelaje se habrá reducido a 145.000 toneladas en el año 1980; y teniendo en cuenta que de estas 145.000 toneladas el 50 por ciento pertenecen a buques de menos de diez años de existencia, una edad adecuada, pero que el otro 50 por ciento son de edad superior a los veinticinco años, creemos que en estas condiciones difícilmente la Armada puede cumplir los fines de defensa que la nueva Constitución le va a asignar.

El señor PRESIDENTE: El representante de la Minoría Catalana tiene también solicitada la palabra para hacer una breve explicación de voto.

El señor TRIAS FARGAS: Señor Presidente, señores Diputados, me parece oportuno este momento, al final de las enmiendas a la totalidad y cuando vamos a empezar con las enmiendas parciales, para explicar el voto, que por extensión podrá aplicarse a los demás votos que han precedido y que van a seguir, por parte nuestra, en la sesión de ayer,

Esta mañana nos hemos abstenido de votar las enmiendas a la totalidad por una cuestión pragmática en el sentido de ofrecer al Gobierno la posibilidad de gobernar, de seguir adelante y ante la alternativa de que el fracaso pudiera traer consecuencias de empeoramiento, puesto que tendríamos que recurrir al Presupuesto anterior, desde luego más franquista que el actual.

Por otro lado, queremos también advertir que el criterio nuestro es, en esta enmienda y en todas, el de que el Presupuesto no debe servir para arreglar cuestiones políticas de importancia. El Presupuesto debe reflejar las consecuencias económicas de la legislación que en esta sala se apruebe previo debate y en legal forma de acuerdo con nuestro Reglamento. El intentar introducir en el Presupuesto por la puerta de servicio enmiendas de política me parece que no es la fórmula adecuada, ni técnica ni éticamente.

Por tanto, queremos advertir que, si hay que hablar de subvencionar o no la enseñanza privada, por ejemplo, o de privatizar más o menos la Seguridad Social, eso es algo que debe ser objeto de un proyecto o una proposición de ley, en su caso, y después del debido debate, debe quedar reflejado el tema económicamente en los Presupuestos, pero no al revés.

En segundo lugar, quisiera también decir que es criterio general nuestro el que hay una serie de temas que tienen menor importancia que otros y que, por tanto, no quisiéramos que sirvieran para prejuzgar nuestra posición política general. Por ejemplo, si va a haber 120 millones para un ballet español, o si se van a dar 16 millones de pesetas para el Real Aeroclub de España, o si se va a reconstruir

el Teatro Nacional de Madrid, etc., son cuestiones en las que vamos a votar según sus propios méritos y no porque tengamos una línea política determinada que pueda quedar influida o prejuzgada por esas cuestiones singulares.

En consecuencia, creo que puede servir de aclaración para este y sucesivos votos el que nosotros, siempre que sea posible y haga falta para que se pueda gobernar, votaremos a favor o por lo menos no perjudicaremos el voto del Presupuesto. Siempre que haya cuestiones que se quieran introducir a través del Presupuesto, saltándose la norma que debe ser la vigente, que es el debate público de la Legislación correspondiente, nosotros estaremos en contra; y siempre que haya cuestiones singulares, enmiendas parciales que puedan realmente tener personalidad propia, no necesariamente encajable en una política general, nosotros votaremos según los propios méritos. En consecuencia, no nos sentimos ligados por una tendencia o por otra.

En plan estadístico puedo advertir que en las enmiendas parciales que van a venir ahora y que tengan voto particular nosotros votaremos probablemente mitad y mitad, entre la oposición y el Gobierno. Que quede claro que esto es una pura coincidencia.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, corresponde ahora el examen del articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Dentro de este proyecto de ley ha habido nada más que una enmienda al artículo 14, aunque hay solicitadas varias explicaciones de voto a algunos de los artículos.

Consecuentemente, entendemos que debemos proceder a la votación de los artículos que no tienen en este momento presentadas enmiendas, hasta que lleguemos al artículo 14, en el que se producirá el debate correspondiente a la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario correspondiente.

En consecuencia, procedemos a votar los artículos 1.º al 7.º, globalmente, del proyecto de ley de Presupuestos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; votos a favor, 303; votos en contra, cinco; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Consiguientemente, quedan aprobados los artículos 1.º y 7.º del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

A continuación, procedemos a votar el artículo 8.º de este proyecto de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; votos a favor, 197; en contra, tres; abstenciones, 106; nulos, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 8.º del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Sobre este artículo 8.º tiene solicitada explicación de voto el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista del Congreso acaba de abstenerse en la votación sobre el artículo 8.º del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado; artículo relativo, como SS. SS. conocen, a las retribuciones de los funcionarios públicos y de los contratados administrativos.

En el turno de explicación de voto queremos quede constancia ante esta Cámara de que en su día, en tiempo hábil, el Grupo Socialista del Congreso presentó una enmienda a la totalidad del artículo 8.º, que es la que SS. SS. tienen con el número 237 en el folleto a tal efecto editado por la Cámara.

Tal enmienda al artículo 8.º, señoras y señores Diputados, iba dirigida, en primer lugar, a congelar los aspectos negativos sobre retribuciones de funcionarios y de contratados administrativos contenidos en el Decreto-ley de 30 de marzo de 1977, por el que el Gobierno de la Monarquía modificó varios aspectos relativos a la función pública, entre ellos y de manera especial los relativos a las retribuciones de los funcionarios.

El Gobierno en el artículo 8.º contenido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado pretendía cristalizar el Decreto-ley 22-1977, de 30 de marzo (al que antes he aludido), pretendía consolidarlo, pretendía ratificarlo mediante esta Ley de Pre-

supuestos. No pretendía, señoras y señores Diputados, otra cosa, sino que, desde esta Cámara, quienes resultamos elegidos representantes del pueblo el 15 de junio, ratificáramos un Decreto-ley, el de 30 de marzo al que repetidamente he aludido, que por su, para nosotros antidemocrático origen y por su regresividad, mereció el rechazo de miles y miles de funcionarios y de sus sindicatos democráticos, salvo en algún punto concreto al que posteriormente voy a aludir.

El mencionado Decreto-ley no es para el Grupo Socialista sino una alternativa (autoritaria, por supuesto) que no intentaba escuchar a los funcionarios, sino poner fin al caos retributivo que este país padece en materia funcional desde que la tecnocrática Ley de Funcionarios, de 1964, y la no menos (para nosotros, al menos) tecnocrática y a la vez elitista Ley de Retribuciones, de 1965, entraron en el mundo del Derecho Administrativo positivo.

El Decreto-ley antes mencionado contiene dos aspectos que fueron juzgados positivos por los trabajadores de la Administración pública, concepto que como SS. SS. conocen, y que es la primera vez que en esta Cámara se utiliza, incluye dentro de él tanto a los funcionarios públicos como a las personas que mediante vínculo administrativo o laboral trabajan para la Administración.

Repito que el Decreto-ley contenía dos aspectos positivos. Estos eran, en primer lugar, el establecimiento de niveles o índices de proporcionalidad en atención a los niveles educativos o de titulación exigidos para el ingreso en la función pública; niveles que venían a sustituir lo que, como SS. SS. conocen, reglamentaba básicamente las retribuciones de los funcionarios públicos en la etapa anterior, esto es, los coeficientes.

SS. SS. conocen perfectamente que en la etapa anterior se había desatado una auténtica guerra por los coeficientes de unos y otros Cuerpos, que querían, con una misma titulación, tener (siempre, como es lógico, dentro de este nivel de intereses, que no es un nivel de solidaridad entre funcionarios, sino de enfrentamiento entre funcionarios), coeficientes superiores.

Repito que éste era el primer aspecto positivo: el sustituir los coeficientes por el in-

dice de proporcionalidad. El segundo aspecto positivo del Decreto-ley, y que como tal ha sido admitido por la función pública española que presta sus servicios actualmente, era que, como consecuencia del establecimiento de cinco niveles de titulación, se venían a igualar las retribuciones básicas de los funcionarios, constituidas como SS. SS. saben por el sueldo base y la antigüedad, de tal suerte que se igualaban las retribuciones básicas y desaparecían las diferencias preexistentes en materia de retribuciones fundamentales.

¶ Pero el Decreto-ley (y el tema está íntimamente relacionado con el objeto de las enmiendas que presentamos en su momento), contenía aspectos gravemente negativos en materia retributiva, cuya consolidación habría significado la cristalización de los privilegios de que gozan en este país los Cuerpos de élite de la Administración pública. Me estoy refiriendo, señoras y señores Diputados, como ustedes saben perfectamente, al grave tema de las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos.

De acuerdo con la Ley de Retribuciones, de 1965, que aún está vigente, las retribuciones complementarias, esto es, complemento de destino y prolongación de jornada, eran objeto y motivo de profunda desproporción retributiva entre los funcionarios, entre los que residen en Madrid y los que residen en provincias, ya que los destinos están habitualmente en mayor número en Madrid y entre los altos Cuerpos y los bajos, porque los destinos normalmente los tienen los funcionarios que pertenecen, o pertenecemos —cual es el caso del que habla—, a altos Cuerpos. Esto importa señalarlo porque se produce un elemento de distorsión evidentemente injustificado entre los funcionarios de altos Cuerpos y de los modestos y entre los funcionarios de Madrid y los conocidos en el lenguaje habitual de los funcionarios como funcionarios periféricos.

El Decreto-ley de 30 de marzo venía a sustituir esta situación anterior que hemos censurado por esos dos motivos de desproporción y establece un nuevo criterio de ordenación de las retribuciones de los funcionarios públicos en base a un nuevo concepto: el grado. Concepto el de grado utilizado, en

opinión del Grupo Socialista del Congreso, no sólo para discriminar a los funcionarios modestos respecto de los funcionarios de titulación superior, sino, lo que es aún más grave, para discriminar dentro de un mismo nivel de titulación a unos funcionarios respecto de otros según el Cuerpo al que se pertenezca.

Nos encontramos, por tanto, señoras y señores Diputados, con que el tema no es sólo una discriminación intercorporativa, o inter-nivel educativo, sino intranivel educativo dentro de los mismos niveles educativos, dentro de los mismos niveles de titulación.

Estas graves discriminaciones que el Decreto-ley de 30 de marzo contiene, evidentemente el Grupo Socialista no podía aceptar, y no podía aceptar, como fácilmente comprenderán los señores Diputados, que cristalizaran en el texto del Presupuesto General del Estado como consecuencia de la ratificación del Decreto-ley por vía de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El Decreto-ley de 30 de marzo, por otra parte, seguía una técnica habitual en materia de función pública en este país: la de dejar en manos del Gobierno unos importantes campos y parcelas de discrecionalidad en materia de retribuciones de funcionarios, de tal suerte que si antes en el vigente régimen del 65 se dejaban en manos de éste importantes parcelas en cuanto al destino o no, a la distribución de los créditos globales, de incentivos o de complementos, en la propuesta que hacía el Decreto-ley de 30 de marzo (y lamento que no se encuentre en la Sala el Ministro de la Presidencia responsable de la materia), la asignación de grados iniciales de cada Cuerpo ofrecía el elemento de discriminación posible en manos del Gobierno para unos funcionarios respecto de otros, puesto que podría ocurrir —y de hecho ocurrirá si no ponemos remedio a ello y creo que en alguna medida se ha puesto ya como posteriormente señalaré a Sus Señorías— que dentro de un mismo nivel de titulación y de índice de proporcionalidad los funcionarios de determinado Cuerpo empezaran en el punto uno, el más modesto, en tanto que otros empezaran en el tres o en el cuatro, con lo que comporta de ventaja, de salida en materia retributiva complementaria difícilmente soluble por otra vía.

Nosotros, el Grupo Socialista del Congreso, nos opusimos, por tanto, señoras y señores Diputados, a la cristalización de este Decreto-ley, objetivo que se ha cumplido. Esto es importante señalarlo para que sea conocido al detalle por Sus Señorías y también por los funcionarios públicos. Pero no era este objetivo, el de evitar la cristalización del Decreto-ley, el único que pretendíamos.

El segundo objetivo con nuestra enmienda 237 era dejar constancia ante la Cámara, y así consta en el encabezamiento de la misma, de la necesidad de un nuevo Estatuto de la Función Pública para poner término a tanto caos funcional, para poner término incluso a tanta corrupción retributiva, para democratizar la Administración y también, justo es decirlo, para aumentar su eficacia.

Pero teníamos, obviamente, más objetivos y por eso paso seguidamente a explicarles el tercero, que no era otro que entre tanto llega este Estatuto de la Función Pública que postulábamos, y al que posteriormente aludiré (pues hay una moción en el seno de la Comisión en tal sentido y nosotros los Socialistas del Congreso aportaremos, por supuesto, en ese momento todo el acervo de conocimientos de la función pública que la organización sindical funcional de la UGT, Federación de trabajadores de la Administración pública, tiene y comporta por razón de la militancia de los mismos), nosotros pedíamos que la retribución de los funcionarios públicos durante 1978 creciera linealmente mediante la distribución del total aumento de la masa salarial de los funcionarios públicos por partes iguales entre todos ellos y, asimismo, entre todos los contratados administrativos.

Nuestra pretensión, como fácilmente comprenderán Sus Señorías, no era otra que la de intentar reducir las diferencias retributivas abismales, a las que anteriormente he aludido, entre unos y otros funcionarios; diferencias, como saben Sus Señorías, también existentes entre los contratados administrativos que sustituyen a un funcionario que no ocupa determinada plaza porque no está cubierta y lo que cobraría ese funcionario al estar en el ejercicio de su función en la plaza. Repito que nuestra posición era terminar con las discriminaciones retributivas.

Nuestra enmienda, relativa a la distribución

lineal del aumento de la masa salarial, no fue admitida por la Mesa de la Comisión en este punto concreto al considerar que por su incidencia en clases pasivas entrañaba un aumento del gasto público, al igual que tampoco se aceptó nuestra proposición de fijar un salario base para los funcionarios públicos —y perdonen la referencia que voy a hacer— cuando menos igual al salario mínimo.

Nosotros, los socialistas, entendemos que la subida retributiva lineal es hoy la única solución posible, y por eso la hemos postulado. Pero no era éste nuestro único objetivo con la enmienda antes mencionada, puesto que seguidamente pretendíamos que si, como consecuencia de los «Acuerdos de la Moncloa», los trabajadores pueden tener (esperemos que el Gabinete se encargue de que no ocurra para que no suban los precios) una revisión de su salario el primero de julio, postulábamos también una revisión automática en materia retributiva con efectos de primero de julio de 1978 si el crecimiento del índice de precios al consumo al 30 de junio superaba el 11,5 por ciento.

Nuestra enmienda en este punto concreto tampoco fue admitida a trámite, motivo por el que nosotros, los socialistas, queremos poner de relieve ante esta Cámara no sólo la discriminación que ello supone respecto de los trabajadores por cuenta ajena, sino también la contribución forzosa de los funcionarios públicos y de los contratados administrativos, con su ya garantizada congelación salarial durante 1978, a lo que pudiéramos llamar el coste de superación de la crisis.

Nuestro quinto objetivo, señoras y señores Diputados, y termino en breve, era lograr la publicidad de las retribuciones. Conocida es la opacidad con que ha actuado y actúa no sólo la Junta Central de Retribuciones, sino las Juntas de Retribución de los distintos Departamentos Ministeriales.

Nuestra fraternal Federación de Trabajadores de la Administración Pública, la ya mencionada UGT, entendía, y el Grupo Socialista lo hizo suyo, era preciso en 1978, con la finalidad de lograr esa máxima transparencia, en su primer trimestre, que la Junta Central de Retribuciones publicara en el «Boletín Oficial del Estado» la situación retributiva de todos los funcionarios públicos españoles,

con todo detalle, y sin que nada quedara fuera, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» cada mes los acuerdos adoptados en el mes anterior por dicha Junta Central de Retribuciones.

Estos eran, repito, señoras y señores Diputados, los cinco objetivos de nuestra enmienda al artículo 8.º, que ha sido votado y en torno al cual nos hemos abstenido.

Comprenderán SS. SS. que la falta de datos con que hemos contado para analizar con detalle el maremágnum retributivo de la función pública exigía una alternativa: o que los trabajos en la Comisión hubieran terminado en el mes de febrero cuando menos, o bien proceder de la manera más razonable a una inmediata aprobación de los Presupuestos, sin perjuicio de dejar constancia específica de la posición del Grupo Socialista en este punto, como se ha dejado en otros.

Cosa distinta hubiera sido que, como con galanura ha reconocido el señor Ministro de Hacienda, estos Presupuestos hubieran llegado antes a la Cámara, pues habríamos contado con mayor tiempo e información para buscar soluciones más progresivas que el texto que finalmente se ha sometido a la aprobación de la Cámara, que mejora, en materia retributiva, la posición inicial de incrementos porcentuales previstos por el Gobierno, pero que no comporta un texto satisfactorio para el Grupo Parlamentario Socialista.

El Grupo Parlamentario Socialista, habida cuenta de que su enmienda de distribución lineal del aumento de la masa salarial no fue admitida, entiende que la dinámica de las distintas enmiendas presentadas ofrecía una oportunidad singular. Me estoy refiriendo concretamente —y creo que esta mañana ya lo ha hecho el Representante del Grupo Mixto— a una enmienda de la Unión de Centro Democrático, del señor Soriano, que era menos progresiva que la nuestra, pero que, sin perjuicio de que tenía un texto necesitado de concreción, ofrecía, de acuerdo con las posibilidades del Reglamento, articular una enmienda «in voce» menos progresiva que la nuestra, pero más que la forma en que finalmente ha quedado el texto.

Razones, que no son del caso, determinaron la no presencia del señor Soriano para su defensa. No entro en ello; valorarlo o no es

cuestión de su Grupo Parlamentario, no me compete. Simplemente quiero decir que con la pérdida de esta enmienda perdimos la posibilidad de encontrar una mejor solución del tema, aunque en todo caso, repito, era menos satisfactoria que la propuesta que inicialmente el Grupo Parlamentario Socialista había hecho de distribución igualitaria de los aumentos de retribuciones.

Señoras y señores Diputados, por todo este aspecto, no entraña satisfacción el texto final, aunque evidentemente se han logrado algunos aspectos positivos, como hemos señalado, pero esto es lo que fundamentalmente determina nuestra abstención en la materia, puesto que no podemos dar una adhesión a un texto que no comporta el mínimo nivel de identificación, aunque, en puntos concretos, los socialistas que hemos estado en la Ponencia reconozcamos no la paternidad, pero sí, al menos, nuestra aportación.

Finalmente, y termino, decir que los Socialistas del Congreso confiamos de una parte en que la Sección Especial de Encuesta, que como consecuencia de los Acuerdos de la Moncloa se ha creado en la Comisión de Presupuestos, sea una posible vía para que conozcamos claramente las retribuciones de los funcionarios públicos. Por otra parte, junto a la idea de la creación concreta de esta Comisión, la moción elevada por la Comisión al Gobierno, de que antes del 30 de abril mande a la Cámara el proyecto de ley sobre el Estatuto de la Función Pública que regule todo el tema, incluido el de retribuciones, es la única esperanza que a cientos de miles de funcionarios públicos españoles les queda en estos momentos.

El señor GARCIA AÑOVEROS: Pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor García Añoberos, pero tenía pedida ya la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto. Luego se la concederé al Grupo de Unión de Centro Democrático y, después, al Grupo Parlamentario Comunista.

Les recuerdo a los señores Diputados que la duración limitada de la explicación de voto es de diez minutos.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor SANCHEZ AYUSO: Voy a explicar el voto del Partido Socialista Popular en relación con el artículo 8.º. Nos hemos abstenido por razones que ya esta mañana han sido avanzadas. Es cierto que el artículo 8.º actual ha cambiado desde su redacción original a la presente, a través de la aprobación parcial de algunas enmiendas, entre las cuales hay algunas nuestras. Entre otros puntos merece destacar que se han atendido nuestras argumentaciones con respecto al grado inicial. A este respecto quería indicar que, como saben Sus Señorías, éste es un nuevo concepto retributivo regulado por el Decreto de 30 de marzo de 1977, el cual establece un sistema de grados por años de servicios, partiendo de un grado inicial discriminado por cada Cuerpo o escala de funcionarios. Lo que nosotros temíamos es que la asignación de grados sirviera para consagrar de alguna forma los actuales privilegios corporativos.

También pensábamos que no era admisible que la disposición por la que asignan los grados iniciales tenga las mismas características que tuvo el Decreto de 22 de mayo de 1965, por el que se determinaron los coeficientes multiplicadores de los funcionarios civiles, con una vuelta al pasado y a la forma y métodos del Gobierno que lo patrocinó. Sabemos que el Decreto de coeficientes citado se caracterizó por la ausencia total de motivos y justificaciones en la asignación y por la arbitrariedad y participación excesiva de funcionarios privilegiados, etc.

Los grados iniciales asignados en cualquier caso, en función del viejo decreto de coeficientes, podrían convertir la Administración Pública en un foco de tensiones y luchas que incapaciten la acción pública. Por estas razones era lógico que se dejara en suspenso la determinación del grado inicial.

Ahora bien, nosotros argumentábamos que, como quiera que en el proyecto de ley se destinaban unos fondos a esta atención y las cantidades referentes a grados tienen consideración de básicas y computables a efectos pasivos, es justo que no se perjudicara a los pensionistas por tal motivo. Por esta razón se convino en la Ponencia una asignación provisional, computable a efectos pasivos, de un 8 por ciento del sueldo.

También nos resulta satisfactorio el que

se congele la aplicación de los aspectos poco satisfactorios, de los aspectos negativos para la retribución de los funcionarios y contratados administrativos, contenidos en el Decreto-ley antes citado de 30 de marzo de 1977. Pensamos —y nos parece muy importante— que se precisa una ley de la función pública que englobe todos los aspectos de ella, incluyendo por supuesto los retributivos, como por otra parte se ha solicitado de forma unánime por la Comisión de Presupuestos.

Ya esta mañana hablé de que no se admitió a trámite por parte de la Mesa una enmienda nuestra, que también presentaron otros Grupos Parlamentarios, que aplicaba a los funcionarios esta cláusula de salvaguarda de las limitaciones retributivas contenidas en el Pacto de la Moncloa. También afirmé que el que esta cláusula no se contenga en la Ley de Presupuestos significa una discriminación clara con respecto a los funcionarios. Es evidente que hay una argumentación en contra de la admisión de estas enmiendas. Lo que se nos dijo es que podrían dar lugar a un aumento del gasto y condicionalmente a que se produzca ese crecimiento de los precios, pero creemos que éste es un problema que debería haber sido atendido para evitar esta clara discriminación.

Por otra parte, también presentamos una enmienda según la cual el incremento máximo de retribuciones permitido por el Pacto de la Moncloa y por el Decreto-ley subsiguiente, un 22 por ciento, podría repartirse de una forma lineal, que nos pareció la más adecuada y justa. No fue aceptada por las razones que ya han sido expuestas, pero consideramos que es básico que se reduzcan las diferencias tan grandes que existen entre las retribuciones de los funcionarios, que se reduzca el abanico salarial. Es evidente también que la Comisión, siguiendo el informe de la Ponencia, redujo este abanico salarial, pero lo redujo entre los distintos índices de proporcionalidad y no se ha podido hacer nada en relación a las diferencias retributivas de funcionarios que se hallan en el mismo índice, como se podría haber hecho caso de haberse aprobado nuestras enmiendas.

También esta mañana expliqué —y se ha referido a ello el Diputado señor De Vicente— que había una enmienda que tenía en

cuenta este problema y que podía considerarse inconcreta. Podía haberse concretado, y en este sentido tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Mixto habíamos pensado una fórmula precisamente para su concreción, que era la siguiente: que el incremento total de retribuciones de cada índice de proporcionalidad se aplicara, en primer lugar, a igualar las retribuciones básicas de todos los funcionarios del mismo índice, y el resto, de existir, se distribuyera por partes iguales entre todos los funcionarios afectados. Caso de haber tenido ocasión de presentar esta enmienda «in voce» y haberse aprobado, se hubiera resuelto el grave problema antes señalado.

En última instancia, de lo que se trata es de poner coto, de acabar con la situación de privilegio de unos Cuerpos en relación con otros. Esperamos que con la creación de una Sección con carácter de encuesta en la Comisión, dedicada al estudio de las retribuciones de los funcionarios, como ya se ha pedido por parte de la Comisión, y con la remisión al Congreso de un proyecto de ley que regule globalmente la función pública, pueda avanzarse hacia una Administración Pública racional y más justa.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de la Unión de Centro Democrático, para explicación de voto.

El señor GARCIA AÑOVEROS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a explicar muy brevemente el porqué del voto afirmativo de Unión de Centro Democrático al artículo 8.º, de acuerdo con el dictamen de la Comisión, sin incidir en la defensa de enmiendas —que también algunas de las nuestras, en relación con este artículo 8.º, no fueron admitidas a trámite por la Mesa—, porque estimamos nosotros que no es el momento oportuno de defender enmiendas que no fueron admitidas a trámite.

Hemos votado favorablemente porque, existiendo enmiendas a este artículo prácticamente de todos los Grupos Parlamentarios, la Ponencia llegó a un acuerdo unánime —y así consta en el informe— y a una propuesta

unánime de contenido del artículo 8.º, que naturalmente a nosotros nos satisfacía, aunque no del todo, pero era fruto de una transacción a la vista de las circunstancias y de las limitaciones sobre todo que la técnica del Reglamento impone en la discusión del Presupuesto, porque fácilmente se incurre en elevación del gasto público.

En segundo lugar, porque llevado este artículo ya en concreto a la Comisión, también fue aprobado por unanimidad, y nosotros seguimos valorando el artículo lo mismo. Tenemos que decir, además, que el tema de la retribución de los funcionarios públicos no está zanjado, porque también por unanimidad la Comisión aprobó una moción solicitando del Gobierno que antes del 30 de abril de 1978 envíe un proyecto de ley sobre ordenación general de la función pública donde se incluya el tema de la retribución de los funcionarios, tema que a todos nos preocupa y que todos, indudablemente todos, queremos arreglar con una solución justa y satisfactoria para la función pública, para los funcionarios y para el país.

Hemos votado también a favor porque en la Comisión de Presupuestos, y de acuerdo con lo indicado en el Pacto de la Moncloa, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista hemos constituido, por indicación de la Presidencia del Congreso, aunque no se han designado aún los componentes, una Sección expresamente sobre el tema de retribuciones de funcionarios públicos, Sección que inmediatamente después de las Navidades comenzará su trabajo de acuerdo con lo establecido.

Y, finalmente, hemos aprobado y hemos votado afirmativamente, aun con las limitaciones que tiene y que lamentamos —no hemos sido capaces entre todos de encontrar una solución mejor—, porque este artículo se acomoda estrictamente al espíritu y a la letra del Pacto de la Moncloa, que por encima de todo hemos querido respetar. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El representante del Grupo Parlamentario Comunista tiene la palabra para explicación del voto.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, seré muy breve, porque creo que todos somos conscientes de la longitud de este debate y del mucho trabajo que nos queda todavía.

El Grupo Parlamentario Comunista ha votado positivamente el texto incluido en el trabajo de la Ponencia sobre el artículo 8.º por razones muy concretas, que voy a exponer escuetamente. Nosotros pedíamos en la enmienda 5-6, que se refiere al artículo 8.º, un incremento global de las retribuciones del conjunto de los funcionarios en torno al 22 por ciento, de acuerdo con los criterios del Pacto de la Moncloa. La escala establecida en la tabla 1 del artículo 8.º, que hemos aprobado, corresponde en promedio a este 22 por ciento.

En segundo lugar, pedíamos la aplicación del 90 por ciento del incremento al concepto sueldo y del 10 por ciento a trienios. En la tabla 2 del artículo aprobado se tiene en cuenta en buena dosis esta propuesta.

En tercer lugar, pedíamos una distribución del incremento global entre las distintas categorías y cuerpos de funcionarios con criterio inversamente proporcional a las retribuciones íntegras. En esto discrepábamos del planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que pedía, si he entendido bien la lectura de la enmienda, una distribución lineal. El resultado es que la Ponencia aceptó nuestro criterio de aumento de retribuciones de forma inversamente proporcional a las retribuciones íntegras actuales. No aceptó, en cambio, la segunda parte de nuestra tercera petición, en el sentido de que el incremento experimentado en cada Cuerpo o categoría no sea superior a los que actualmente perciben inferior remuneración.

En otras palabras, el intento de acabar con las grandes discriminaciones o diferencias en retribuciones correspondientes teóricamente a los mismos módulos no fue aceptado, pero lo cierto es que en la moción que aprobó por unanimidad la Ponencia se refleja el propósito de crear dentro de la Comisión de Presupuestos una Sección destinada al estudio de las retribuciones del sector público. Esta Sección se acordó ayer su creación y solamente falta designar a los miembros que han de componerla, y será ahí donde se tendrán que

estudiar estos temas relacionados con el hecho de que dentro de un mismo módulo hay diferencias de ingresos y retribuciones realmente fantásticas.

En cuanto a nuestra petición siguiente, de que se envíe a las Cortes antes del 30 de marzo un proyecto de ley sobre remuneración de funcionarios y demás personal al servicio de la Administración, también por unanimidad la Comisión acordó proponer al Gobierno la creación o, mejor dicho, la preparación de un proyecto de ley que regule la totalidad de los aspectos de la función pública y, naturalmente, las retribuciones. En otras palabras, lo esencial de los planteamientos que nosotros hacíamos en nuestra enmienda quedan recogidos en el texto del artículo 8.º, ya aprobado, y por eso es por lo que hemos votado positivamente.

Naturalmente que quedan muchas cuestiones pendientes en el campo de la función pública, pero estas cuestiones pendientes en el campo de la función pública pensamos que podrán ir planteándose y resolviéndose con los estudios necesarios en esa Sección recién creada en la Comisión de Hacienda y en la preparación y discusión del proyecto de ley que esperamos que el Gobierno no retrase su estudio. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasamos a la votación de los artículos 9.º al 13 del proyecto de ley de Presupuestos, que no tienen enmiendas presentadas. Consecuentemente, vamos a votarlos globalmente. Se procede a la votación.

Efectuada la votación, dio el resultado siguiente: 310 votos emitidos; 297 a favor, seis en contra, cinco abstenciones y dos nulos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 9.º al 13 del proyecto de ley de Presupuestos.

A continuación corresponde entrar en el debate del artículo 14, que tiene formulada una enmienda por el Grupo Socialista del Congreso. En consecuencia, iniciamos el debate con la intervención del representante del Grupo enmendante. Don Félix Pons tiene la palabra.

El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, pienso que lo que más agradecerán Sus Señorías es mantener el buen ritmo de esta sesión, evitando exordios inútiles, y que entre por derecho al tema que me trae a este estrado.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta a su consideración y votación una enmienda al artículo 14 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El artículo 14, en la redacción propuesta por el Gobierno, dispone que cuando los Departamentos ministeriales y los organismos autónomos realicen directamente algunas de las inversiones incluidas en su Presupuesto, y para su ejecución necesiten contratar personal, los pagos al personal y las cuotas patronales de la Seguridad Social podrán imputarse a los correspondientes créditos de inversiones.

Se trata, por tanto, de un artículo aplicable a la ejecución directa de inversiones por la Administración Pública, supuesto totalmente distinto de aquellos en que la Administración, mediante adjudicación de concursos, concursos-subastas o subastas, encomienda la ejecución de una inversión pública a terceras personas.

Quiere decir lo anterior que para el Gobierno de la Unión de Centro Democrático no hay inconveniente alguno en que con cargo a un crédito destinado a realizar una inversión directamente, bien por el Estado, bien por un organismo autónomo, se paguen salarios y se paguen cotizaciones a la Seguridad Social.

Hasta aquí estaríamos de acuerdo, pues resulta obvio afirmar que desde una perspectiva económica las retribuciones del personal directamente empleado por el Estado en la inversión son efectivamente una parte del coste de ésta, al igual que sucede con las cuotas de la Seguridad Social. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que con cargo al Presupuesto del Estado o de un organismo autónomo se pague a trabajadores al servicio de la Administración Pública, sin que ni sus retribuciones ni las cotizaciones a la Seguridad Social figuren especificadas presupuestariamente como tales, es decir, como gasto de personal, y sin que por tanto esas personas aparezcan reflejadas en el Presupuesto como

trabajadores por cuenta ajena al servicio del Estado o de un organismo autónomo.

Nuestra enmienda postula que cuando tal cosa suceda, es decir, cuando un Ministerio o un organismo autónomo realice directamente una inversión y para realizarla necesite contratar personal, lo puede hacer excepcionalmente, pero en todo caso transfiriendo previamente las cantidades destinadas a pago de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social al Capítulo I del Presupuesto del Ministerio o del organismo inversor, Capítulo I que recoge, como Sus Señorías saben perfectamente, las remuneraciones de personal, sea éste funcionario o sea personal laboral, puesto que laboral y funcional es el personal empleado en la realización de la correspondiente inversión.

Los términos necesariamente genéricos en que está redactado el artículo 14 del proyecto de ley de Presupuestos requieren a nuestro entender que concretemos quiénes son esas personas a las que la Administración estatal o institucional acude para realizar directamente obras con cargo a créditos de inversión. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué naturaleza tiene su trabajo para la Administración? ¿Qué tipo de vínculo les une con el Ministerio o con el organismo inversor? Estas y no otras son las preguntas cuyas respuestas darán luz para que SS. SS. valoren lo que de razonable—que es mucho— tiene nuestra enmienda y, por consiguiente, puedan decidirse a apoyarla.

Se trata, señores, de trabajadores empleados por distintos Ministerios y por organismos autónomos. Lógicamente son los Ministerios de mayor capacidad inversora los que más emplean a estas personas en las obras que realizan directamente. Supuesto totalmente distinto, como ya he señalado, de las obras realizadas por contratación con terceros. Se trata de trabajadores que oficialmente, es decir, para la España oficial, son eventuales, contratados para una obra concreta, de tal suerte que la duración de su contrato laboral no puede exceder del plazo de duración de la ejecución del servicio u obra de que se trate.

Hasta aquí, señoras y señores Diputados, la España oficial. La España real es muy otra, y para que SS. SS. la conozcan en este punto permítaseme les diga que en el Ministerio de Obras Públicas, valga como ejemplo, hay más

de 4.000 trabajadores que para ustedes, señores del Gobierno, para la España oficial, son eventuales, aunque lo cierto es que esos hombres llevan trabajando muchos años sin interrupción, y mediante sucesiva y sistemática renovación de contratos eventuales, al servicio de la Administración, muchos de ellos más de diez años, y en cantidad aproximada al 23 por ciento casi veinte años. Siempre como eventuales, siempre cobrando con cargo a créditos para inversiones y nunca viéndose reflejados, como los socialistas creemos deben estar, en el capítulo de personal, como trabajadores fijos que de hecho son, aunque se les quiera negar este carácter, que de hecho tampoco se les niega, porque sabemos que en muchas Delegaciones del Ministerio de Obras Públicas, en muchas Jefaturas de Carreteras, este personal figura reconocido no oficialmente, pero sí, de hecho, como trabajadores eventuales, entre paréntesis fijos.

Continuando mi información a SS. SS. sobre estas personas, pero especialmente recordándoselo al Gobierno, les diré que esos trabajadores realizan funciones habituales en la Administración Pública y no funciones esporádicas o eventuales, y que, por tanto, la Administración no actúa correctamente al situarles en el Capítulo de inversiones.

Quiero tranquilizar a SS. SS. No se trata sólo de lo que algunos llaman trabajadores manuales, sino también de lo que otros llaman trabajadores intelectuales. Entre ellos, entre los del Ministerio de Obras Públicas o los del Ministerio de Agricultura, por citar dos ejemplos, o entre los de COPLACO, por citar un organismo autónomo, cuya política laboral ha alcanzado cotas impensables de abuso, hay trabajadores manuales junto a ingenieros, arquitectos o técnicos de grado medio. Pero, sean quienes sean, estos trabajadores son, ante todo, trabajadores, pero camuflados fantasmagóricamente en el Presupuesto, reducidos a la categoría de cosas, pues de inversión se les califica. Este es el auténtico meollo de la cuestión.

El Presupuesto, señor Ministro de Hacienda, uno es transparente en este punto. No habla al pueblo por sí solo; antes bien, le oculta al pueblo la auténtica naturaleza de un gasto, calificándolo como de inversión, siendo así

que es gasto de personal; de personal aplicado a una inversión, pero de personal.

Nos encontramos, en segundo lugar, ante un camuflaje más grave si cabe, que encubre o tapa un auténtico abuso de derecho: el que trabajadores que realizan funciones permanentes sean trabajadores eventuales durante cinco, diez, quince o veinte años y que, además, no figuren en los Presupuestos del Estado, a diferencia del resto de personas empleadas por el Estado, que sí figuran en el Presupuesto.

¿Qué se pretende con este camuflaje? Tal vez se nos diga que este precepto, este artículo 14 que el Grupo Socialista ha enmendado, no es una novedad en las leyes presupuestarias del país. Por si eso fuese argumentado, adelantamos que, efectivamente, tal cosa es cierta, que ese artículo 14 tiene precedentes en las leyes presupuestarias; digáse-nos claramente que es una figura presupuestaria de la Dictadura, que como herencia del pasado ha aceptado gustosamente el Gobierno de Unión de Centro Democrático, sin que hayamos podido detectar ni el más mínimo gesto de utilizar el beneficio de inventario.

Señoras y señores Diputados, el Gobierno ha cambiado en lo que a personas se refiere, pero lo que no ha cambiado es la utilización de la técnica presupuestaria retrógrada al servicio de los abusos laborales. Se nos dirá que el problema que analizamos no es un problema laboral, que es un problema presupuestario. Se podrá decir tal cosa, lo dirá sin duda la derecha reaccionaria de este país, los que sólo ven la epidermis del problema, porque no les interesa ver más allá. Nosotros, los socialistas, decimos, por el contrario, que estamos ante un problema laboral, para tapar el cual se acude a la técnica presupuestaria.

Se nos dirá, posiblemente, que nos encontramos ante un problema contable, que si excluimos de la inversión directa los gastos de personal en ella empleados se produce una *distorsión* en los costes de las inversiones públicas que podría inducir a alguno a pensar que la Administración hace las cosas más baratas si actúa directamente que si las hace a través de un contratista privado. Los socialistas decimos que sabemos lo que son los costes, que ni la microeconomía ni la contabilidad de costes son patrimonio exclusivo de

la derecha y, por ello, decimos que nada impide que a los gastos de personal de una obra se los incluya como tales, con personalidad propia, en los Presupuestos del Estado y se les incluya asimismo en un análisis de costes, en el valor total de la inversión, porque en las inversiones participa personal funcionario cuya intervención debe ser tenida en cuenta en un análisis de costes y que no por eso resulta desplazado del Capítulo I de personal.

No somos los socialistas los únicos que pensamos así. De ello da fe que cuando hace un par de meses el Ministerio de Obras Públicas envió al Ministerio de Hacienda su anteproyecto de Presupuesto, el Ministerio de Obras Públicas incluyó los gastos de personal eventual, por él empleado en inversiones, como gastos de personal. ¿Y qué ocurrió entonces? Sin duda, señoras y señores Diputados, pasó que en el Ministerio de Hacienda alguna mano cambió el gasto de lugar y lo desnaturalizó, para dejarlo tal como se nos ha presentado.

Tal vez se nos alegue también que el supuesto de realización de inversiones directamente por la Administración es excepcional. Lo hemos oído a un parlamentario de Unión de Centro Democrático en los debates de la Comisión de Presupuestos. Pues bien, por si a SS. SS. les resulta de utilidad, podemos decir que tan sólo dos Direcciones Generales del Ministerio de Obras Públicas, las de Carreteras y Obras Públicas, durante 1977, dedicaron a pagos de personal eventual, con cargo a créditos de inversiones, la cantidad de 3.554 millones de pesetas en concepto de jornales base, pluses de asistencia y de rendimiento, horas extras, dietas y Seguridad Social.

Tal vez esté en la mente de SS. SS. que lo hasta ahora dicho sobre el artículo 24 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene su más expresiva síntesis en el conocido refrán según el cual en casa del herrero cuchillo de palo. Es desmoralizador el ejemplo que da al país una Administración Pública que, por falta de propia política laboral o por realizar una política laboral regresiva, no es capaz de cumplir con los trabajadores a su servicio lo que ella exige a las restantes empresas del país.

Reconozca el Gobierno que la eventualidad

en la que tiene sumidos a tantos miles de trabajadores por cuenta ajena a su servicio no es sino la expresión del recelo —por qué no decirlo—, del pavor de la Administración española a los temas laborales. Reconozca el Gobierno que incluir a estos trabajadores en los créditos para inversiones es un truco para que el porcentaje de gastos de personal al servicio del Estado y de las entidades autónomas parezca inferior al real. Reconozcan, señoras y señores Diputados, que nuestra enmienda, para la que pedimos sus votos favorables, es una enmienda dirigida a dar transparencia a los Presupuestos del Estado, finalidad presupuestaria plausible, como repetidamente ha sido alegado a lo largo del día de hoy, y tiende también a desvelar la opacidad de un Presupuesto que encubre, como en el caso presente, situaciones de abuso privilegiado por parte de la Administración, que ni ella ni las Magistraturas de Trabajo toleran a las empresas privadas del país.

El señor PRESIDENTE: En defensa del dictamen tiene la palabra el señor Rovira Tarazona.

El señor ROVIRA TARAZONA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, he de confesar que después de la brillante intervención del representante del Grupo Socialista va a ser un tanto difícil para mí el poder aportar nuevos argumentos, ya que él los conoce todos.

En la Ponencia nos hemos esforzado en profundizar en este tema, y ha sido el único artículo en el que no se llegó a una redacción por unanimidad, e igualmente fue debatido en la Comisión, y allí, con toda sinceridad y honestidad por parte nuestra, invocamos los argumentos en que se basa la defensa que ahora es del dictamen de la Comisión.

He de insistir en estos momentos, aun cuando ello podría resultar difícil, ya que si lo hago tengo el peligro de ser enjuiciado como de derecha reaccionaria, que se trata de un tema de técnica presupuestaria; es un tema contable.

Tengo que arrostrar este calificativo hecho por anticipado para mantener lo que yo creo que es lo justo: el considerar este problema como un problema contable, como un pro-

blema presupuestario. No se trata de un problema laboral. El propio artículo 14 resuelve los problemas laborales. De forma expresa establece: «En los contratos, que inexcusablemente habrán de formalizarse por escrito, se hará constar su carácter laboral, de acuerdo con la legislación vigente...».

Yo creo que no cabe ser más explícito en lo que representa el respeto a la situación laboral del personal. Por consiguiente, vamos a centrar lo que implica la redacción del artículo 14, así como la redacción que pretende ser sustituida a través de la enmienda. Consideremos los principios de técnica presupuestaria que están vigentes y veamos a qué conclusiones podemos llegar.

El artículo 14, según la enmienda, debería decir: «Para ello, en estos casos excepcionales, deberán transferir las cantidades destinadas a tal efecto al Capítulo I del correspondiente Presupuesto, donde se abrirá una nueva partida». Es decir, entendemos que en el caso de que se hiciera en el futuro la transferencia se abriría una nueva partida y entonces se produciría la transferencia. Desde el punto de vista de técnica presupuestaria, las transferencias han de producirse necesariamente en relación a partidas ya existentes. No pueden abrirse nuevas partidas y hacer en su favor las transferencias.

En segundo lugar conviene recordar que el artículo 67 de la Ley General Presupuestaria establece que, cuando se trate de créditos de operaciones de capital, créditos de inversiones, las transferencias de los créditos globales han de realizarse a los específicos de la misma naturaleza económica, es decir, no se permite la transferencia de un crédito global de inversiones a uno específico, que sea de carácter personal, y mucho menos si éste no existe todavía en los Presupuestos.

La última razón también es bien conocida. De esta forma lo que pretende el Gobierno es que cuando hay un dilema en relación a que una inversión puede realizarse, o bien a través de un contratista, de una tercera persona, o bien directamente por la propia Administración, en ambos casos pueda conocerse perfectamente cuál es el coste. Si, en cambio, hubiera partidas diferentes con las cuales se satisface parte de esa inversión, podría ocurrir que se ocultara el verdadero coste de la

inversión cuando ésta se realiza directamente por la Administración del Estado y podría ocurrir que nos lleváramos el engaño de pensar que cuando las obras las hace directamente el Estado son más baratas que cuando las hace a través de un contratista.

Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, les pido que voten a favor del texto del proyecto.

El señor PRESIDENTE: Procederemos a continuación a votar la enmienda formulada por el Grupo Socialista del Congreso al artículo 14 del Presupuesto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 146; en contra, 167; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda formulada al artículo 14 por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A continuación vamos a proceder a votar el texto del artículo 14 que se presenta en el proyecto de la Ley de Presupuestos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 167; en contra, 146; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 14 del proyecto de Ley del Presupuesto.

Pasamos a continuación a la votación de los artículos 15 al 27 y disposiciones adicionales del proyecto de Ley del Presupuesto, sobre los que no ha sido presentada enmienda alguna por parte de los Grupos Parlamentarios.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 305; en contra, seis; abstenciones cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda, pues, aprobado el texto del proyecto del Gobierno desde el artículo 15 hasta el final, el 27, y disposiciones adicionales.

Pasamos al debate y votación de las enmiendas parciales a las Secciones formuladas por los distintos Grupos Parlamentarios.

La primera de las enmiendas parciales a las Secciones que no ha sido retirada —ya

que han sido retiradas varias de las que se habían presentado y estaban pendientes de debate— es la correspondiente a la Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia, de la Minoría Vasco-Catalana.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de la Minoría Vasco-Catalana, señor Barrera Costa.

El señor BARRERA COSTA: La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de la Minoría Vasco-Catalana al Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia representa sólo en un sector muy limitado un pequeño intento de clarificación y racionalización en el Presupuesto de las Universidades y, tal como se dice en su justificación, su incidencia práctica sería muy reducida, pero puede ser útil para señalar las injusticias y discriminaciones que han sido moneda corriente hasta ahora en el respaldo de los recursos presupuestarios entre las distintas Universidades del país.

Permítaseme ante todo hacer dos observaciones previas. La primera es que el presupuesto total de las Universidades es, desde todos los puntos de vista, un presupuesto de miseria. Las Universidades que proporcionalmente reciben más, reciben aún mucho menos de lo que necesitarían para lograr una enseñanza medianamente eficaz de nivel europeo.

Cualquier remedio real al problema económico de las Universidades pasa, pues, no tanto por un reparto más justo y racional de los menguados recursos existentes como por un aumento sustancial de los mismos; es decir, de los fondos disponibles, aumento que, a mi entender, atendiendo los criterios de justicia, debería proceder al menos en gran parte de las tasas satisfechas por los alumnos.

La segunda observación previa muy importante, desde el punto de vista que ahora nos ocupa, es que el presupuesto de la Dirección General de Universidades, que ha sido sometido al Congreso, no permite distinguir cuáles son los recursos reales atribuidos a cada una de ellas, en primer lugar, porque las inversiones aparecen totalizadas en bloque, fundamentalmente en el presupuesto de la Junta de Construcciones, instalaciones y equipo escolar. En segundo lugar, porque el personal docente numerario e interino y también el

personal no escalafonado y el personal a extinguir figura asimismo en el presupuesto con cifras globales. Es decir, la falta de la transparencia y de información sobre la distribución territorial del gasto público que se nos permite para el futuro es aquí, pues, evidente y notoria. Si nos fiamos de datos extraparlamentarios podemos añadir que estas dos partidas, que superan con mucho todo el resto, no parece que estén sujetas en su distribución a criterios racionales y objetivos, ni son distribuidas tampoco por organismos colegiados, donde puedan corregirse criterios individuales erróneos, ni mucho menos sean distribuidas nunca con la publicidad necesaria para que las críticas posteriores permitan que la distribución pueda llegar a ser algún día equitativa.

En la práctica, las dotaciones de plazas las distribuye el Director General de Universidades y las inversiones el Director General de Programación e Inversiones, influidos a lo sumo por un pequeño número de personas. Y hay algo peor todavía, que una parte considerable de los ingresos reales de las Universidades en los últimos años procedían del llamado fondo pozo; es decir, de fondos reservados a la libre disposición del Director General. Nunca se ha sabido con qué criterio han operado las distintas personas que se han sucedido en este cargo y la impresión más general, acaso errónea, pero en todo caso muy generalizada, es que las buenas tajadas se las llevaban siempre los departamentos universitarios de los amigos.

En la enmienda que tengo el honor de defender se propone que una pequeña parte del presupuesto de inversiones, la parte de ayuda a la investigación universitaria, se reparta con un criterio absolutamente objetivo, que es el del número de alumnos de cada Universidad. Sin duda se trata de un criterio muy grosero, que debería ser matizado con otros factores, en particular el del tipo de estudios realizados por cada alumno, pero aún así parece más justo que la ausencia de criterio que aparentemente se sigue actualmente.

Para citar un solo ejemplo, no parece justificado que en este momento la Universidad Autónoma de Barcelona pueda recibir por este concepto más de dos veces menos por alumno que la Universidad Autónoma de Ma-

drid. Se trata, en efecto, de dos Universidades creadas simultáneamente hace pocos años y por su radicación en ciudades de igual importancia demográfica, económica y cultural no deberían recibir tratamiento similar por parte de la Administración. ¿Hay algún criterio para privilegiar así a Madrid frente a Barcelona? Como Diputado por Barcelona rogaría que quien fuese competente para ello me lo explicase.

No pretendo cansar a SS. SS. barajando cifras ni repitiendo ejemplos. Me basta con llamar su atención sobre el problema, uno de los muchos que proceden del centralismo y de la burocratización tecnológica. Si los diplomas que reciben los alumnos al terminar sus estudios en las distintas Universidades son los mismos y dan lugar a los mismos derechos parece lógico que dentro de cada especialidad deban destinarse a la formación de los diplomados universitarios cantidades similares, cualquiera que sea el lugar donde realicen sus estudios. En principio estamos todos de acuerdo en que los españoles somos iguales ante la ley, pero en la práctica resulta ahora que algunos son más iguales que los demás, y sé que una réplica a mi argumentación consiste en invocar las diferencias en la labor investigadora de las distintas Universidades.

Habría mucho que decir sobre la cuestión y no es éste el momento. Pero en este aspecto, como en tantos otros, creo que el objetivo a perseguir debe ser la reducción y anulación de las diferencias y privilegios y no su perpetuación por medio del Presupuesto.

Si a las Universidades que se dice investigan menos se las continúa discriminando fuertemente con respecto a aquellas que se dice investigan más, las diferencias de nivel entre unas y otras nunca lograrán ser superadas. Y no hay que olvidar, señores Diputados, que en gran parte la investigación universitaria no es únicamente investigación, sino que es una mezcla, a veces inextricable, de investigación y de enseñanza de tercer ciclo, siendo esta enseñanza de tercer ciclo perjudicada en ciertas Universidades con respecto a las demás.

A pesar de todo, mi Grupo no pretende de ningún modo hacer excesivo hincapié, hoy por hoy, sobre estas cuestiones. No hemos

tenido en esta ocasión toda la información objetiva necesaria para profundizar más en el asunto y poder discutir el presupuesto de Universidades en detalle. Pensamos recabarla del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Hacienda, y si los defectos fundamentales que denunciemos no se corrigen reservamos nuestra acción para la discusión del Presupuesto del año próximo. Confiamos, no obstante, que desde ahora el Ministerio de Educación y Ciencia dará muestras de buena voluntad para reparar en lo posible las discriminaciones señaladas, y como la enmienda que he defendido tampoco corregiría nada esencial, preferimos no alargar este debate.

Queda, pues, retirada la enmienda que había presentado el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia. Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Habiendo sido retirada la enmienda formulada, creo que no corresponde que por parte de la Ponencia del dictamen se haga ninguna intervención.

Hay en la misma Sección 18, del Ministerio de Educación y Ciencia, otra enmienda formulada por el Grupo Socialista del Congreso.

El representante del Grupo Socialista del Congreso, señor Solana.

El señor SOLANA MADARIAGA (don Francisco Javier): Señoras y señores Diputados, para defender, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, la enmienda número 220, correspondiente a créditos destinados a subvencionar la creación de puestos escolares en centros no estatales en los distintos niveles que se indican y por las cantidades que se expresan y modificarlas para que estas mismas partidas y cantidades sean destinadas a la enseñanza estatal.

Señores Diputados, como es bien sabido, aunque se ha tratado de manipular por algunos sectores nuestra filosofía —la filosofía del Grupo Socialista— en el tema de las subvenciones a la enseñanza, es perfectamente clara y transparente. Todo centro financiado por fondos públicos debe estar gestionado, controlado, por la comunidad escolar.

No estamos, pues, por la estatalización de la enseñanza; estamos tan lejos de la escuela estatal tal y como se concibe hoy como lo estamos de la escuela privada tal como se concibe hoy. No estamos por el cierre de los centros privados, estamos por la transformación de esos centros, en ese camino hacia la escuela pública controlada por la comunidad escolar formada por padres, alumnos y profesores.

En este año, en este Presupuesto, hemos asumido las subvenciones de 38.950 millones de pesetas con el fin de evitar males mayores. Es verdad que el curso se había iniciado y los centros habían ya planeado su actividad incluyendo las subvenciones, pero en años sucesivos nos veremos obligados a votar en contra de estos presupuestos a menos que estos centros asuman una gestión democrática con la participación de toda la comunidad escolar.

Pero algo completamente distinto es lo que se refiere a los créditos que contempla esta enmienda.

Aquí se habla de subvenciones para la creación de nuevos centros escolares privados a todos los niveles de la enseñanza. Se pide que el dinero de todos sea dado a fondo perdido a particulares para la creación de nuevos centros de carácter privado. Y esto, desde nuestra filosofía, es inaceptable.

La libertad de enseñanza, señoras y señores Diputados, no pasa, no puede pasar por subvenciones de este tipo a fondo perdido, y menos aún en momentos de crisis económica y en momentos en que tenemos problemas de escolarización tan graves en nuestro país.

Señoras y señores Diputados, me gustaría concentrarme en la cifra que el Presupuesto aquí presentado contempla. Me gustaría señalar que mientras el incremento en el Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia ha aumentado en un 38 por ciento en relación al año anterior, las subvenciones a construcciones de centros no estatales lo han hecho en un 46 por ciento.

Me parece que esta medida no es una medida progresiva, es más bien una medida regresiva.

Pero donde esta enmienda o esta intervención tiene su carácter más singular quizá es en lo que se refiere a la Universidad. Todos

hemos oído cómo la Universidad está pasando por una crisis grave. Se habla de masificación en la Universidad. Se habla de problemas graves en el seno de la Universidad. Pues bien, en estos momentos de crisis interna en la Universidad, de falta de puestos escolares en la Universidad, nos encontramos con que el Presupuesto de inversiones para construcciones estatales de este año no sólo no ha aumentado en la Universidad, sino que ha disminuido prácticamente en el proyecto inicial del Gobierno en un 10 por ciento, mientras que las subvenciones para centros privados universitarios aumenta en un 20 por ciento.

Señoras y señores Diputados, si calculamos las transferencias de capital por año y por alumno para el caso de Universidades, resulta una cifra francamente escalofriante. Resulta que por alumno y año reciben por transferencias de capital más dinero las Universidades privadas que las estatales.

Creemos, pues, que no es una política progresiva la que está manteniéndose en este Presupuesto, sino que, en esta materia, es claramente una política regresiva.

Es por ello por lo que pedimos su voto afirmativo a esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: En defensa del dictamen de la Comisión, el señor Benzo tiene la palabra.

El señor BENZO MESTRE: Señoras y señores Diputados, la defensa de la enmienda que acaba de ser realizada por el representante del Grupo Socialista del Congreso contiene dos afirmaciones que en forma alguna pueden ser compartidas por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático.

La primera de estas afirmaciones, que consta en el escrito de enmienda, aunque no ha sido expresamente reiterada, pero conviene hacer hincapié sobre ella, es que del concepto expresado en el Presupuesto no puede deducirse cuál sea el fundamento y el destino de las cantidades que en el concepto presupuestario aparecen consignados.

Esta afirmación es absolutamente inexacta, pues basta con la lectura de los conceptos presupuestarios impugnados para darse perfecta cuenta de cuál es la finalidad de los conceptos consignados en el Presupuesto, que,

por otra parte, han sido expresamente reconocidos por el señor Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra.

Efectivamente, los conceptos impugnados se refieren a la creación de puestos escolares de educación especial en centros no estatales, a la creación de puestos escolares en centros no estatales de EGB y Educación preescolar; a la creación de puestos escolares para BUP, COU y Educación profesional, y a la creación de puestos escolares para la educación permanente, así como ayudas de capital a los centros universitarios no estatales.

La suma total de las cantidades que el proyecto de Presupuestos consigna para estas finalidades es de 2.480 millones de pesetas, mientras que, en iguales conceptos, con iguales rúbricas en el Presupuesto del año 1977, actualmente vigente, la consignación era de 1.714 millones de pesetas y, por consiguiente, el incremento en idénticos conceptos y para iguales fines ha sido de 744 millones de pesetas, cifra que, en comparación con las cifras macro-económicas del Presupuesto que estamos contemplando, es un aumento modesto, debido al crecimiento vegetativo de este tipo de enseñanza.

Por otra parte, se trata de créditos con fines de inversión que están consignados en el Programa de Inversiones públicas, y que difícilmente podrían ser suprimidos dada la natural continuidad que los Programas de Inversiones públicas han de tener en sucesivos ejercicios. Por consiguiente, parece claro que no se trata de conceptos nuevos, sino que se trata de conceptos que ya existían exactamente con la misma enumeración en el Presupuesto anterior, y que únicamente han sido aumentados, como digo, con arreglo al correspondiente crecimiento vegetativo de nuestra población escolar, así como al aumento de los gastos que, por razón del aumento de costes, tiene toda inversión.

La segunda afirmación, por el contrario, es una afirmación de fondo. No se trata, como dice la enmienda, de que el Gobierno no deba asumir nuevas obligaciones mientras que no se plantee en el Congreso el debate de cuál es la línea que ha de seguir la política educativa del país. No se trata, en absoluto, de una polémica puramente formal, de una cuestión

puramente procesal de que el tema no deba debatirse en este momento.

Creo que a SS. SS. no se les oculta que, en el fondo de la enmienda del Grupo Socialista del Congreso, late clarísimamente el enfrentamiento entre dos filosofías distintas: De un lado, la filosofía que propugna claramente o no una progresiva y total estatificación de la enseñanza y, de otro lado, la filosofía que propugna la libertad de elección entre la enseñanza estatal y la enseñanza no estatal. Parece claro que el Partido Socialista escoge el camino de la estatificación, y parece claro que UCD escoge el camino de la libertad. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Continúe el señor Benzo.

El señor BENZO MESTRE: Por otra parte, causa extrañeza que esta enmienda haya sido mantenida, cuando lo cierto es que el Grupo Socialista había planteado otra serie de enmiendas en las que pedía la supresión de las subvenciones a los centros estatales de enseñanza y, por el contrario, haya mantenido la que ahora hemos oído, puesto que sería congruente con su filosofía el decir: No toquemos la política educativa de subvención a la enseñanza estatal y a la no estatal; mantenemos el «status quo» y esperemos a ver qué es lo que se define en un debate general sobre política educativa. Pero retirar las enmiendas relativas a los centros estatales y mantener las relativas a los centros no estatales evidentemente es un tema de partido y una falta de objetividad.

Por el contrario, la postura de UCD es absolutamente congruente. Como SS. SS. saben, en el proyecto de Presupuestos, cuya aprobación se debate hoy, para nuevos puestos estatales en Educación General Básica constan 12.000 millones de pesetas. Y en créditos de Acción Coyuntural por la creación de nuevos puestos estatales aparecen 40.000 millones de pesetas, lo cual, en definitiva, no es sino la consecuencia y aplicación del Pacto de la Moncloa, en el que se establece la creación de cuatrocientos mil puestos escolares de Educación General Básica, de doscientos mil puestos escolares para el Bachillerato Unificado Polivalente y de cien mil puestos escolares

para la Educación pre-escolar. Por consiguiente, se produce un incremento cuantioso (y ello está perfectamente bien); extremadamente cuantioso para la enseñanza estatal, por lo que parece lógico que se mantenga el equilibrio que actualmente existe entre ambas clases de enseñanza y, por lo menos, se conceda a los centros no estatales de enseñanza un crecimiento vegetativo inferior, como he dicho anteriormente, a los mil millones de pesetas.

Por consiguiente, creo que en el momento que reglamentariamente proceda esta Cámara tendrá que plantearse el debate general sobre cuál es la política educativa, en el seno de la Comisión de Educación y ante este pleno del Congreso, y la Cámara decidirá, democráticamente, cuál es la política educativa y cuál debe ser la proporción y el equilibrio entre la educación estatal y la educación no estatal. Mientras tanto, lo procedente es lo que el Gobierno ha hecho, que ha sido, sencillamente, definir y reiterar su política de mantener un adecuado equilibrio entre la enseñanza estatal y la no estatal, y definir y mantener su política de que todo hombre debe ser libre para escoger para sus hijos la clase de enseñanza que considere oportuna.

El señor PRESIDENTE: Corresponde la votación de la enmienda número 220 del Grupo Socialista del Congreso a la Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia, que acaba de ser objeto de debate.

En consecuencia, vamos a proceder a la votación de la enmienda del Grupo Socialista del Congreso.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 305; a favor, 119; en contra, 183; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda formulada por el Grupo Socialista del Congreso a la Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia.

El señor SOLANA MADARIAGA (don Francisco Javier): Señor Presidente: Pido la palabra para explicación de voto. (*Pausa.*)

El señor PRESIDENTE: Perdón, aunque no deja de ser anómalo que el Grupo enmendante quiera explicar su voto, que ha desarrollado con su enmienda, para que no haya ninguna discriminación queda concedida la palabra al representante del Grupo Socialista del Congreso, para explicación de voto. (*Rumores y denegaciones.*)

El señor PEREZ-LLORCA Y RODRIGO: Creo que procede la explicación de voto después de la votación de la Sección, o sea, a continuación.

El señor PRESIDENTE: Ya no hay más enmiendas que votar en esta Sección. Tiene la palabra el señor Solana Madariaga. Diez minutos, por favor.

El señor SOLANA MADARIAGA (don Francisco Javier): Voy a ser más breve. Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creo que no es anómalo el dar la explicación de voto, porque creo que se contempla en el artículo 82 del Reglamento de la Cámara, pero, señoras y señores Diputados, la intervención del señor Benzo es lo que me obliga a tener que clarificar, una vez más, la postura del Grupo Socialista en este tema que se está debatiendo.

El señor Benzo, manipulando mi intervención en esta Cámara, ha dicho, clara y textualmente, que el Partido Socialista está por la estatificación de la enseñanza. (*Rumores.*)

Creo haber dicho claramente desde esta tribuna que el Partido Socialista no está por la estatificación de la enseñanza. La filosofía del Partido Socialista está tan lejos de la escuela estatal, que muchos de los presentes hemos sufrido, como lo está de la escuela privada tal y como se halla concebida.

Quisiera decir algo más: quisiera decir que la experiencia de muchos de los que aquí estamos es que, como alumnos de escuelas privadas, en ellas es donde hemos recibido la filosofía del Estado totalitario. ¡Y que hoy no apelen a la libertad de enseñanza aquellos que entonces mandaban en el Ministerio de Educación y Ciencia! Y lo digo porque yo me he educado en un colegio privado y ahí es donde se me inculcó la filosofía del Estado.

Creo, una vez más, que la intervención del

señor Benzo es un ejemplo clarísimo de lo que decía al principio de mi intervención: el tema de la escuela privada-escuela pública está siendo manipulado, y está siendo manipulado claramente, como ha sido ejemplo patente la intervención del Diputado de Unión de Centro Democrático señor Benzo. (*Aplausos y rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Aclaro al representante del Grupo Parlamentario Socialista que lo que ha hecho no ha sido una explicación de voto, sino una rectificación. Si hubiera pedido la palabra para tal rectificación, lo que está perfectamente contemplado en el artículo 99, no hubiese habido ninguna dificultad por parte de esta Presidencia en concedérsela para una rectificación estricta, y no para una explicación de voto que en ningún momento ha hecho; lo que ha hecho ha sido una rectificación. (*Rumores.*)

El señor SOLE TURA: Pido la palabra para una explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Comunista para explicación de voto.

El señor SOLE TURA: Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Comunista ha votado sí a la enmienda presentada por el Grupo Socialista. No pensábamos intervenir para explicar nuestro voto porque creíamos que el simple voto afirmativo era ya de por sí una explicación, pero dado el tono que ha introducido en la polémica el señor representante de la Unión de Centro Democrático, nos creemos obligados a hacer alguna precisión breve.

A nosotros nos parece que este debate no hace sino empezar a situar las cosas en un punto que tendremos que abordar en algún momento y que tendremos que abordar con la máxima serenidad posible, porque estamos haciendo, creo yo, una falsa polémica. Aquí no se trata de contraponer la libertad a la falta de libertad, la libertad a la estatificación, porque, que yo sepa, no hay nadie que esté en contra de la libertad de enseñanza; de lo que se trata es de saber qué entendemos por libertad de enseñanza y, sobre todo, se trata

de saber si en la polémica actual no se está planteando un tema distinto, es decir, si en vez de libertad no se nos está planteando una concepción determinada de la enseñanza.

Nosotros hemos votado sí porque pensamos que la situación en que nos encontramos hoy es una situación de un déficit tremendo, una situación caótica; que esos cuarenta años nos han dejado un sistema educativo destrozado. No se puede hablar de libertad de enseñanza sin rehacer ese destrozo y, para rehacerlo, tenemos que partir de que la enseñanza es fundamentalmente un servicio público y no un negocio privado. Y precisamente porque se trata de un servicio público, hemos de saber si enviamos nuestros recursos fundamentalmente al desarrollo de ese servicio público, o bien si seguimos manteniendo las actuales estructuras, las actuales desigualdades, los actuales privilegios y las actuales discriminaciones, so capa de defensa de una libertad de enseñanza que no es tal libertad, sino que es mantenimiento de las cosas tal como están.

Nosotros creemos que no hay libertad de enseñanza sin asegurar previamente el acceso de todos a la enseñanza. Por eso pensamos que no se trata de contraponer el desarrollo del sector público al sector privado. Lo que se trata es de saber dónde están las prioridades. Hay que establecer el índice de prioridades, no eliminando lo otro, pero tampoco privilegiándolo. Por eso hemos votado sí, porque nos ha parecido que esa enmienda iba precisamente en este camino, aunque la enmienda en sí misma no resuelve todo el problema, puesto que, como se ha dicho muy bien, la solución del problema exige un debate mucho más profundizado. Pero, en fin, ése es el sentido de nuestro voto; este es el sentido de planteamiento que creemos haber hecho con nuestra afirmación y, en todo caso, nos parece que aquí tendríamos que contribuir, entre todos, a no situar el problema en un terreno que no es el suyo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña a la Sección 21 del Ministerio de Agricultura. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña.

El señor LLUCH MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestra enmienda hace referencia a la consignación asignada al Instituto de Relaciones Agrarias. Recuerdo brevemente que el Instituto de Relaciones Agrarias fue establecido por la disposición adicional primera de un Decreto-ley con fecha 2 de junio, que precisamente fue publicado el 15 de junio.

Un día habrá que hacer un pequeño capítulo dedicado a la cantidad de Decretos-leyes que se publicaron durante la campaña electoral; pero en este caso es tanto más significativo por la fecha que se escogió para su publicación. Este es el decreto que consagra las nuevas Cámaras Agrarias.

Es sabido que los socialistas rechazamos este proyecto; no estamos de acuerdo con la perpetuación de una u otra forma de unas Cámaras Agrarias que han sido durante cuarenta años el refugio de los oligarcas y de los caciques del campo. Pese a esta opinión, también es sabido que en los Acuerdos de la Moncloa, que firmamos y mantenemos, nosotros llegamos a la conclusión, para que hubiera una posición unitaria, de ir a la perfección del decreto de Cámaras Agrarias, perfección que, hasta el momento, no ha tenido lugar, puesto que la negociación que ahí se preveía entre las Organizaciones Sindicales democráticas y el Gobierno no solamente no ha tenido fruto, sino que ha tenido fruto desagradable, como unas conocidas detenciones de los líderes democráticos del campo. Además, se han añadido a este problema las contradictorias declaraciones del Ministro de Agricultura.

Todo este tema tan embrollado, y que va evidentemente relacionado con el de la consignación que nosotros enmendamos, va relacionado, como digo, fundamentalmente, en cómo se interpretaría en el mundo campesino (tan duramente tratado durante tantos años, tan duramente marginado) que ahora, cuando se ha intentado abrir una etapa de conversaciones de apertura, donde, finalmente, se reconoce la posibilidad de cambiar el Decreto de 15 de junio, se consigne una cantidad, muy elevada, de 3.500 millones a un Instituto que está contemplado dentro de este polémico Decreto-ley.

Pero esta enmienda no la presentamos tam-

poco en el vacío, sino que la presentamos ligada con unas alternativas muy concretas. Nosotros pensamos que podría existir un Instituto de Relaciones Agrarias, con estas siglas un poco terroristas o bien con otras siglas, como Organización de Servicios Agrarios, donde se reúnan todos los servicios últimos del Ministerio de Agricultura. Pero esto no lo vemos nosotros relacionado forzosamente, como lo contempla el Gobierno, con unas Cámaras Agrarias, ni con unas elecciones. En todo caso, veríamos que estos servicios técnicos tendrían que estar controlados o vigilados por unas juntas territoriales que fuesen el resultado de unas elecciones formuladas a través de los sindicatos democráticos más representativos.

De otro lado, pensamos que hay que dar una alternativa a los nueve mil funcionarios que aproximadamente hay que atender en estos momentos, y pensamos que la solución sería establecer un crédito puente tal como es el espíritu de nuestra enmienda, para que el Ministro de Agricultura pueda dar salida a las necesidades de estos funcionarios, pero haciéndolo a través de una política clara, que cada movimiento de este crédito sea conocido por todos los campesinos.

Se puede opinar, evidentemente, de forma diferente a nosotros, pero nosotros pensamos (y aquí lo decimos con toda serenidad) que si no se adopta una política de claridad con las organizaciones democráticas campesinas, se va a crear un problema muy grave en nuestro país. Nosotros lo decimos y defendemos aquí no solamente la actitud del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, sino una opinión que es común a la «Unió de Pagesos», y a las otras organizaciones democráticas del Campo. Por tanto, pensamos que el establecimiento del crédito puente, como proponemos a esta Cámara, podría ser clarificador; sería no juzgar el resultado de unas negociaciones en curso, que querríamos más favorables que lo hasta ahora establecido, con un resultado más favorable de estas negociaciones, lo cual parece que sería el inicio real, concreto, de una posibilidad de establecer unas nuevas relaciones mucho más democráticas de los campesinos con el resto de la sociedad y con el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: En defensa del dictamen de la Ponencia, tiene la palabra el representante de Unión de Centro Democrático.

El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Tomo la palabra para, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, expresar los criterios de oposición a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, en relación con el Instituto de Relaciones Agrarias.

En primer lugar, quiero puntualizar al señor Lluçh que no se trata de un Decreto-ley de 2 de junio publicado el 15 del mismo mes, sino de un Real Decreto de esa fecha y que, naturalmente, el cúmulo de publicaciones del «Boletín Oficial del Estado» fue la razón que apareciera el día 15 de junio. Y es así, porque difícilmente podía producir los efectos que intenta sugerir mi compañero del Congreso en razón a que difícilmente en ese día los agricultores podían tener, el mismo día de su publicación, conocimiento masivo de que había aparecido en el «Boletín Oficial del Estado».

Pero, dejando a un lado esta cuestión, lo que sí quiero hacer es aclarar de entrada, como ya hizo en su momento el Ministro de Agricultura en su comparecencia ante la Comisión, que las subvenciones que este Instituto de Relaciones Agrarias establece van destinadas precisamente (aun cuando así no se especificase con toda claridad en el texto, pero ya nos lo aclaró el señor Ministro) a las Cámaras Agrarias.

Eliminar la dotación del Instituto de Relaciones Agrarias y, por tanto, hacer inviable la posibilidad de dotar con los 3.296 millones que establece para las Cámaras Agrarias, sería tanto como hacer inviable el funcionamiento de las mismas, y, naturalmente, como ha reconocido mi compañero, plantear un gravísimo problema al personal al servicio de ellas.

Cualesquiera de las dos situaciones que se plantearían, la de hacer inviable el funcionamiento de las Cámaras y la de impedir la justa retribución de los funcionarios de las mismas, son dos situaciones a las que se opone el Grupo de Unión de Centro Democrático.

El Grupo de Unión de Centro Democrático

defiende la dotación aprobada por la Comisión, porque defiende la existencia y el adecuado funcionamiento de las Cámaras Agrarias y los legítimos derechos de sus funcionarios. Defendemos la existencia de las Cámaras Agrarias por varias razones. La primera, de forma. La Ley de Presupuestos, como todos sabemos, es una ley adjetiva que no puede modificar la normativa sustantiva. La no aprobación de la partida supondría la derogación, o al menos la suspensión durante el año 1978, del Real-decreto 1.336, a que antes me he referido, que crea las Cámaras Agrarias.

La segunda razón es de fondo. Estas Corporaciones de Derecho público no suponen ni una creación de este Gobierno «ex novo», ni una mera herencia de una organización creada por el régimen anterior y ni siquiera se trata de organismos singulares que sólo se den en España. Francia, Alemania y Austria —entre otros— son países en los que existen con igual o parecidas funciones que las que ahora se crean en España, e incluso hasta con la misma denominación.

En España las Cámaras Agrarias existen desde 1890 y desde entonces se han mantenido en funcionamiento, sobreviviendo en los distintos regímenes, prestando en todos útiles servicios a ese campo que no debemos desproteger, aunque, eso sí, adecuando su estructura, función y organización a las necesidades de cada momento.

Esto es, precisamente, lo que hace el Real-decreto 1.336, no tanto heredar las anteriores Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias como transformarlas radicalmente de acuerdo con la realidad política y social de la España democrática, creando las Cámaras Agrarias con nueva estructura, función y organización.

Por eso se las crea (y así lo dice tanto el espíritu como la letra del Real-decreto) como órganos de consulta y colaboración con la Administración sobre temas de interés general agrario, carentes del carácter reivindicativo y de defensa de intereses profesionales y, en general, de todos los derechos propios de las organizaciones de empresarios y de trabajadores del campo, que han de ser ejercidos con plenitud por las Patronales y las Centrales Sindicales, como es propio de una sociedad democrática, y con pleno reconocimiento al

principio de libertad sindical que no podrán interferir las Cámaras, según reconoce expresamente el referido Real-decreto. Las Cámaras estarán regidas por órganos de Gobierno democráticos, libremente elegidos por los agricultores y con una capacidad de autonormación para formular sus estatutos y reglamentos de régimen interior. Asimismo, tendrán plena capacidad para la prestación de servicios a los agricultores. Capítulo importante para nosotros constituye la defensa de los funcionarios de las Cámaras Agrarias. Nueve mil funcionarios y otras tantas familias tan dignas de protección como cualesquiera otras se verían negativa o injustamente afectadas, caso de aceptarse esa enmienda que se nos plantea y que ahora «in voce» se ha tratado de alguna manera de perfeccionar, en sentido de buscar fórmulas que traten de velar por los intereses de esos funcionarios.

Como argumento final he dejado una razón, a la que ha aludido mi compañero señor Lluch, que estimamos definitiva. Los Pactos de la Moncloa, suscritos por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y aprobados por esta Cámara, dicen al respecto lo que sigue: «En relación con el Decreto de Cámaras Agrarias, se recomienda un Decreto adicional, en consulta con las distintas fuerzas sindicales, que perfeccione el anterior y que regule las elecciones a estos órganos y en el que se contemplen las necesarias garantías electorales, de modo que se asegure la plena democratización de estos órganos de consulta y colaboración. Esta regulación se efectuará teniendo en cuenta el reconocimiento del principio de libertad de asociación sindical en el terreno agrario». Esto es precisamente lo que en estos días se está haciendo por las centrales sindicales agrarias con los órganos del Ministerio de Agricultura para encontrar la redacción que dé cumplimiento total a los Pactos de la Moncloa. De aprobarse la enmienda se daría la paradoja de que el Congreso, que aprobó por unanimidad los Pactos de la Moncloa, al votar los Presupuestos, los haría inviables en este tema por falta de dotación presupuestaria, según expliqué al principio.

Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático votará a favor del texto aprobado en la Comisión y

que figura en el dictamen de la misma y negativamente a la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a continuación a la votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña.

El señor VIDAL RIEMBAU: Pido la palabra para una rectificación.

El señor PRESIDENTE: Si es en relación con la intervención, no hay rectificación posible, ya que S. S. no ha sido aludido por el representante que acaba de hacer uso de la palabra. Sería en relación, en todo caso, con el representante del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña que antes hizo uso de la palabra. Si no es así, no hay rectificación posible.

Un señor DIPUTADO: Es del mismo Grupo Parlamentario.

El señor PRESIDENTE: ¿Es del mismo Grupo Parlamentario?

El señor VIDAL RIEMBAU: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.

El señor VIDAL RIEMBAU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no intentamos aquí hacer un debate político sobre política agraria, que de alguna manera deseamos de verdad que se realice. Ya es hora de que esta Cámara se plantee de una manera clara y concreta el tema sobre la situación de nuestra agricultura. Este es otro tema, pero hoy, debido a la enmienda de mi Grupo Parlamentario, sí hay un pequeño sector al que urge.

Las Cámaras Agrarias, si son de una época o de otra, importa poco. Importa lo que han sido durante los últimos cuarenta años. Importa lo que ha sido la Cámara Sindical Agraria. La Cámara Sindical Agraria se ha convertido, a medida que han pasado los años y a medida que se ha ido burocratizando, en el antro del caciquismo agrícola. Esto lo sabemos los campesinos, y lo sabemos porque con ellas han chocado siempre nuestras reivindicaciones,

porque con ellas han chocado siempre nuestras luchas para salir al paso de esta postergación que hemos vivido durante tanto tiempo.

Y no es extraño que en este momento los campesinos de todo el país —y yo puedo particularmente hablar en nombre de una organización campesina masiva en Cataluña— repudiamos el nombre de las Cámaras Agrarias y nos duela saber que en el Presupuesto del Estado se dediquen unos miles de millones a mantener estas Cámaras, y a mantenerlas para que en ellas continúe el mismo cuerpo burocrático que nos ha reprimido durante tantos años y que pueda manipular las posibles elecciones que van a celebrarse.

Por eso estoy en contra del criterio del señor Diputado representante del Partido del Gobierno que ha hablado aquí. Nosotros, los Socialistas de Cataluña, no hemos puesto veto a las Cámaras por el simple hecho de hacer oposición. Hemos puesto veto a las Cámaras porque ellas simbolizan la liquidación del campo en España, en Cataluña, y significan la opresión de todos los campesinos y la situación social en que viven en este momento.

Yo digo, sencillamente, que es mi deber en este momento apoyar completamente a mi compañero Lluç en su demanda, en la enmienda que ha presentado, y decir a esta Cámara: Señores, ha llegado el momento de hablar claro del campo, ha llegado el momento de que acabemos todos con la política de avestruz que estamos haciendo, ha llegado el momento de plantearnos seriamente este problema, porque el campo...

El señor PRESIDENTE: Ruego a S. S. que se mantenga en el terreno de la rectificación y no haga alusiones a temas ajenos a ella. Se lo ruego, por favor.

El señor VIDAL RIEMBAU: Por tanto, recomiendo a esta Cámara que en este momento piense y vea con claridad lo que va a significar votar en pro o en contra de esta enmienda. Nada más. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña a la Sección 21, Ministerio de Agricultura,

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 147; en contra 170; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña a la Sección 21, Ministerio de Agricultura.

En esta misma Sección existen dos enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Comunista.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, quería preguntar si el cerebro electrónico que controla las votaciones está funcionando y sabe qué llaves se mueven y si se mueven las que están situadas por las personas que están presentes. ¿No está funcionando?

El señor PRESIDENTE: No, señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Entonces, yo quisiera rogar al señor Presidente que hiciera la indicación de que solamente voten los señores Diputados que están presentes y que no voten por representación de sus compañeros.

El señor PRESIDENTE: Por supuesto, yo entiendo que sólo votan los señores Diputados presentes. Si hubiera alguna votación en este sentido, quedaría...

El señor PEREZ-LLORCA Y RODRIGO: Queríamos intervenir para explicación de voto en relación con este artículo.

El señor PRESIDENTE: Al final de la Sección.

El señor PEREZ-LLORCA Y RODRIGO: Pero yo quisiera una explicación de voto sobre la votación.

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez-Llorca, antes dijimos que las explicaciones de voto las haríamos al final de la Sección correspondiente. Ahora, puesto que se ha producido la votación sobre la enmienda, vamos a proceder a la explicación de voto sobre la misma.

Tiene la palabra el señor Bolea Foradada.

El señor BOLEA FORADADA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, simplemente para recordar, en este tema agrícola que tanto interesa a Aragón, un simple antecedente histórico. Quiero recordar al compañero de Cataluña que en 1894 ó 95, un hombre que se llamó Joaquín Costa creó la Cámara Agrícola del Alto Aragón y que a la creación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón Cataluña le debe, entre otras cosas, el riego de 40.000 ó 50.000 hectáreas con agua procedente del canal de Aragón y Cataluña; y esos riegos de Cataluña en la provincia de Lérida se hicieron, ni más ni menos, porque hubo un hombre como Joaquín Costa que, con gentes de Barbastro, de Tamarite y Binéfar, supo hacer una Cámara Agrícola y empujar el campo español. En este momento no estamos hablando de cómo fueron las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias en los cuarenta últimos años; estamos tratando, desde el punto de vista de Unión de Centro Democrático...

El señor PRESIDENTE: Ruego a S. S. se centre en la explicación del voto.

El señor BOLEA FORADADA: Estamos tratando, repito, de establecer unas Cámaras que representen al campo español y que, en definitiva, puedan seguir laborando por el campo español.

Creemos, sinceramente, que la votación a favor del texto que está presentado es lo que va a permitir que estas Cámaras recobren su democratización, recobren su fuerza y puedan ser un empuje para el campo español.

Si en este momento estableciésemos un voto en contra, como se propone por la enmienda, creo que se frustraría esta gran posibilidad que tiene el campo español de tener representantes auténticamente democráticos. *(Aplausos.)*

El señor PAU PERNAU: Pido la palabra para explicación de voto de la Minoría Catalana.

El señor PRESIDENTE: La tiene S. S., pero insisto en que sea para explicación de voto. Estamos todos lo suficientemente fatigados como para que esta Presidencia se sienta au-

torizada para aplicar el Reglamento con absoluta rigidez.

El señor PAU PERNAU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo por primera vez ante esta Cámara para explicar el voto de la Minoría Catalana, que anuncio que fue favorable, a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya. Y lo es porque creo que ningún Parlamento democrático puede dotar presupuestariamente unos organismos que pretenden recortar la libertad sindical.

Quiero recordar en estos momentos a los señores de la Unión de Centro Democrático que son ellos precisamente los que han argumentado que Joaquín Costa fundó unas Cámaras Agrarias, que yo creo que no fueron las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (*Risas.*); y quiero recordarles también que, señores, Cataluña no debe nada. A Cataluña las Cámaras le deben mucho y nosotros en estos momentos estamos dispuestos a renunciar a esto.

No podemos tampoco dejar de decir en estos momentos que somos conscientes de los problemas que esta decisión puede ocasionar a los funcionarios de las mismas, pero somos conscientes de que no podemos defender las Cámaras Agrarias porque son, sobre todo, las continuadoras de un sindicalismo vertical oficial que nosotros creemos está enterrado en el pasado. Y somos conscientes que precisamente el entierro de este sindicalismo vertical ha representado para la agricultura una esperanza y un alivio. Somos conscientes también de que en estos momentos la creación de estas Cámaras Agrarias sólo va en este sentido y no vemos que aporte ninguna contrapartida que sea positiva para la agricultura. Todos somos conscientes de que el campo necesita ayudas, servicios, pero a través de unas delegaciones de servicios agrarios, que nosotros creemos que deben depender directamente del Ministerio de Agricultura como unos Organismos simplemente burocráticos que pueden suplir del todo, e incluso mejorar, los pretendidos servicios que estas Cámaras Agrarias quieren prestar.

Por la importancia, pues, del tema y por su repercusión sobre los agricultores a los

que pretendemos y creemos representar, hemos votado a favor de la propuesta de la enmienda presentada por el Grupo Socialistas de Cataluña.

El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Parlamentario Comunista tiene la palabra para defender conjuntamente las enmiendas números 62 y 67 a la Sección 21, Ministerio de Agricultura.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, si el Grupo Parlamentario Comunista no ha intervenido en la explicación de voto con ocasión de poder haber explicado su voto positivo a la enmienda del Grupo Socialistas de Cataluña anteriormente discutida, es, sencillamente, porque está en relación con la que nuestro propio Grupo ha presentado como enmiendas números 62 y 67. Están combinadas entre sí, encajan, después de algunas modificaciones por la retirada de otras enmiendas, en el sentido de que se propone una reducción de 930 millones de pesetas en el presupuesto de subvenciones al Instituto de Relaciones Agraria, para pasarlo (enmienda número 67) al concepto de «Subvenciones para inversiones e instalaciones industriales de las Agrupaciones de Productores Agrarios y otras entidades formadas por agricultores».

No voy a insistir mucho en todo lo que ya se ha indicado sobre el Instituto de Relaciones Agrarias. Participamos de la crítica que aquí se ha hecho sobre su carácter paternalista, y, además, el Ministro de Agricultura, durante su explicación en la Comisión de Presupuestos, no logró convencernos de que el Instituto sea el órgano más adecuado para dedicarle una atención financiera tan acusada.

Nosotros no proponemos la supresión de todas las asignaciones al Instituto de Relaciones Agrarias. Así pues, esos nueve mil funcionarios pueden estar tranquilos, pues con los 2.582 millones de pesetas que restan hay cantidad más que suficiente para asegurarles sus puestos de trabajo. Si bien aquí podría hacer un inciso y decir que en todas estas organizaciones que está heredando el Estado, además de los que tienen derecho a ser funcionarios, hay otros muchos incorporados

en los últimos momentos, en los últimos meses antes de las elecciones, que realmente no tienen ningún «status» que pudiera significar un derecho adquirido.

Por otra parte, también habría que indicar que en todas estas masas laborales hay una gran cantidad de pluriempleo, que para muchos esta participación en entidades del verticalismo sindical era uno de sus muchos empleos y que en una situación de paro extendido como hay en España la incorporación de estas grandes masas tendría que haber sido estudiada más atentamente.

En tanto no se aclare el panorama, mientras el Decreto de elecciones a las Cámaras Agrarias no esté discutido, mientras no haya un consenso entre el Gobierno y los grupos políticos parlamentarios para desarrollar el acuerdo del Pacto de la Moncloa sobre este tema, nos parece que las asignaciones financieras a este organismo pueden limitarse. Y pueden limitarse, además, porque hay otras actividades en el campo verdaderamente acuciadas de necesidades de fondo.

Nuestro Grupo Parlamentario ha estudiado el tema de las Agrupaciones de Productores Agrarios, de otras entidades en la agricultura de grupo, del cooperativismo. La cifra que en el Presupuesto de Agricultura se asigna a este concepto es irrisoria, de 70 millones de pesetas. Con esta cifra no se puede fomentar en absoluto la agricultura de grupo en un país que la necesita en las zonas de minifundios, que la necesita también para comprimir los márgenes que hoy absorben los intermediarios en todo el proceso de comercialización, en base a cooperativismo de comercialización precisamente.

No podremos pretender mejorar esas explotaciones agrarias pequeñas y medianas si no se atiende mejor a sus necesidades de inversión en todos los aspectos. En otras palabras: estos organismos que son las Cámaras agrarias a las que se han referido los compañeros del Grupo Socialistas de Cataluña extensamente, y compartimos sus puntos de vista plenamente, estos organismos se entienden todavía como apéndices periféricos del Ministerio de Agricultura, que no ha abandonado aún su filosofía de la tutela del agricultor. Y está claro que el campo español no podrá sostenerse sobre sus pro-

pios pies y dar lugar a unas posibilidades de que sean ciudadanos de primera y no de tercera o de cuarta si no asume su propio protagonismo, y su propio protagonismo lo tiene que asumir con sus organizaciones profesionales y con la potenciación de los medios de producción, fundamentalmente en las zonas de minifundios, a través del cooperativismo y de la agricultura de grupo.

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir algún señor Diputado en defensa del dictamen? (Pausa.) No hay ninguna intervención. Por tanto, procederemos a la votación.

Se procede a la votación de las enmiendas números 62 y 67 del Grupo Parlamentario Comunista a la Sección 21, Ministerio de Agricultura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 141; en contra, 155; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 62 y 67 a la Sección 21, Ministerio de Agricultura.

Señoras y señores Diputados, la fatiga de esta sesión, que realmente hemos comenzado esta mañana a primera hora, se refleja en la cara de SS. SS., por lo que parece conveniente un pequeño descanso. De manera que se suspende la sesión durante media hora.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Corresponde el debate de las enmiendas 223, 224 y 225 formuladas por el Grupo Socialista del Congreso a la Sección 22, del Presupuesto, correspondiente al Ministerio de Comercio y Turismo.

Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista del Congreso para defender las enmiendas.

El señor ALONSO SARMIENTO: En las diferentes sesiones de la Comisión de Presupuestos de este Congreso se han debatido y resuelto las enmiendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios con resultado negativo, salvo unas pocas excepciones de

todos conocidas, lo que es, en definitiva, consecuencia lógica de la correlación de fuerzas que existen en esta Cámara.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha presentado diversas enmiendas que no han escapado a ese destino casi unánime. Entre ellas hemos propuesto tres que hacen referencia al Servicio 0,2, Subsecretaría de Mercado Interior, de la Sección 22, del Ministerio de Comercio y Turismo, con las finalidades siguientes: Primera, para dar prioridad a los canales comerciales directos o paralelos frente a los tradicionales y, dentro de aquéllos, a los promovidos por cooperativas de producción, consumo o detallistas según ha sido acordado en el Pacto de la Moncloa.

Segunda, con la finalidad de rescatar sustancialmente las asignaciones a la CAT, suprimiendo las transferencias corrientes y reduciendo las de capital de conformidad también con el dicho Pacto de la Moncloa, que acuerda literalmente la transformación de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Tercera, con la finalidad de utilizar como instrumento financiero el préstamo en detrimento del instrumento subvención. Si bien desde el punto de vista parcial se trata de tres enmiendas individualizadas no ocurre así en la realidad administrativa, al constituir los tres aspectos componentes esenciales o interrelacionados de la política de comercio interior que lleva a cabo el Gobierno a través de la Subsecretaría de Mercado Interior.

Es en razón a éste hecho esencial por lo que los Socialistas del Congreso sometimos de forma congruente e interdependiente las tres enmiendas reseñadas a la consideración de esta Cámara.

Se preguntarán SS. SS. qué razones existen para que a pesar del resultado adverso de la votación correspondiente en el seno de la Comisión de Presupuestos los Socialistas del Congreso hayamos decidido presentar tales enmiendas a debate y superior decisión en este Pleno del Congreso de Diputados.

En nuestra opinión, concurren diferentes circunstancias, algunas de muy grave trascendencia, en la política a la que atienden los conceptos presupuestarios para los que se proponen estas enmiendas, circunstancias que deben ser conocidas por el Pleno de esta Cá-

mara, y, a su través, por todos los ciudadanos del Estado, que son quienes sufren las consecuencias directas de las mismas.

A esas circunstancias, con la venia de SS. SS., me voy a referir brevemente a continuación.

La enmienda relativa a la prioridad de los canales directos o paralelos se propone por dos razones esenciales.

En primer lugar, con el fin de presionar al Gobierno para que modifique su apoyo expresado a uno de los grupos de intereses más perjudiciales que existe en este país, el de los asentadores e intermediarios de los productos en fresco.

Y, en segundo lugar, para hacer posible el cumplimiento de los Acuerdos de la Moncloa en este campo, que de otra forma quedarían reducidos por el propio Gobierno a mero papel mojado y altisonantes declaraciones de principio, pues ¿cómo podemos confiar en que el Gobierno va a ejecutar aquello a lo que se comprometió en el «Pacto de la Moncloa» si no crea los mínimos instrumentos necesarios para ello?

El apoyo del Gobierno a las sólidas posiciones monopolísticas del grupo de los asentadores se produce a través de la aportación de capitales a la Empresa Nacional MERCASA. Aportaciones de capital que tienen el carácter de auténticas subvenciones encubiertas para construir los nuevos mercados centrales en los cuales los asentadores conservan muy fortalecidos sus costosos y antisociales privilegios.

En apoyo de esta grave afirmación, me permito señalar las siguientes circunstancias que concurren en la mencionada Empresa Nacional MERCASA.

Primera: antes de la intervención de MERCASA a través de sus empresas filiales, en todas las grandes poblaciones el comercio mayorista se venía desarrollando sobre dos canales principales, uno mayoritario, apoyado en los asentadores del mercado central, el otro minoritario, si bien a veces muy importante, apoyado en los almacenes particulares y centrales mayoristas, lo que podría haber constituido una base efectiva para la organización de los canales paralelos.

Con la implantación de las sociedades filiales de MERCASA y el establecimiento de

los perímetros de protección, se prohíbe todo comercio mayorista que no sea realizado por los asentadores dentro de los mercados centrales. La operación elimina de raíz toda competencia a ese canal comercial, quedando estas unidades en régimen exclusivo, con lo que tiene lugar el establecimiento de un monopolio total y absoluto del canal comercial, basado en los asentadores e intermediarios en general.

Segunda: un Decreto-ley de noviembre de 1974 que pretende establecer los canales paralelos para los productos en fresco. Es simplemente, a nuestro entender, una auténtica farsa, por cuanto discrimina escandalosamente contra las centrales mayoristas que se creen al margen de los mercados centrales y que deberían constituir la base material de los canales directos.

Esta discriminación en aspectos tales como la normalización de los productos, los mínimos de comercialización, etc., ha hecho que ni una sola central mayorista de asociaciones de comerciantes haya sido creada al amparo de esta disposición.

Tercera: tomando como fuente el Libro Blanco de la propia Empresa Nacional MERCASA, se constata, en su página 166, que con la creación de las nuevas unidades alimentarias el grupo de asentadores dominantes incrementa su participación en los mercados al pasar, para el conjunto de los mercados de Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, de comercializar el 48,4 por ciento antes de la implantación de las sociedades filiales de MERCASA, al 51,9 por ciento después de empezar su funcionamiento.

Cuarto: si se toma en consideración el hecho de que el grupo dominante de asentadores de cada mercado no sólo vende a sus clientes detallistas, sino que abastece en un porcentaje significativo, que es del orden del 25 por ciento aproximadamente, a los mayoristas medios y pequeños del mismo mercado, se llega a la conclusión de que menos del 25 por ciento de los asentadores controlan directamente la venta de más del 77 por ciento de los productos en fresco en todas las grandes ciudades del país.

Y quinto: Si se analizan las vinculaciones comerciales, financieras, empresariales e incluso familiares entre los grandes asentado-

res de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, llegamos a la preocupante conclusión de que el abastecimiento nacional de los productos en fresco está totalmente controlado por algo menos de dos centenares de grandes asentadores, abastecedores y otros intermediarios.

Señorías, ante esta situación expuesta, los Socialistas del Congreso entendemos que estas estructuras de mercado resultan claramente contradictorias, incluso con los principios de racionalidad capitalista de una economía de mercado que el Gobierno declara defender, y que su soporte y apoyaturas han de ser buscados en los grupos de intereses oligárquicos y oligopolíticos que anidaban en los generosos repliegues de las prebendas del Estado, tan cuidadosamente cultivadas durante los cuarenta años del franquismo.

La segunda enmienda que presentamos a la consideración de SS. SS. propone suprimir la asignación de gastos corrientes de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes que, contra toda lógica, son incrementados por el Gobierno para el año 1978 en nada menos que en un 228 por ciento. En 1977, la asignación 1.030 millones de pesetas, y para 1978 el Gobierno propone 3.380 millones de pesetas. Hace sólo dos meses, este mismo Gobierno firmó los «Pactos de la Moncloa», en los que se dice que la Comisaría será transformada en el sentido de reducir el intervencionismo que la caracteriza. La incoherencia y contradicción del Gobierno al respecto resultan evidentes.

Insistiendo en la línea argumental de las enmiendas presentadas, los Socialistas del Congreso queremos dejar claramente sentado que la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, a nuestro entender, debe ser transformada a fondo, o debe desaparecer. Y ello no por las razones históricas de sus conocidas vinculaciones con oscuros intereses en la época del estraperlo y del mercado negro, ni tampoco por lo que hace referencia al turbio asunto de Redondela-Reace, con seis muertes en extrañas circunstancias, la última ocurrida hace un par de semanas.

Queremos eliminar de nuestra argumentación todo tinte de dramatismo y demagogia para centrarnos, únicamente, en el papel claramente perturbador para los consumido-

res y para el funcionamiento del sector que producen las actuaciones que dicho organismo viene realizando en relación con el comercio de Estado y la regulación de la oferta del mercado interior.

A estos efectos, los Socialistas del Congreso deseáramos afirmar: Primero, que el número de productos básicos en régimen de comercio de Estado y de regulación es muy reducido, y en peso específico poco significativo, después de los últimos decretos liberalizadores en materia comercial. En nuestra opinión, nada impide proceder a la liberación del resto de los productos, como no sean los claros intereses económicos que se mueven en dicho sector.

Segundo, que al analizar el funcionamiento del mercado de los productos alimenticios de importación se observa que es justa y frecuentemente en las importaciones realizadas por la Comisaría donde se producen constantes perturbaciones para el consumidor.

Tercero, que en las operaciones de regulación con productos nacionales, aceites, carnes, etc., las diferencias observadas entre los precios percibidos por los agricultores y los precios pagados por el consumidor no son favorables más que en el caso de los productos de mercado totalmente libre y, en consecuencia, no se ve por ninguna parte el papel positivo que pueda estar desempeñando la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.

Y cuarto, que un nuevo paso en el sentido de liberalizar el mercado de los pocos productos que aún comercializa la Comisaría podría ser ya dado, lo que permitiría mayor transparencia en todas las operaciones y, ciertamente, no produciría efectos negativos para el consumidor.

Y todo ello, mientras se estudia dar solución al problema que plantea la desaparición de dicho Organismo. Pero lo que no nos ofrece ninguna duda es que reforzar el papel de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, con un aumento presupuestario de 2.250 millones de pesetas, para gastos de funcionamiento del Organismo, encubre alguna extraña operación que el mismo Gobierno ha tenido buen cuidado de no revelar.

En relación con la tercera enmienda presen-

tada, el promover un esfuerzo de financiación con base en el préstamo, en detrimento de la subvención, es un tema que a nuestro entender queda fuera de toda discusión, desde el mismo momento en que así se ha venido reconociendo por el Gobierno. Argumentar contra el problema de fondo, apelando a una cuestión de forma, como la de que el IRESCO no puede conceder préstamos, no indica otra cosa sino que el Gobierno no está dispuesto a modificar para nada el juego de intereses dominantes en este país, ni incluso en aquellos casos —como éste— en los que se ha manifestado claramente a favor del cambio.

Por lo demás, el argumento formal invocado en la Comisión desde los bancos de la Unión de Centro tampoco se tiene en pie por lo siguiente: Primero, porque el IRESCO, en tanto que es organismo autónomo administrativo, puede conceder préstamos al igual que los demás organismos del mismo tipo, para los que en los Presupuestos que ahora se discuten se contemplan dotaciones específicamente para préstamos; y, segundo, porque el IRESCO tiene en el Presupuesto del año 1977 una partida, la 861, dotada con 150 millones de pesetas para la concesión de préstamos, lo que nos lleva a preguntarnos por qué el IRESCO puede conceder préstamos en el año 1977 y no los puede conceder para 1978.

Aparece claro para nosotros que es la defensa de los intereses de fondo que hay detrás de todo ello lo que conduce al Gobierno y a la Unión de Centro a caer en contradicciones tan evidentes y elementales. Es por todo ello, Señorías, y por mucho más, que nos vemos obligados a dejar en el tintero hasta mejor ocasión y por cuestión de tiempo por lo que nosotros les invitamos a votar favorablemente estas tres enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Socialista del Congreso. El país les quedará agradecido. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En defensa del dictamen de la Comisión tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados: La enmienda 223 que presenta el Grupo Socialista del Congreso pretende la

supresión, en la Sección 22, Ministerio de Comercio y Turismo, Servicio 0,2, capítulo 7, de dos partidas de 500 millones de pesetas cada una, que se destinan a la contribución del Estado a la financiación de inversiones previstas en el programa de inversiones públicas, con destino a la adquisición de acciones para la ampliación de capital de la Empresa MERCASA, incluida la contribución de esta empresa para la formación de un 49 por ciento del capital de la titulada «Mercados de Origen, S. A.», MERCORSA. E igual partida de 500 millones en el concepto de subvención de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes como contribución del Estado a la financiación, con el mismo fin de suscribir por dicha Comisaría la ampliación de capital de MERCASA.

Para analizar la finalidad que se persigue con la enmienda es preciso tener en cuenta, en primer término, en qué consisten estas sociedades, MERCASA y MERCORSA, cuáles son las inversiones que en este momento están realizando y a las que están asignadas estas partidas presupuestarias y, por otro lado, a qué finalidad se pretende destinar la sustracción que se hace en estas partidas.

MERCASA es una empresa nacional creada en 1966 con objeto de construir, explotar y sostener mercados centrales. Como es sabido, la forma habitual en que se ha desarrollado MERCASA ha sido bajo la creación de sociedades mixtas con Ayuntamientos y usuarios, en la que los primeros —los Ayuntamientos— participan con un 51 por ciento del capital, los particulares pueden suscribir hasta un 23 por ciento y la empresa nacional un mínimo del 26 por ciento, con lo que se asegura el control en las decisiones más importantes.

Bajo esta fórmula de sociedades mixtas, MERCASA ha constituido hasta la fecha diecinueve sociedades, de las que trece tienen instalaciones en funcionamiento. Estas instalaciones comercializaron durante el último ejercicio más de millón y medio de toneladas de productos perecederos y más de 3.000 millones de pesetas en otros productos.

MERCORSA, también empresa nacional creada en 1970, tiene por finalidad la creación y modernización de lonjas y mercados en origen de productos agrarios, razón por la que el 49 por ciento de su capital lo aporta MER-

CASA y el resto el Ministerio de Agricultura.

Este es el marco legal en que nos encontramos. ¿Cuáles son las inversiones que en este momento están en curso y a las que se destinarían estas aportaciones presupuestarias de ampliación de capital? Su simple enumeración nos hace recapacitar, en mi opinión, sobre la conveniencia de sustraer tan importantes partidas presupuestarias a la finalidad que se persigue, porque nos gustaría que de alguna manera el grupo enmendante concretase de cuáles de estas inversiones era posible sustraer una partida de mil millones de pesetas. Voy a hacer la relación:

MERCAMADRID precisa en 1978 una inversión de 2.700 millones de pesetas, correspondientes a los mercados de frutas y hortalizas, así como al de pescados, centro administrativo y comercial e iniciación de las obras de matadero y mercado de carnes. De esta cifra de inversión, MERCASA deberá aportar 1.160 millones de pesetas.

MERCABARNA. La inversión a realizar en 1978 es de 400 millones de pesetas para terminar las obras de matadero y mercado de carnes previstas para abril próximo. De esta inversión, MERCASA deberá aportar 200 millones de pesetas.

MERCAMALAGA. La inversión a realizar es de 283 millones, correspondientes a obras de urbanización, mercado de frutas y hortalizas y centro administrativo y comercial. La participación de MERCASA asciende a 91 millones de pesetas.

MERCALASPALMAS Y MERCATENERIFE. Realizarán durante 1978 inversiones de 264 y 120 millones de pesetas, respectivamente.

MERCAPALMA. La aportación de 74 millones de pesetas de MERCASA a esta unidad alimentaria en 1978 se destina a la inversión de matadero.

MERCAVALENCIA. Con una inversión prevista para 1978 de 120 millones de pesetas, con destino a matadero y mercado de carnes, de los cuales corresponde a MERCASA aportar 67 millones de pesetas.

MERCAMURCIA, MERCALICANTE, MERCABILBAO, MERCAIRUÑA en Pamplona, etcétera. No quiero hacer la relación más prolija; es suficientemente explicativa de la importancia de las inversiones que están en

curso y respecto de las cuales no es posible sustraer esta importante cantidad de mil millones de pesetas. Sin embargo, entendemos que el hecho de que haya una inversión en curso no justifica total y absolutamente el mantenimiento del presupuesto. Es preciso hacer también una referencia a si estos instrumentos son adecuados para una política comercial que se ajuste a la política comercial del Gobierno, en definitiva plasmada en sus líneas maestras también en los Pactos de la Moncloa.

Creemos que cuando en los Pactos de la Moncloa se habla de la necesidad de una transparencia en el escalón mayorista, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios y aumentando el gasto de competencias entre los que deban subsistir, estas finalidades pueden ser perfectamente conseguidas. Cuando los Pactos de la Moncloa hablan igualmente de que para ello se desarrollara una política de mercados centrales, estamos precisamente hablando de mercados centrales. De alguna manera se puede decir que la política de MERCASA en esta anterior etapa ha sido fundamentada en el escalón mayorista. Esto es así, Sin embargo, no con los efectos negativos que se ha pretendido imputar desde la posición de los enmendantes. Así, un estudio realizado sobre las unidades alimentarias demuestra que la relación beneficio-coste de la inversión realizada hasta ahora es de 2,2 para el período 1971-75 y se calcula en 6,6 para el período 1976-80.

En lo que concierne a los efectos sobre el ciclo de comercialización, los ahorros de coste que suponen los nuevos mercados y la ampliación de la competencia al romper el oligopolio de los mayoristas instalados en los antiguos mercados han supuesto una incidencia notable en los precios al por mayor, cifrándose en siete puntos el ahorro producido en 1976, ahorro que puesto en relación con los tonelajes transaccionales —un millón y medio de toneladas— supone una economía global de dos mil millones de pesetas.

Por otro lado —creo que estas cifras son suficientemente significativas— hay que indicar que la finalidad a la que presuntamente se iban a destinar los mil millones de pesetas de la enmienda era para que el Instituto para la Reforma de las Estructuras Comercia-

les, IRESCO, aumentase el importe de unos préstamos que pudiera conceder.

Nosotros entendemos que no puede admitirse, desde el punto de vista de técnica parlamentaria, que en los Presupuestos Generales del Estado se pretenda cambiar la legislación en materias que realmente corresponde debatir y decidir en primera instancia a la Comisión de Comercio y Turismo, puesto que, si no, convertiríamos la discusión del presupuesto en la discusión única, no haría falta ninguna otra discusión, se podría cambiar todo a través de los presupuestos, sobrarian, además, todas las Comisiones legislativas.

Nosotros entendemos muy claramente que el Instituto para la Reforma de las Estructuras Comerciales, que fue citado por Decreto/ley de noviembre del 73, y que su modificación requeriría una norma de igual rango legal, expresa claramente cuáles son sus funciones y habla de proponer al Gobierno, a través de los cauces reglamentarios o, en su caso, al Ministerio de Comercio, las disposiciones y medidas conducentes al perfeccionamiento y reforma de las estructuras comerciales; habla de estudiar y promover fórmulas de integración de los sectores comerciales, de fomentar la difusión de las técnicas y conocimientos encaminados a la modernización y perfeccionamiento de las actividades profesionales del comerciante, de proponer la política de primas y subvenciones, pero en ningún caso se habla de la posibilidad de prestar. El préstamo oficial ha de ser canalizado a través de las entidades oficiales de crédito.

La Unión de Centro Democrático, nuestro Grupo, está, naturalmente, por un fortalecimiento, un crecimiento y una transparencia en el crédito oficial, pero que éste se realice a través de las instituciones hábiles para ello. Con ello pretendo haber contestado a las enmiendas 223 y 225. Nos queda, por último, la enmienda 224, en la que se propone la baja en el Servicio 02, capítulo 4, artículo 42, concepto Subvención a la Comisaría Nacional de Abastecimientos y Transportes para cubrir sus gastos de funcionamiento por importe de 3.380 millones.

Realmente, esta diferencia de presupuestos a que hizo referencia el anterior interviniente

responde, como ya se explicó en la Ponencia de la Comisión de Presupuestos, a una adecuación de las estructuras presupuestarias a la Ley General Presupuestaria, de enero de 1976.

Nosotros, en consecuencia, mantenemos nuestra tesis de que la Comisaría de Abastecimientos y Transportes existe legalmente, que tiene una estructura y realiza unas operaciones que le encomienda el Gobierno, y que en tanto en cuanto esto sea así ha de contar con los medios de financiación de sus gastos.

El presupuesto de la Comisaría se desglosa en 1.700 millones de pesetas para satisfacer sus necesidades administrativas y 1.600 millones de pesetas para atender gastos de operaciones comerciales. Esto es así, legalmente existe el organismo y, mientras no se produzca la transformación legal del mismo, hay que dotarlo presupuestariamente. En su consecuencia, mantenemos el dictamen de la Comisión de Presupuestos y el Grupo Parlamentario que represento solicita el voto favorable al texto del proyecto.

El señor PRESIDENTE: A efectos de la votación, yo preguntaría al Grupo Parlamentario enmendante si podemos agrupar las tres enmiendas en una sola votación, o si prefiere que se voten separadamente. *(Pausa.)* Se van a votar separadamente.

Vamos a proceder, entonces, a la votación de las enmiendas números 223, 224 y 225, de la Sección 22, Ministerio de Comercio y Turismo, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 310 votos emitidos; a favor, 142; en contra, 165; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan, consiguientemente, rechazadas las enmiendas números 223, 224 y 225 a la Sección 22 del Ministerio de Comercio y Turismo.

Pasamos ahora a la Sección 23, en la que existen presentadas dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña y otra del Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso.

A efectos de la defensa de la enmienda

número 208, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña.

El señor LLUCH MARTIN: Nuestra enmienda propone la anulación de las consignaciones al Consejo de Economía Nacional. El Consejo de Economía Nacional fue establecido ya en fecha lejana, en junio de 1940. Los años cuarenta eran unos años en los que quiero recordar a los señores Diputados de Unión de Centro Democrático que las mujeres que trabajaban en el campo no tenían derecho a votar, como no lo tienen tampoco ahora en el Decreto de Cámaras Agrarias. Tampoco votaron los jornaleros, como tampoco van a votar, si se aplica este decreto, y tampoco los jóvenes, y también cobraban los Presidentes de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, que quiero recordar que continúan cobrando. En esos años cuarenta se estableció el Consejo de Economía Nacional, que tenía una alta función, definido como un organismo nacional, elemento de trabajo del Gobierno de la nación, que estudie y prepare, desde un punto de vista general, las líneas principales a que deba sujetarse nuestra economía. Todo el mundo sabe que este Consejo de Economía Nacional ha hecho una tarea breve y reducida, breve y reducida como va a ser mi intervención. Una tarea, además, breve y reducida que no justifican los complementos de especial responsabilidad, ni los complementos de dedicación absoluta que están incluidos en el Presupuesto.

Por otro lado, hay que decir —todo hay que decirlo— que el mismo Presupuesto ya también acepta esta moderación de la tarea del Consejo de Economía Nacional cuando habla de una indemnización a cuatro Consejeros de Economía Nacional residentes fuera de Madrid y solamente les dedica a los cuatro en conjunto 24.000 pesetas.

Por lo tanto, nosotros creemos que el Consejo de Economía Nacional es una de estas reliquias de estos cuarenta años que hay que ir liquidando y quiero dirigirme a los compañeros Diputados de UCD diciendo que esta vez los Socialistas no vamos a perder la votación en esta enmienda por la simple razón de que sabemos que por la Ley Orgánica del Estado nuestra enmienda no es viable y, por

lo tanto, la vamos a retirar. *(Risas.)* Lo único que hemos querido hacer es recordar al partido del Gobierno y al Gobierno que éstas son Instituciones caducas que hay que eliminar y, en todo caso, se puede estudiar y, como alguien del Gobierno ha sugerido, sustituirlas por otras Instituciones más eficaces, con una tarea más profunda. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista del Congreso a efectos de defender la enmienda 227.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados: El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presenta en estos momentos a su consideración una enmienda a la Sección 23 de los Presupuestos Generales del Estado para 1978, que afecta concretamente al Instituto Nacional de Estadística, organismo que como SS. SS. saben depende actualmente del Ministerio de Economía.

Esta enmienda (que para la más fácil localización de SS. SS. es la que figura con el número 227 en el folleto de enmiendas) pretende la desaparición de los conceptos 611 y 612 de los Presupuestos del Instituto Nacional de Estadística, pasando su cuantía total, por importe de 478.400.000 pesetas a los conceptos 161 y 181 del Capítulo I del Presupuesto del Instituto Nacional de Estadística, Capítulo I que, como SS. SS. saben, en todos los Presupuestos se refiere explícitamente a las partidas de personal. Esto es, a la retribución del personal tanto funcionario como contratado administrativo o contratado laboral.

Poco dirán, pienso sin embargo, a SS. SS. estas puras referencias numéricas y presupuestarias. De ahí que nos parezca que sea necesario exponer, con la lógica brevedad que la hora requiere, el destino previsto por el Instituto Nacional de Estadística para los 478.400.000 pesetas, incluidos en las dos partidas antes mencionadas, que están incluidas en el presupuesto del Instituto, en el capítulo 6, relativo a inversiones reales. Ambas partidas integran, según reza el presupuesto del Instituto Nacional de Estadística, sometido a la consideración de esta Cámara, el programa

de inversiones públicas del Instituto Nacional de Estadística. De esos 478.400.000 pesetas, 92 millones corresponden exactamente, según el presupuesto, a investigaciones y encuestas que el Gobierno requiera, en tanto que los otros 386.400.000 pesetas corresponden a la formación de censos estadísticos. Ambas partidas (lo digo para ilustración de SS. SS., especialmente de aquellos que por no haber tenido tiempo u ocasión de estar en anteriores etapas de la Cámara tal vez no conozcan a fondo presupuestos anteriores, que sí el presente) no son nuevas en los Presupuestos Generales del Estado.

Por el contrario, si nos molestáramos, que nos hemos molestado, en consultar esos presupuestos de años anteriores, veríamos que, sistemáticamente, esas dos partidas se encuentran en el presupuesto del Instituto Nacional de Estadística, e incluso con la misma cuantía durante los últimos años.

Les decía antes, señoras y señores Diputados, que ambas partidas teóricamente, esto es, formalmente según los redactores del presupuesto, son inversiones reales. Para intentar comprobarlas, el Diputado que les habla se ha ido a la Avenida del Generalísimo y se ha acercado al Instituto Nacional de Estadística para intentar ver con sus ojos en qué se habían invertido las consignaciones de igual denominación de años anteriores. Los resultados de mi visita al Instituto Nacional de Estadística, donde aparte de tener contacto con los representantes de las Centrales Sindicales de los funcionarios allí existentes también los he tenido con alguna persona de la línea jerárquica del Instituto, son éstos: ni un solo céntimo; ni un solo céntimo, repito, de estas dos partidas se ha dedicado en años anteriores a lo que yo llamaría inversiones reales.

Después de una conversación con el Vicepresidente de Economía hace escasos minutos en el bar puede que diferamos en el criterio, pero el Diputado que habla entiende que ni un solo céntimo de estas partidas se ha dedicado a inversiones reales, en el sentido convencional de la palabra, y lo que es más importante, puesto que estamos estudiando el presupuesto del 78, es que ni un solo céntimo de las cantidades previstas para

1978 se dedicará a lo que este Diputado entiende que son inversiones reales.

Por el contrario, señoras y señores Diputados, estas dos partidas tienen como destino básico previsto para 1978, al igual que ocurrió en años anteriores, el abono de los sueldos del personal laboral del Instituto Nacional de Estadística y el pago de las cuotas de la Seguridad Social, a ellos correspondiente.

Estamos afirmando, por tanto, señoras y señores Diputados, que en opinión de quien habla y del Grupo al que representa, no nos encontramos ante una inversión, sino ante un gasto y concretamente ante un gasto de personal. Por eso precisamente proponemos que pase al Capítulo 1.º, que como he dicho, y SS. SS. conocen, es el que de acuerdo con las técnicas presupuestarias registra los gastos de personal.

Bajo la denominación de inversiones reales que, repito, es la que recibe oficialmente en el Presupuesto la partida que estamos analizando, se esconde en este caso, en nuestra opinión, una realidad muy distinta. Se esconden concretamente salarios, se esconden primas, se esconden dietas, gastos de locomoción, ¿de quién? Se lo diré seguidamente. De 280 perforistas del Instituto Nacional de Estadística que con contrato laboral trabajan permanentemente en la sede central del Instituto Nacional de Estadística sometidos a jornada, sometidos a horario, sometidos a disciplina laboral y, además de ellos, de 500 agentes entrevistadores, inspectores de entrevistadores y analistas que trabajan todo el año, es decir, de manera continuada, al servicio del Instituto Nacional de Estadística para llevar a cabo el trabajo permanente que éste tiene encomendado, de acuerdo con las normas que lo regulan.

Como SS. SS. saben, el Instituto Nacional de Estadística realiza permanentemente encuestas y estadísticas, como la de precios al consumo, población activa, índice de producción industrial, coyuntura industrial y, esporádicamente, esto es, no de manera regular pero sí con periodicidad en todo caso, censo.

Son actividades del Instituto Nacional de Estadística cuyos resultados se publican, como SS. SS. conocen, en el Boletín mensual, lo cual habla también de la periodicidad y la

permanencia del resultado del trabajo de aquellos trabajadores que permanentemente trabajan allí, en el Boletín, repito, mensual de información estadística del Instituto Nacional de Estadística.

Pero me interesa señalar, señoras y señores Diputados, que si bien con estas partidas se paga a los trabajadores, no se paga, repito, a los trabajadores que esporádica y discontinuamente prestan sus servicios al Instituto, sino, insisto en ello, a los trabajadores que cotidianamente trabajan para el Instituto Nacional de Estadística. Y volvemos a encontrarnos ante un tema muy semejante al del artículo 14, que tan perfectamente defendió esta tarde desde este estrado mi compañero el señor Pons, ante unos trabajadores que realizan permanentes funciones, pero que están sometidos de hecho a un régimen de eventualidad que el Grupo Socialista del Congreso entiende que cuando menos es arbitrario.

Nos encontramos, seamos realistas, no ante una inversión, sino ante un gasto de personal. Por mucha que sea la fuerza de la mayoría, no creo que pueda llegar a desnaturalizar un gasto consuntivo que en este caso concreto afecta, entendemos, a materia de personal de manera evidente, pues aquí, prácticamente, según nuestra opinión —podemos estar equivocados y aquí hay técnicos en la materia— no se invierte en nada concreto (*El señor De Vicente levanta y muestra un cenicero*), perdonen el gesto, que puede servir como un ejemplo, sino que se consume pagando a un personal para que perfore fichas, para que recoja datos y los procese.

Llamar inversión real a lo que es gasto de personal, y nada más, es cambiarle el nombre a las cosas, es decir, a los hechos, y puede que así se haga, quién sabe, con el voto de UCD. Pero éste no es un Presupuesto de cristal, sino —permítanme cambiar la expresión de Presupuesto de cemento que reservé antes para el de la Seguridad Social— un presupuesto de hormigón; en este caso de hormigón político que tapa, señor Ministro de Economía, en nuestra opinión, una situación de eventualidad permanente de 780 trabajadores del Instituto Nacional de Estadística que, a nuestro juicio e incluso con las le-

yes laborales en la mano, son trabajadores fijos, aunque el Instituto les niegue la condición de fijos y los explote como eventuales desde hace cuatro, desde hace seis y hasta, señor Ministro de Economía, desde hace catorce años, en ocasiones.

Por tanto, nos encontramos ante una fantasmagórica situación cuyas líneas teóricas se encardinan, repito, aunque no sea igual, en los supuestos del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y digo fantasmagóricas porque en fantasmas convierte este Presupuesto, en nuestra opinión, a esas 780 personas que a diario, en los locales del Instituto Nacional de Estadística, no lejanos a esta Cámara, trabajan, por supuesto hoy como todos los días, aunque tal vez hoy haya en su trabajo una nota de expectación y su mirada esté puesta en esta Cámara en lo que ésta decida y en quien decide su futuro.

Buena prueba de que no nos encontramos ante una inversión, sino ante un gasto de personal, es que el Instituto Nacional de Estadística, en el anteproyecto de presupuestos que envió al Ministerio de Hacienda, incluía los 478.400.000 pesetas en el capítulo 1.º Por decirlo en palabras más sencillas, no hubiera habido enmienda si la propuesta del Instituto Nacional de Estadística en su anteproyecto no hubiera sufrido en su camino administrativo el toque de una mano que la cambió de partida —ésta es la realidad— y convirtieron, ¡quién sabe quién!, un gasto de personal en inversiones reales para que este Presupuesto, en este punto concreto, se acomodara miméticamente —pues la cuantía es idéntica a la de otros años— a los Presupuestos de los años anteriores.

A nuestro juicio, nos encontramos ante un claro problema que entraña un error de técnica presupuestaria; pero nuestra preocupación por la técnica presupuestaria, que es importante políticamente si sirve a la transparencia presupuestaria, no es en absoluto un tema fundamental en sí si no hay detrás de él otro tema importante. Es decir, llamar inversión real a los salarios de unos trabajadores que prestan sus servicios, a nosotros nos parece un error, pero un error de técnica presupuestaria, señor Ministro de Economía, que encubre, al igual que en el supuesto del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Genera-

les del Estado, un abuso de derecho a cargo del Estado y, en todo caso, una precaria situación de 780 trabajadores.

Señor Ministro de Economía, permítame que me dirija a usted. No reconozco la fijeza laboral a 780 personas que de hecho son trabajadores fijos no sólo es, en nuestra opinión, llevar adelante una desacertada política laboral, sino maltratar la técnica presupuestaria, sustituyendo el presupuesto de cristal por este presupuesto al que, con la licencia de SS. SS., he llamado «Presupuesto de hormigón».

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el defensor del dictamen.

El señor DE LA TORRE PRADOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro compañero el representante del Grupo Parlamentario Socialista ha ilustrado a la Cámara sobre parte del contenido del capítulo 6.º, del Servicio 4.º, de la Sección 23 de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 1978. Pero sólo de una parte de ese capítulo.

Con el propósito de completar esa información, sobre todo para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en el seno de la Comisión de Presupuestos, y que, por tanto, no han participado en los debates y no han conocido quizá con el detalle que los componentes de la Comisión el contenido de estos Presupuestos, yo quisiera añadir algunos datos y cifras.

Efectivamente, ha mencionado el contenido del artículo 6.1, las partidas 611 y 612, cuya cantidad total de 478.400.000 pesetas se solicita de la Cámara sea trasladada al capítulo 1.º

Pero hay también otro artículo, el 6.2, bajo la rúbrica de «Otras inversiones reales» (el artículo 6.1 tiene el título de «Programas de Inversiones Públicas»), en el que hay una cantidad de 524 millones que se distribuyen en tres partidas, la 621, 622 y 623, que corresponden: La 621 (para completar en el mismo grado de detalle la información) a la rectificación del censo de 1976, con referencia a 31 de diciembre de 1977, por el importe de 140 millones de pesetas. La 622, que corresponde a la confección del censo industrial, por importe de 300 millones de pesetas; y la 623, para realizar encuestas de carácter no permanente,

por un importe de 84 millones de pesetas, cuya suma total, como acabo de decir, es de 524 millones de pesetas.

Es claro —yo lo entiendo así y el compañero representante del Grupo Socialista del Congreso no ha hecho referencia a que esta cantidad de 524 millones de pesetas está bien situada dentro del capítulo 6.º de «Inversiones Reales», por tanto, que puede considerarse las cantidades previstas para realizar trabajos de investigación, de estadística, de encuestas en general, el desarrollo del censo y el completar la información estadística, tan escasa en nuestro país, como auténticamente una inversión; una inversión que produce un producto que es el flujo informativo, la cantidad de información que la sociedad española en general y la Administración en particular —yo diría que también esta Cámara en concreto— necesita y reclama con urgencia.

Queda claro, por tanto, que no es absolutamente contradictorio lo que digo, como argumento que no ha hecho mención a ello, y además es claro que es un proceso productivo de información que la inversión en estadística no es una contradicción.

¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que nuestro compañero, representante del Grupo Socialista, menciona como algo que él califica como una situación irregular presupuestaria?

Pues que para la realización de cierto tipo de estudios, de estadística y de censo, de un carácter más o menos periódico, se ha recurrido a personas que desde hace algunos años han estado trabajando en esta tarea y que tienen, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Presupuestos de este año, el artículo equivalente en otras Leyes Generales de Presupuestos de años anteriores, un contrato de carácter laboral, con todos los derechos laborales, y que no supone ninguna indefensión desde el punto de vista de sus derechos y sus aspiraciones.

Yo, en nombre del Grupo de la Unión de Centro Democrático, propongo a esta Cámara que no aceptemos la enmienda del Grupo Socialista y que mantengamos el dictamen de la Comisión aprobado mayoritariamente en la Comisión de Presupuestos; en primer lugar, por coherencia con lo que esta Cámara mayoritariamente ha aprobado esta tarde en rela-

ción con el artículo 14. Tal como estaban los argumentos expuestos, también de técnica presupuestaria, yo diría que nos podemos referir a argumentos bajo la misma rúbrica en un sentido contrario, unos y otros, pero también nosotros podemos hablar de argumentos de técnica presupuestaria, puesto que nos facilita a los que vamos a estudiar el presupuesto de esta Cámara, y en general a todos los interesados en el contenido de los mismos, el conocer con más exactitud cómo se gasta el dinero de la Administración Pública, qué es lo que se gasta exactamente, por ejemplo, en información estadística.

Es evidente que ese capítulo 6.º, cuya suma total supera los mil millones, da una visión clara, precisa, exacta e inmediata del esfuerzo inversor en información y estadística.

Si realmente se aborda con la serenidad y con el propósito que en ese sentido el Gobierno ha anunciado y ya se ha comprometido, de que los presupuestos vengán confeccionados como presupuestos por programas, será entonces realmente compatible ese propósito de claridad presupuestaria con la posibilidad de poder en ese momento quedar situados en el capítulo 1.º los gastos que pudiéramos decir de personal referentes a este tipo de actuaciones, para el personal que desarrolla este tipo de trabajos, ahora mismo contratado como personal, decíamos, para tareas y servicios concretos; y que, por otra parte, quede claro que la Administración (y ésta es una posibilidad que se abre tanto para el artículo 6.º, 1, como para el 6.º, 2) puede contratar no solamente personas, sino en general el servicio de grupos de personas, bajo la rúbrica de empresas, cooperativas, etcétera, que pudieran abordar la realización de estos trabajos.

Quiero tranquilizar a la Cámara y dejar perfectamente clara la sensibilidad por la situación social y laboral de este personal, de estas 780 personas que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística; digo que quiero dejar bien clara la sensibilidad del Grupo de Unión de Centro Democrático, en orden a la estabilidad que, de hecho, tienen en el empleo, en el trabajo, no sólo porque en el pasado y hasta ahora ha sido así, sino porque la expansión del trabajo de estadística es de tal volumen, de tal importe la cifra de inver-

sión que hay que realizar (y digo inversión) en estas tareas, que está supergarantizada esa estabilidad.

Pero hay un punto que me interesa también destacar y que no sé si el representante del Grupo Socialista en sus reflexiones sobre el tema, inclusive en sus conversaciones con el personal del Instituto Nacional de Estadística, ha meditado sobre ello o ha entrado en la posible preocupación que supondría el hecho de que al pasar estas cifras al capítulo 1.º de personal entraría en juego una limitación de incrementos salariales como para todo el personal en general de la Administración. Bajo la forma de la posible contratación de los trabajos que precisamente se financian con el artículo 6.º, 2, llamado «otras inversiones reales» y bajo el complemento, por tanto, de otros contratos adicionales podrían recogerse bajo fórmulas de productividad (puesto que sería una realización de trabajos en una cantidad mayor que antes) unos incrementos bastante sustanciales.

Esto no sería, o no es en absoluto, una situación irregular, es perfectamente clara y transparente la situación del capítulo 6.º, donde están, pero sí sería situación anómala e irregular si estas personas pudieran estar acogidas al capítulo 1.º y tuvieran una financiación complementaria con cargo al capítulo 6.º que creo es obvio. Es, por ejemplo, la referencia que podíamos traer en este sentido, que se produce cuando se puede pensar que hay personas que trabajan en la Administración directamente e indirectamente (referencia que muchas veces hacemos nosotros cuando queremos conseguir entre todos una Administración más clara, más diáfana y más perfecta), y por la tarde trabajan para empresas o, en definitiva, servicios que fueran contratados por la Administración. No creo que ése sea el propósito del señor De Vicente, pero llegaríamos a plantearnos a corto plazo esa situación.

Es por estas razones básicamente, y por la coherencia con lo aprobado en el artículo 14, con la seguridad de que conforme se avance en la elaboración de los presupuestos y se vayan haciendo presupuestos por programas, que parece que en dos años será así como se traigan a la Cámara, y se pueda abordar el

tema con la búsqueda en ese momento de una solución dialogada y estudiada para no disminuir o molestar los intereses económicos de estas personas, por lo que termino solicitando de la Cámara que no dé su voto afirmativo, sino negativo a la enmienda del Grupo Socialista y que, por supuesto, dé luego el voto afirmativo al dictamen de la Comisión. Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación correspondiente a la enmienda número 227 del Grupo Socialista del Congreso a la Sección 23, Ministerio de Economía.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, rechazada la enmienda número 227 formulada por el Grupo Socialista del Congreso a la Sección 23 del Presupuesto del Ministerio de Economía.

Pasamos a continuación al examen de las enmiendas de la Sección 26. La primera de las enmiendas va a ser la correspondiente a la número 232 formulada por el Grupo Socialista del Congreso. Tiene la palabra, a efectos de defender la enmienda, el representante del Grupo Socialista del Congreso.

La señora BUSTELO GARCIA DEL REAL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar comunicarles que en la página 92, donde figura la enmienda que me corresponde defender, hay una errata. En la línea séptima, donde pone «presupuestos», debe poner «traspaso». Y en la página 93 hay también dos erratas. Donde pone «2, servicio 03», en vez de «capítulo 3.º» debe poner capítulo 2.º». Y donde pone «4, Servicio 03, capítulo 2.º», en vez de «artículo 24» debe poner «artículo 29».

Mucho más difícil, señor Meilán, que entender y criticar unos presupuestos cuando no se tiene experiencia, como por lo visto nos ocurre a los socialistas, mucho más difícil es elaborar unos presupuestos para ser discutidos democráticamente, cuando la experiencia que se posee es la de elaborar presupuestos para ser aprobados sin que nadie los estudie

y los critique. Y en el Ministerio de Cultura esa falta de experiencia por parte de quienes los han elaborado es evidente. Unido a que esa falta de experiencia conlleva a que en ese Ministerio tienen cabida varias direcciones generales y subsecretarías de las más diversas procedencias, algunas de las cuales en su actuación pasada lo que hicieron fue precisamente anticultura.

Para defender mi enmienda voy a agrupar los presupuestos del Ministerio de Cultura en cuatro apartados. Primero, dos direcciones generales que no saben lo que van a hacer en el año 1978: la Dirección General de Difusión Cultural y la Dirección General de Desarrollo Comunitario.

Segundo, una serie de organismos autónomos que tienen superávit y reciben subvención del Ministerio de Cultura: por ejemplo, el Instituto de la Juventud y la Junta Coordinadora de Actividades Culturales.

Tercero, otra serie de organismos autónomos que reciben subvenciones del Ministerio de Cultura y cuyo presupuesto comprende, en la partida denominada «otros gastos», cantidades que nos parecen desorbitadas. Por ejemplo, el caso de NO-DO y de Televisión Española. Televisión Española, que recibe 5.000 millones de pesetas de subvenciones del Estado, tiene en «otros gastos» cinco mil y pico millones de pesetas.

Y por último, varias direcciones generales con un contenido real de promoción y protección del desarrollo cultural cuyas dotaciones presupuestarias son a todas luces insuficientes. Todo ello junto a la existencia de una partida de 625 millones en el servicio 01 destinado a gastos de bienes y servicios que se ocasionen por el traspaso al Ministerio de Cultura de las funciones asignadas a la extinguida Subsecretaría de la Familia, Juventud y Deportes, además de otra partida destinada al pago del personal laboral incluido en la extinguida Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, que comprende 511.500.000 pesetas.

Por ello, y conscientes de que tal y como se nos han presentado los Presupuestos, y la poca clarificación que han aportado el señor Ministro de Cultura, el señor Subsecretario y otros Directores Generales, cuando han com-

parecido ante la Comisión y la Ponencia de Presupuestos, hemos presentado una enmienda a la totalidad del Presupuesto de la Sección 26. Como esta enmienda no ha prosperado, intentamos, a través de la que en este momento yo estoy defendiendo, introducir simplemente un poco de racionalidad y de sentido común en un Ministerio que debería contribuir a llenar el vacío cultural heredado del franquismo, sabiendo que partimos prácticamente de cero y que no podemos despilfarrar los insuficientes recursos con que contamos.

Por ello, nosotros hemos propuesto suprimir todas las asignaciones a la Dirección General de Desarrollo Comunitario y de Difusión Cultural. La Dirección General de Desarrollo Comunitario sabemos que se ha creado para poder remunerar a los funcionarios de la Sección Femenina, creando para ello incluso una Sub-Dirección General de la Condición Femenina.

También sabemos, por las explicaciones que el Director General dio en su momento, que los objetivos son, para el año 1978, nada más y nada menos que hacer guarderías, bibliotecas, ocuparse de los minusválidos e incluso hacer centros de planificación familiar.

Señoras y señores Diputados, señores del Gobierno, ¿creen ustedes que esto es serio? ¿Creen ustedes que es serio que la Sección Femenina se dedique, después de cuarenta años de decirnos que cualquier tipo de control de la natalidad, salvo la abstinencia periódica, era pecado, que esas mismas personas sean las que hagan ahora la planificación familiar? (Rumores.)

¿No les parece que sería más lógico que las funcionarios de la Sección Femenina se hubieran integrado en las direcciones ya existentes del Ministerio de Trabajo para hacer guarderías, o del propio Ministerio de Cultura para hacer bibliotecas, o en el Ministerio de Educación para hacer educación física, etcétera.

Respecto a la Dirección General de Difusión Cultural, creemos que su existencia es innecesaria, puesto que la difusión de la cultura, que no es algo abstracto, se debe hacer a través de las manifestaciones culturales concretas que se deben promocionar y des-

arrollar en las Direcciones Generales de Teatro, Cinematografía, Música, Libro y Bibliotecas.

Las aulas culturales y los teleclubs que ya existen, y que no han servido desde que se crearon prácticamente para nada, deben pasar a ser, por ejemplo, bibliotecas, o pasar a depender de los Ayuntamientos para realizar en ellos las actividades culturales que los vecinos consideren oportuno y no las que el Ministerio de Cultura les indique.

Con esto tendríamos aproximadamente 850 millones de pesetas para dedicar a verdaderas actividades culturales. A ello creemos que se podría añadir 400 millones de esa partida de 625 millones de gastos de traspaso de funciones de la extinguida Subsecretaría de Familia, Juventud y Deportes. También podrían deducirse otra serie de cantidades de las subvenciones a Organismos autónomos que tienen superávit: 29 millones de la Junta Coordinadora de Actividades Culturales, 422 millones del Instituto de la Juventud, 27 millones del Instituto Nacional del Libro Español, aunque respecto a este Organismo la información que tenemos no es oficial, puesto que no se ha presentado su presupuesto dentro de los Presupuestos del Ministerio de Cultura, pero sabemos que tiene superávit.

Y, por último, y dado que no se nos ha aclarado cuáles son esos «Otros gastos» dentro del presupuesto de NO-DO y Televisión Española, y dado que todos sabemos que existe corrupción y despilfarro en esos Organismos, que estos días se están denunciando por todas partes, creemos que se podrían deducir 1.000 millones de los 5.000 que el Ministerio da a Televisión, y 20 millones de los que da a NO-DO.

Estas cantidades, obtenidas de estas reducciones que antes he explicado y que desde luego son insuficientes para atender a todas las necesidades culturales de este país, deberían dedicarse fundamentalmente a aumentar las asignaciones destinadas a desarrollar las bibliotecas en nuestro país, a proteger el patrimonio artístico, y también a promocionar la creación y difusión del teatro, así como la política cultural cinematográfica a través de la Filmoteca Nacional y del Cine de infancia y de juventud. Son los cuatro puntos en los

que creemos que habría que intensificar los esfuerzos del año 1978.

La situación de nuestro país en el campo de las bibliotecas públicas es desastrosa. Según datos de 1976, en España hay 0,17 libros por habitante, cuando las normas para bibliotecas públicas dadas por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios en 1973 consideran la cifra media necesaria de 2,5 libros actuales por habitante como mínimo deseable para un servicio bibliotecario decente. Hay que tener en cuenta además que en ese 0,17 existente en nuestro país están incluidos los libros anticuados, los que sólo tienen un valor histórico y los duplicados, con lo que la proporción es todavía más desastrosa.

Por otro lado, entre auxiliares, facultativos, bibliotecarios y personal contratado hay en todo el país 500 funcionarios, cifra ridícula que es necesario hacerla llegar hasta 14.000 funcionarios. Por ello es necesario convocar oposiciones inmediatamente, pues de nada serviría hacer bibliotecas y comprar libros si no hay profesionales. Por eso aumentamos tanto la partida de personal.

Si las bibliotecas están infrautilizadas es porque están anticuadas, mal montadas, poco atractivas, incluso en algunas es difícil conseguir los libros prestados. Las bibliotecas modernas de los países desarrollados son verdaderos centros culturales con secciones infantiles, fundamentales para fomentar la cultura y la lectura. También es importantísimo crear centros de préstamos dependientes de las bibliotecas, que pueden estar en las Asociaciones de Vecinos, en las Casas del Pueblo, etc., y no hay que temer que los libros se pierdan o se deterioren. Lo deseable es que se utilicen.

Durante estos cuarenta años los presupuestos para bibliotecas han sido ridículos, en contra de lo que se realizó durante la República y la Guerra en el campo republicano. Recordemos el proyecto de María Moliner. Por ello, para alcanzar una situación europea, nuestra propuesta de aumento tanto de la adquisición de libros como de aumento de personal y de instalación de nuevas bibliotecas sería necesario mantenerla durante treinta años consecutivos aproximadamente. Solamente para realizar el aumento anual

necesario, según las normas internacionales, serían necesarios anualmente 2.187 millones de pesetas.

En lo que se refiere a la Dirección General del Patrimonio Artístico, Museos y Archivos, podemos decir que la prioridad debe darse a la conservación del Patrimonio Artístico. Aunque museos como el del Prado todavía no tengan completo el inventario de todos los cuadros que poseen, la mayoría en depósito, muchas veces incontrolados; aunque haya archivos cuyo fondo documental siga sin inventariar en su totalidad; aunque en el archivo catedralicio de Guadix, en Granada, se amontonen las cartas de Carlos V en el suelo de una sala húmeda, la situación de riesgo es, sin embargo, mínima, comparada a la que afecta a los monumentos arquitectónicos.

España posee el patrimonio arquitectónico más importante del mundo occidental, después de Italia; su riqueza arquitectónica, por la cantidad, la variedad y la calidad, es uno de los rasgos definidores de ese patrimonio. La ausencia paralela en las estructuras a lo largo de muchos años, factores nuevos como el mal de piedra, los efectos de una contaminación incontrolada, el mal uso —producto de la ignorancia o de la rapacidad— han dejado muchos monumentos en una situación crítica.

En efecto, la Administración no ha seguido criterios coherentes en cuanto a la adscripción de fondos a estos objetivos, lo cual demuestra su ignorancia sobre el tema. En 1972, la entonces Dirección General de Bellas Artes contaba con 1.000 millones de pesetas para obras; en 1976 quedó en 300 millones de pesetas, aumentados con 25 millones del Fondo de Acción Coyuntural. En la actual propuesta gubernamental se rebaja la cifra en relación al año 77. ¡Un desastre!

En 1976, en los estudios previos al IV Plan de Desarrollo se concretó que serían necesarios 100 millones por provincia-año, durante diez años, a partir de cuyo plan de consolidación general el país podría contentarse con meras obras de conservación.

Hay peligro inminente, por ejemplo, de destrucción de la catedral de Burgos, de las portadas escultóricas de la catedral de León; la mezquita del Cristo de la Luz en Toledo se

resquebraja y permanece en práctico abandono, etc. Y, además, en lo que se refiere a catálogos, archivos, fotografías e inventarios, la situación también es desastrosa. Baste decir que el Decreto de 12 de junio de 1953, artículo 3.º, daba un plazo de un año para revisar los catálogos no publicados e imprimirlos, cosa que veinticuatro años más tarde no se ha hecho.

Para hacerse una idea del rigor con que se llevan los catálogos, archivos, fotografías e inventarios, diré que la Dirección General no tiene en este momento la más remota idea del paradero del destacadísimo retablo de Montserrat, de la Corona de Aragón, de Madrid, que se desmontó en los años treinta y se depositó en el Palacio de Oriente, donde lo están buscando.

Con todo, señores Diputados, y sin alargarme más para no cansarles, porque es muy tarde, nuestra enmienda queda suficientemente justificada, y conste que nuestra intención es de buena voluntad y no de apuntarnos, señor Cabanillas, un tanto político. Queda demostrado. (*Aplausos.*)

El señor MEILAN GIL: Pido la palabra para alusiones.

El señor PRESIDENTE: Para alusiones tiene la palabra el señor Meilán Gil.

El señor MEILAN GIL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con muchísima brevedad, para que no se puedan convertir en una cláusula de estilo los comienzos de las intervenciones del Grupo Socialista, con amables dedicatorias al señor Meilán «que les estará escuchando», pero sobre todo porque no podía dejar pasar, sin faltar a la cortesía, a la señora Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, esa nueva alusión.

Están, al parecer, muy interesados la señora Diputado y alguno de sus compañeros en saber dónde he adquirido yo las experiencias presupuestarias. Estas experiencias presupuestarias las he puesto de manifiesto, en la discusión de esa Ley General Presupuestaria, reiteradamente y muy bien citada por los distintos miembros del Grupo Socialista del Congreso que aquí han intervenido. Y las he adquirido on the spot en el Executive

Building Office donde tiene su sede el Bureau of the Budget, en el Pentagon, para conocer el PPBS y sur place en la Rue Rivoli para saber del RCB —rationalisation du choix budgétaire.

Si esto les satisface su curiosidad, con mucho gusto. (*Rumores y aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: A efectos de la defensa del dictamen, tiene la palabra el señor Rodríguez Miranda.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: Señor Presidente, existiendo otras enmiendas a esta misma Sección...

El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer la defensa después de todas las enmiendas correspondientes a la Sección. (*Rumores.*) Perdón, señor Rodríguez-Miranda, pero el procedimiento seguido en el debate sobre los Presupuestos ha sido que aquellas enmiendas que estén agrupadas sí pueden defenderse agrupadamente, pero esta enmienda no lo está con ninguna otra.

Por tanto, tiene la palabra el señor Rodríguez-Miranda para defender el dictamen.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quisiera efectuar aquí una defensa del dictamen de la Comisión y, correlativamente, un ataque a la enmienda 232, presentada por el Grupo Socialistas del Congreso, en relación a la Sección 26 del Ministerio de Cultura.

La intervención que me ha precedido ha venido abierta por una previa exposición en el sentido de que la intervención del señor Ministro de Cultura ante la Comisión de Presupuestos del Congreso no ofreció luz bastante a la señora Diputado que ha efectuado la defensa de la enmienda. Yo tengo la impresión, quizá sea una impresión puramente personal, de que la información ofrecida por el señor Ministro fue una información suficiente. Es más, me atrevería a decir que mucho mayor de lo que yo me esperaba de un gallego que había llegado a ministro. (*Risas.*)

De todas maneras, tengo que advertir que la defensa de una Sección tan insuficientemente dotada como es la del Ministerio de Cultura... (*Fuertes rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señores Diputados, guarden silencio.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: La defensa de una Sección como la del Ministerio de Cultura es fácil, ya que está indudablemente escaso de medios, puesto que tiene 19.000 millones de pesetas dentro del conjunto de los actuales Presupuestos del Estado, y es ésta una cifra corta para atender a una política cultural, cualquiera que sea el signo con que ésta se presente. Es éste un primer dato que ha de ser necesariamente recalcado, puesto que esta indudable escasez de medios con que se encuentra el Ministro de Cultura y con que se encuentra la realización de una posible política cultural ha de afectar en el empobrecimiento de las asignaciones a cada uno de los distintos capítulos y números presupuestarios.

Hay aquí, por tanto, un reconocimiento expreso de que indudablemente son cortas las cifras asignadas a bibliotecas, de que son cortas las cifras asignadas a la reconstrucción o conservación de nuestro patrimonio arqueológico o histórico, pero indudablemente es ésta una de las varias distribuciones posibles entre un presupuesto que, repito, me parece escaso de fondos, sumamente escaso en una cifra que sólo alcanza a la cuantía de 19.000 millones de pesetas.

El análisis de la enmienda 232, del Grupo Socialista, refleja una preponderancia en cuanto a las reducciones y destino que se pretende aplicar a las cantidades ya reducidas de la actual estructura presupuestaria. En efecto, a través de la enmienda se pretenden destinar 2.762 millones de pesetas a patrimonio artístico, bibliotecas, archivos y museos, cuya cantidad se reduce fundamentalmente en 400 millones de la Subsecretaría, en 20 millones del NO-DO, 29 millones del Servicio 01, capítulo IV, 525 millones de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 27 millones del Instituto Nacional del Libro Español, 326 millones de la Dirección General de Desarrollo Comunitario, 422 millones del Instituto de la Juventud y 1.000 millones de Radio-televisión Española.

El sentido global de la enmienda, me va a permitir el Grupo Socialista que ha tenido hoy tantas licencias (y tantas licencias cons-

tructivas y relacionadas con el cemento) decirle que me da la impresión de que está afectado por algo que se llamó en tiempos pasados como el mal de piedra del franquismo, porque se pretende básicamente la concentración de un presupuesto, y creo que son palabras textuales efectuadas ante la propia Comisión, concentrado exclusivamente o casi exclusivamente en una política de defensa del patrimonio artístico y cultural, junto con una política bibliotecaria. Da la impresión de que la función de difusión cultural pretende quedarse enormemente recortada en una actividad de conservación e incremento de nuestro inmovilizado, y me temo que este sentido de recorte a lo que pueda ser actividad de promoción cultural incide en lo que se llamó en épocas pasadas el mal de piedra de toda una época cultural, en donde los fondos eran destinados exclusivamente a estas mismas funciones a que hoy, a través de esta enmienda, se pretenden destinar.

¿Dónde se efectúan los recortes básicamente de las cantidades asignadas? En cuanto a los 400 millones de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, quiero decir que no se trata de una reducción a la Sección 27, sino a la 29, y que se trata de cantidades básicamente destinadas a edificios con la finalidad de centros culturales, de enseñanza, de tipo social, etc., que en cuantía de 916 han de ser mantenidos a través precisamente de este capítulo presupuestario, y cuya distribución total de fondos entre el número de edificios responde a un resultado de coste por edificio y año de 682.000 pesetas, o lo que es lo mismo, 55.000 pesetas al mes, dentro de las cuales se incluye no sólo la conservación y reparación, sino también el mantenimiento de los servicios como agua, luz, teléfono, etc.

En cuanto a los restantes servicios hay que decir que muchos de ellos son obligaciones contraídas por el Estado incluso con anterioridad a la propia creación del Ministerio de Cultura. En este punto el Ministerio de Cultura ha tenido que quedar sometido a decisiones que para él son vinculantes, so pena de infringir un organismo de la Administración del Estado la propia normativa, lo cual no es precisamente nada favorable a lo que se califica de un Estado de Derecho.

Las subvenciones y cifras que se pretenden

recortar del Instituto Nacional del Libro Español son cifras que están obligadas en virtud de la Ley del Libro, aprobada hace años, y que tiene carácter fundamental para el Ministerio de Cultura.

Las restantes partidas de inversiones son partidas que aparecen incluidas en el programa cuatrienal de inversiones públicas aprobado para el período de 1976 a 1979, cuya aprobación por el Gobierno indudablemente vincula al Ministerio de Cultura, como a cualquier otra rama de la Administración del Estado.

En síntesis, creo que frente a una política quizá de conservación de piedra, muy loable —y este Diputado no pondrá la más mínima objeción a ella—, pero ante una escasez de medios a aplicar, hay que contemplar toda una actividad cultural como de simples medios culturales o como una política de estímulos culturales. Es necesario, entiende este Diputado, una defensa de lo que es la actuación cultural de este Ministerio; no sólo el mantenimiento puro y simple de los edificios, el mantenimiento de lo que es nuestra infraestructura artística e histórica, sino precisamente la utilización de los mismos en aras de una política cultural de claro signo regeneracionista, en un momento como éste en que el país se abre en nuevos visos de libertad. Es necesaria la utilización y potenciación de todos los medios materiales y es preciso, señores Diputados que me escuchan, que por una vez los edificios y los monumentos históricos españoles dejen de ser simples objetos para ser contemplados, para quedar precisamente dentro de una política cultural que permita una efectiva utilización por las comunidades a ellos más próximas.

Pero querría decir también que en esta presencia, esta actividad de estímulo cultural no ha de ser obstáculo tampoco para la conservación de lo que es patrimonio artístico y también para lo que es la creación y promoción de bibliotecas. Ya en el actual Presupuesto hay una cantidad de más de mil millones de pesetas destinadas precisamente a la conservación del patrimonio artístico como inversión real; y en cuanto a bibliotecas, la cantidad supera los 280 millones de pesetas. Si en lugar de contemplarlo como inversión real lo examinamos como gastos totales de

capital, la cifra se eleva a 2.876 millones de pesetas.

Creo que las cifras a través de las cuales se pretende dibujar la política cultural del Ministerio son las de realización de una política cultural basada en los principios de libertad, de descentralización, de participación y de concierto, que con estas líneas básicas fueron expuestos ante la propia Comisión. Y es precisamente este criterio de revitalización de todo lo que es nuestro patrimonio cultural, de creación de una política de auténtico estímulo cultural, lo que me lleva a solicitar de ustedes su voto negativo para la enmienda presentada por el Grupo Socialista, y naturalmente el mantenimiento del dictamen de la Comisión, en confirmación del Presupuesto remitido a este Congreso.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la enmienda. (*El señor Ministro de Cultura pide la palabra.*)

Tenía entendido que el señor Ministro de Cultura quería intervenir al finalizar el debate de la Sección de Cultura. No obstante, puede hacer ahora uso de la palabra.

El señor MINISTRO DE CULTURA (Caballeros Gallas): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es para mí verdaderamente grato comparecer aquí para intentar explicar de nuevo —cosa que sin duda por mi torpeza no conseguí en la Comisión— el esquema del presupuesto de un Ministerio recién nacido y sobre el que yo diría que resulta muy fácil, es una línea elemental de planteamiento estimar que todo el mundo sabe y que todo el mundo entiende; lo cual no significa que yo sepa mucho más o que entienda mucho más, sino simplemente que he tenido la obligación de plantearme una estructura a la que pudiese someterse en el mañana un Ministerio de reciente creación.

Cuando observé las enmiendas del Partido Socialista, mucho más ampliadas hoy, porque son una pura referencia de trasvase de partidas de un lugar a otro, sinceramente me motivó auténtico asombro y cierta preocupación una para mí obsesiva línea de conducta que reconducía todo el planteamiento del Ministerio aproximadamente a unas líneas elementales que intentaré esbozar.

En este Ministerio hay muchísimas subvenciones, y como la presunción es que éstas se pueden dar a quien se quiere y en el tópico del momento está imputar el que algunos las pueden dar mejor o peor que otros, hay que tener cuidado con dichas subvenciones.

La segunda de las ideas era coincidente con ésta. Para evitar que haya subvenciones lo importante es materializar el gasto cultural en bienes determinados y concretos. En una política dirigida concretamente a equipamiento cultural, entendiendo por equipamiento cultural el consumo del dinero en cosas determinadas, nace la impresionante euforia de que se aumenten las partidas para invertir en lugares determinados, especialmente monumentos, y que se aumenten determinadas partidas, sacándolo de donde sea, para que se consuma todo en libros.

Ante este hecho recibí, como se suele recibir en estos casos políticamente las observaciones ajenas, intentando saber qué perseguían, y sinceramente me pareció que mi obligación era comparecer ante la Comisión exponiendo las líneas de actuación que justificaban la orientación que se daba a este Presupuesto.

Observé, y esto es curioso, que no producía, sin duda por lo poco hábilmente que lo expuse, ningún resultado. Después —ya les contaré a los señores Diputados cómo me di cuenta de qué iba el juego— yo dije aproximadamente lo siguiente. En la época histórica —y me sitúo en el año 48—, los Estados, ante el fenómeno cultural, consideran absolutamente necesario hacer algún acto declarativo. Ese acto declarativo normalmente se reconduce a lo que se llama las declaraciones de derechos de esa época, que dicen que el ciudadano tiene derecho a participar en los bienes de la cultura.

Se trata de la clásica definición alambicada, inconcreta, de reconocimiento abstracto de unas posibilidades, sin ninguna obligación positiva vinculada a esta declaración. Naturalmente pasa el tiempo y frente a esta declaración de los derechos del 48 se discurre sobre el tema, y al discurrir sobre el tema, en las reuniones de Oslo y Helsinki, se da un gran paso y se dice que lo que existe es un derecho a la cultura, pero ese derecho a la cultura no es un simple derecho a participar,

cosa que es obvia, sino una obligación del Estado de proporcionar bienes culturales para que se pueda acceder al hecho cultural.

Naturalmente, yo esperaba que por una línea de este tipo irían las objeciones de un ilustre partido como el Socialista. Pues no. Seguían aferrados a no interesarles este tema. Entonces tuve que profundizar más, porque tuve que definir la política cultural que hacemos: una política de Gobierno, no una política de partido. Esté «renvoi», que cuando uno es Ministro tiene que pensar más en el Estado español y en España que en las motivaciones concretas de su partido, es un tema que no conviene olvidar, porque a su vez cualquier otro partido, en sus enmiendas —y después haré una observación sobre este tema—, tiene que pensar también en el Estado español y en España cuando motivadamente y con plenitud de derechos ejercita la potestad de la enmienda.

Resultaba, por tanto, que el Estado tenía que crear aquí esta línea que proporcione unos bienes para que se pudiese acceder al fenómeno de la cultura. Ahora bien, ¿qué había pasado en la evolución también del enfoque de la cultura en otra idea? Pues, en otro punto de vista, el Estado había asumido esta obligación de proporcionar cosas creándolas él. Es lo que se conoce durante los años pasados, con la colaboración estatal en la creación de la cultura popular, que significaba: yo hago los festivales, y a esos festivales puede acceder el ciudadano, que con eso se enriquece.

La cultura popular era una cultura y diría mediocre, en su sentido final estereotipada, reiterada, muy poco motivadora de auténtica capacidad de creación, que es lo fundamental como fenómeno cultural en el momento presente, porque el Estado, al proporcionar los servicios y los bienes culturales, lo que tiene que conseguir es estimular la creación cultural, y la creación cultural en tres ámbitos. En el primero, que haya posibilidad de crear y, por tanto, en la necesidad de un estatuto del artista, que debe comprender no sólo la regulación de las artes plásticas o tradicionales, sino de las nuevas artes, y entonces el Ministerio ha establecido, siguiendo antecedentes de otros países modernos sobre esta materia, la posibilidad de reconocer en el

mañana el 1 por ciento cultural, que significa que en toda obra pública haya que dedicar un tanto por ciento a la creación artística complementaria y, al mismo tiempo —cosa que traeré a esta Cámara— creaba un nuevo museo de técnicas y de artes, entendiendo por técnicas y artes no las tradicionales estereotipadas, sino todas las posibilidades de creación frente al objeto, derivadas de una capacidad del sujeto creador.

Pero, claro, con esto no bastaba, porque era estimular simplemente al artista. Era necesario algo más, y entonces —y esto es la clave— el Estado se encontró con que el mecanismo presupuestario para realizar el fenómeno de facilitar a todos el acceso a la cultura estaba decantado en la denominación tradicional, desde el punto de vista hacendístico de las subvenciones. Las subvenciones, ¿a qué respondían? A que de un modo paternal el Estado distribuya, en razón de cualquier actividad cultural, una cantidad cuantitativa de dinero. Entonces yo le expliqué a la Comisión que, sustituyendo totalmente el sistema de subvenciones, aunque quedase con esa denominación en el puro contenido presupuestario, el Ministerio intentaría realizar el gran cambio que significa la política de convenios. ¿Qué son los convenios? Los convenios son la capacidad de reconocer que el pluralismo cultural arranca desde la base, que el Estado no lo debe dirigir, sino que lo debe apoyar, conceptos importantes, y que lo que debe es pactar con esas realidades auténticas de lo cultural que se extraen de la propia capacidad de creación de grupos o de la propia realidad de fenómenos culturales locales o regionales, siempre que éstos, los locales, los regionales, los grupos o las asociaciones, planifiquen mínimamente su contenido cultural.

De ahí salió el planteamiento de que todas las subvenciones del Ministerio, que son sólo el 5,4 por ciento de un presupuesto de 19.000 millones de pesetas, es decir, aproximadamente unos 1.500 millones de pesetas, serán destinadas por el Ministerio al fomento de los convenios o de las cartas culturales con las regiones, con los entes locales y con las agrupaciones o grupos culturales de cualquier tipo. ¿Por qué se hacía esto? Porque en la experiencia ajena esto había superado el concepto

puramente constructor, que es en lo que creo yo que están todavía parte de las objeciones del Partido Socialista.

No se trata de hacer casas de cultura, no se trata de hacer casas del pueblo y no se trata de temer que se puedan hacer casas de cultura para que sean competidoras de las casas del pueblo, porque en la realidad española —y esto es muy importante— nos sobran habitáculos en que realizar actividades culturales. De manera que el problema no es de falta de medios físicos, en cuanto a entornos físicos en que se puedan desarrollar actividades culturales, ni siquiera en el campo de las bibliotecas; lo que nos falta es estructura cultural que llene, de verdad, esos habitáculos.

Por eso, el primero de los planteamientos del Ministerio, que no ha sido observado por los señores del Partido Socialista, fue incorporar una partida que se llama de inventario cultural, y que no es el inventario cultural tradicional, el que le gusta, el que está en los libros elementales del patrimonio de nuestros inmuebles culturales; es el patrimonio de todo el activo de bienes y servicios que hay en cada entorno provincial o regional español. Y se han adscrito 80 millones de pesetas para realizar esta operación de inventariar, no los bienes físicos, sino los servicios culturales de que disponemos. ¿Por qué? Porque para el mañana cultural el fenómeno estadístico de la cultura será la única manera de que podamos empezar a homologarnos a los niveles internacionales, porque la necesidad de unos indicadores culturales, que sólo se derivan de un buen inventario, responden a algo que sintió Alemania en el año 1964 y Suiza en el mismo año, y que hicieron con la misma elementalidad de hoy, pero que ya los franceses desde época reciente, como consecuencia de su madurez en ese tema, están llevando a cabo aprovechándose de todos los sistemas de la informática.

Nosotros no podemos llegar todavía a eso, pero el primer paso es facilitar la creación artística; segundo, hacer el Estatuto personal y científico; tercero, realizar un inventario, y cuarto, seguir una política de convenios. Y aquí surgió el problema, que no se quiso entender, de la famosa carta de Alsacia. Porque cuando yo expliqué que el tratamiento de las cartas y convenios permite estar mucho más

cerca de las realidades locales y regionales, segundo, que sean esas autoridades las que nos soliciten las aportaciones culturales y no se las impongan a ellos; tercero, que sean el mecanismo para salvar las auténticas culturas aborígenes, se me hizo un reproche porque utilicé otra expresión —lo de aborigen yo al menos lo aplico a Galicia, que me merece respeto—, pero sobre todas las cosas planificación cultural.

Es decir, la capacidad de que un ente, desde el más grande hasta el más pequeño, desde la región hasta la asociación, pueda, a lo largo de un año, calcular: Si yo me comprometo a hacer este programa, si fijo este contenido de actividades culturales, si contrato a esas determinadas personas en las que la libertad de elección queda atribuida al auténtico creador del fenómeno cultural, el Estado, con mayúscula, no hay que olvidarlo, me asegura un tercio, dos tercios o una cuarta parte del presupuesto y me da la estabilidad haciéndome auténticamente libre, que en concreto es la esencia de la democracia, y no libre en puras declaraciones verbales, porque basta con que cumpla ese presupuesto para que ese mecanismo de las subvenciones desencadene, sin necesidad de pasar por las horcas caudinas mendicantes de tener que hablar sistemáticamente con el Ministro y con el Subsecretario.

Cuando expliqué esto en la reunión de la Comisión se me pudo decir: Sí, pero durante un tiempo en que usted tiene esa cantidad a disposición suya. Y advertí: Señores, tengo esa cantidad a disposición mía, pero acabamos de firmar los Pactos de la Moncloa y en un plazo de seis meses el Ministerio de Hacienda impondrá las reglas de clarificación que me obligarán a mí a dar cuenta del modo en que empleo las inversiones. Entonces aclaré que el ideal de un Ministerio de Cultura del mañana será que casi tenga comprometidas esas partidas en el mismo momento que nace cada año, porque significará que como consecuencia del inventario y del análisis de esa realidad habrá invertido debidamente y no discrecionalmente sus fondos.

Pero todo esto yo lo explicaba —y confieso que a lo mejor lo hice aún muchísimo peor que hoy— (*Risas*), pero notaba que no tenía la menor capacidad de recepción. ¿Y por qué,

señores Diputados? Pues por algo muy importante, porque el Partido Socialista en esta enmienda, que en el fondo está mezclada con el sutil encanto de la protección de lo cultural, dice que este Presupuesto es el que tiene más alta cifra para libros que ha tenido nunca ninguno y que es el de más alta cifra para inversiones que ha tenido ninguno. Están equivocados los datos de Carlota, y perdón por la intimidación galaica. Seguía sin entenderlo, pero uno al final acaba por caer en las cosas. ¿Qué pasaba? Que no le interesaba nada a los enmendantes que se les explicasen cuáles eran las líneas de las Direcciones, porque, naturalmente, en esa línea de difusión, en esa dirección de la difusión cultural es en donde está toda la política de convenios y otra política, Carlota, que es la política de creación de profesiones nuevas culturales.

Resulta auténticamente —iba a decir demencial, pero es auténticamente increíble— que se pueda plantear en serio el tema de que necesitamos catorce mil bibliotecarios con todos sus estatus. Lo que necesitamos —y ésta es la técnica de la UNESCO— es la creación de unas profesiones culturales, de organizaciones culturales, de animadores culturales, término que no cae muy bien en la sociología gramatical española, pero que tiene muchos antecedentes en los distintos países que sean capaces de mover el fenómeno cultural apoyando la creación desde la base del hecho cultural mismo. A éstos es a los que hay que hacer en parte bibliotecarios, porque no se necesita una técnica «superferofláutica» de profesión óptima para conseguir de verdad dirigir una pequeña biblioteca en un entorno rural de nuestra tierra.

A eso que yo comprendo que no se había pensado, pero que a mí me parece importante, es a lo que está destinada la Ley General de Difusión Cultural.

No quiero cansar a la Cámara, sino aclarar hasta el final lo que son mis pensamientos.

El Partido Socialista no tenía un gran interés en que se plantease la política cultural. Cuando en la Comisión, un inteligente miembro del Partido Socialista, que fue el que me contestó, porque no tuve la dicha de que estuviese Carlota en la sesión, llegó a concretar cuál era la posición de su Partido, dijo con

esa sinceridad leal de aquel que polemiza honestamente: Es que yo prefiero que vaya todo a inversiones reales. Es decir, lo que se planteaba era la conveniencia de que en estos momentos el Ministerio de Cultura fuese un consumidor de productos concretos que pudiera proporcionar a cada español un magnetofón o unos cuantos libros, pero que no se plantease en serio una política cultural. Y eso es lo que modestamente ha intentado plantearse el Ministro de Cultura, no con excesivo acierto quizá, pero sí por lo menos con una novedad de planteamiento. Y esa novedad de planteamiento a él le parecía consecuencia de su posición como hombre de Gobierno en un momento de transición, en un momento en que todos tenemos la obligación de sentirnos, como decía un socialista, que por su eminente cabeza quizá tenga dificultades para ocupar su sitio, hace días en esta Cámara, un poco hombres de estado. Y hemos de pensar que la programación de una cultura es consecuencia de esa obligación y no propiamente de hombres de Partido.

Hoy esta Cámara se ha utilizado mucho más como cámara de resonancia que como cámara de resultados. Puedo asegurarles a los señores del Partido Socialista que el día que gobiernen, que yo deseo que sea muy lejano (*Risas*) y, además, considero improbable (*Risas*), lo que no haría sería atarle las manos a un Ministro de Cultura para que sólo pudiese invertir en piedras y en libros.

Nada más, muchas gracias. (*Aplausos*).

El señor PRESIDENTE: Procede la votación de la enmienda número 232, del Grupo Socialista del Congreso, a la Sección 26, Ministerio de Cultura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 129; en contra, 169; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la enmienda número 232, del Grupo Socialista del Congreso, a la Sección 26, Ministerio de Cultura.

Corresponde ahora el examen de distintos grupos de enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Comunista y que han sido agrupadas a efectos de su defensa ante esta

Cámara. El primer grupo lo constituyen las enmiendas 108, 110, 111, 112 y 113. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Comunista.

El señor SOTO MARTIN: Señoras y señores Diputados, espero de la benevolencia de esta Cámara, y especialmente de ciertos sectores de ella, que disculpen mi falta de títulos académicos. Mis pañales no han dado para más. Solamente tengo la licenciatura en el Ejército del Aire y en la fábrica donde fui despedido y hace pocos días, gracias a la amnistía concedida, he vuelto a ser readmitido.

En esta tribuna se ha explicado la filosofía que inspira a los Grupos Parlamentarios en la confección del Presupuesto del Estado. El señor Ministro exponía sus criterios, los criterios del Gobierno se entiende, aunque difícilmente puede comprenderse otra cosa, pese a su bien construida argumentación, que no sea el que este presupuesto que hoy se discute, se ha confeccionado precipitadamente, tapando huecos con criterios en los que pesan primordialmente las rutinas del pasado y no de las necesidades presentes y sentidas por nuestro pueblo.

Todo el mundo sabe, por lo menos en esta Cámara lo sabemos, que el presupuesto es el más fiel reflejo, o mejor dicho, la expresión material, siempre en proporción a las posibilidades reales, del respeto que unos gobernantes sienten por el conjunto de los ciudadanos. Siendo esto así, me temo que un observador imparcial, si fuese posible que lo hubiera, calificaría muy duramente el conjunto de partidas que componen el presupuesto de Cultura.

Nosotros no podemos permitirnos el lujo de ser imparciales, porque es mucho lo que está en juego. España necesita un presupuesto para la Cultura, pero en modo alguno unas cuentas para los listos. Y este presupuesto tiende más a poner en manos del Ministerio y de las direcciones generales sumas de dinero para gastar discrecionalmente, que para invertir en equipamiento cultural.

Ya ven, señoras y señores Diputados, que huyo de los calificativos agrios, aunque muchas de las partidas parecen confeccionadas a la medida de un Gran Capitán de vía estrecha.

Las enmiendas que presentamos hablan por sí solas y hacen innecesaria una larga explicación. Pero sí queremos decir que en este Ministerio se refugian ahora varias dependencias procedentes de la extinguida Secretaría General del Movimiento, a las que el Gobierno sigue dotando generosamente.

Entendemos la función del Ministerio de Cultura como un Departamento creador de la imprescindible infraestructura, conservando, recuperando y ampliando nuestra riquísima herencia cultural, que haga posible su disfrute por el pueblo: monumentos, museos, bibliotecas, teatros, ballets, etc., y, en el caso de un Ministerio como el que nos ocupa, haciendo posible que los ciudadanos y especialmente la juventud pueda practicar el deporte.

No podemos entender, si somos gentes bien pensadas, el desequilibrio que presenta el presupuesto, dedicando partidas importantísimas a los gastos corrientes del Ministerio y sus direcciones generales, su generosa discrecionalidad frente al raquitismo de las inversiones previstas para equipamiento cultural y deportivo.

La preocupación del Grupo Parlamentario Comunista por la cultura y por el deporte está en su programa y en su actuación diaria, está en su actitud cotidiana y en su perspectiva. No caemos en la trampa de oponer a las masas con las élites. Pensamos que Cervantes o Buero Vallejo, Góngora o Machado, Lope de Vega o Alberti, Aleixandre o García Lorca, Velázquez, Goya, Picasso o Miró, no realizaron o realizaron sus obras añorando que la polilla y el polvo sean sus degustadores, o para que los eruditos rellenen gruesos volúmenes, tratando de adivinar el subconsciente de sus creadores.

Tampoco entendemos el deporte al estilo de tantas «Hojas del Lunes» del país, de tanto «Estudio-Estadio» de la Televisión que relegan al ciudadano a la categoría de espectador pasivo y manipulable. Entendemos el deporte sobre todo como práctica y para ello necesitamos lugares e instalaciones donde realizarlos.

Invitamos a los rectores de la cultura y del deporte a recorrer cientos de ciudades y pueblos. Verán qué erial encuentran: Poquísimas

bibliotecas, teatros ni profesionales ni culturales, instalaciones deportivas muy pocas. Resultaría largo, muy largo de enumerar nuestras carencias.

Las veintiuna enmiendas que presentamos —que presenta el Grupo Parlamentario Comunista—, agrupadas para ahorrar tiempo, son modestas, pero su aprobación sería todo un síntoma de que por fin el deporte y la cultura son tomados en serio en este país.

Nuestras propuestas, pese a las dificultades técnicas y la carencia material de tiempo para el análisis detenido de los problemas, son constructivas y viables, pues se encuadran en la suma total presupuestada para el Ministerio de Cultura. Se trata de realizar algunos trasvases de recursos que hagan posible un principio de racionalidad y eficacia dentro de las posibilidades concretas en España y ahora.

El primer bloque de enmiendas apuntan a un incremento del gasto; las enumeradas con los números 105, 106, 109, 117, 119 y 121 tienen su justificación en las motivaciones razonadas de las enmiendas presentadas y que gráficamente podemos sintetizar en una partida de un millón doscientas mil pesetas dedicadas a la compra de obras de arte; la enmienda número 106, en un país como el nuestro, cuyo legado artístico está sometido a constante expolio. Nosotros proponemos multiplicar esta partida por cien y explicamos de dónde han de sacarse esos ciento veinte millones de pesetas.

El señor PRESIDENTE: La enumeración que está utilizando S. S. en su intervención es la enumeración que por lo visto le dio el Grupo Parlamentario Comunista, pero quizá siembra un poco de duda o confusión a los demás miembros de la Cámara, porque la enumeración que corresponde, de acuerdo con el orden establecido en la Comisión, es un poco distinta.

El señor SOTO MARTIN: El argumento es el mismo. Citamos ya una partida que la compañera socialista antes mencionó de 625 millones de pesetas para gastos de bienes y servicios que se ocasionan por el traspaso al Ministerio de Cultura de las funciones asignadas a la extinguida Subsecretaría de la Fa-

milia, Juventud y Deporte, y que nosotros proponemos dejar reducida a 25 millones.

Lo que podemos llamar fondo de reptiles en nuestras enmiendas números 103 y 104 se tiende a suprimir. Ello nos ahorraría 160 millones de pesetas.

El Presupuesto trata de justificarse con la expresión «para compensar a las empresas de comunicación y difusión cultural por alteraciones en su estructura y reorganización». Para este tema tales cantidades son ridículas y no responden a ningún plan, pueden distribuirse arbitrariamente.

El tercer bloque de enmiendas tiende a disminuir subvenciones englobadas en formulaciones vagas y genéricas, lo que produce la imposibilidad casi absoluta de medir su rentabilidad social y abre camino a la arbitrariedad que, en la práctica, se convierte en el acortamiento de las inversiones concretas que potencian la cultura.

La reducción de subvenciones que proponemos suman 705 millones que, dentro de la modestia de nuestras enmiendas, sería una buena suma para dotar al país de bienes y servicios culturales de indudable y concreto interés.

El cuarto y último bloque de enmiendas van destinadas a clarificar y mejorar las asignaciones. Tienden a que el dinero que se dice gastamos los españoles en deporte no se evapore hacia señores apoltronados en despachos caldeados y que, en todo caso, hace ya muchos años que dejaron de jugar a la pelota o practicar el atletismo.

Queremos que ese dinero, aunque poco, se invierta hasta su última peseta en la creación y conservación de instalaciones deportivas de uso público, para que nuestros niños, nuestra juventud especialmente, tengan la posibilidad real de practicar el deporte, o, cuando menos, que tengan la seguridad de que tenemos presentes sus deseos y necesidades.

Pensando en la justicia de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Comunista al Presupuesto del Ministerio de Cultura, pedimos vuestro voto para que dichas enmiendas sean aceptadas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias al Grupo Parlamentario Comunista, que ha hecho la

defensa de los cuatro bloques de sus veintiuna enmiendas de una sola vez, lo que ha ahorrado, evidentemente, tiempo a la Cámara.

Ahora corresponde la intervención al defensor del dictamen.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: Una intervención muy breve, puesto que todos los asistentes aquí estamos cansados y estamos llegando realmente al final del Presupuesto.

De todas maneras, en la brevedad de mi intervención no quisiera dejar en ella de felicitar a quien me ha precedido en el uso de la palabra, que si ha tenido la humildad de alegar no tener título alguno académico, ha hecho fe pública y demostración ante esta Cámara de tener quizá el más noble de los títulos: el de hombre culto, libre, porque, en definitiva, la posesión de la cultura es un elemento de libertad.

Y es ésta, la difusión de la cultura, una de las finalidades que persigue el Ministerio con su actual plan, cuya exposición efectuada por el Ministro elimina palabras innecesarias a este Diputado.

Realmente, las enmiendas números 108, 110 y 111 del Grupo Parlamentario Comunista lo que pretenden es la eliminación de subvenciones, cuya política de subvenciones ha quedado tan clara y meridianamente expuesta por el titular del Departamento, que creo que no vale la pena gastar una sola gota de saliva en su defensa.

No me resisto, en cambio, a la defensa en relación a las enmiendas 112 y 113. La supresión de subvenciones al artículo 45, capítulo IV, Servicio 01, para compensar a empresas y medios de comunicación social y para subvenciones a medios y empresas de comunicación social para ampliación y mejora de servicios, porque este fondo ha sido calificado, creo que con toda impropiedad, como un «fondo de reptiles». Yo no me atrevería a dar este calificativo, porque sus perceptores en las anualidades de 1976 y 1977 han sido empresas y agrupaciones, en orden a la comunicación, de índole tan variada como el diario «El País», la revista «Cuadernos para el Diálogo» o editoras como Europa Press.

Creo que es impropio el calificativo de reptiles a este fondo a través del cual lo que se

pretende es ayudar a empresas y colaborar en la difusión cultural del país.

En cuanto a las enmiendas 114, 115, 118, 121, 122, 123 y 124, inciden en ellas los mismos criterios antes expuestos, puesto que a través de las mismas lo que se manifiesta es una política cultural por la vía de las subvenciones, que, como bien ha recordado el Ministro, en orden a las entidades privadas alcanza tan sólo un 5,34 por ciento del conjunto de la actividad presupuestaria de dicho ramo ministerial.

Por último, en las relativas al Consejo Superior de Deportes, enmiendas números 132, 133, 134, 136 y 137, quisiera despejar, muy brevemente, el temor del Grupo Comunista al presentar sus enmiendas, al entender que con ello se iba a hacer una concepción elitista del deporte y que iban a ser subvencionadas entidades no merecedoras de ello. Y quiero hacerlo porque dentro de los capítulos enmendados, dentro de los concretos artículos que han sido objeto de debate aquí, precisamente la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista llevaría a cabo, sin pretenderlo, una política realmente elitista en el deporte, porque las cifras que aquí se mencionan corresponden en un 50 por ciento a la ayuda a las Diputaciones y Ayuntamientos para la construcción, por éstos, de elementos e instituciones de tipo deportivo; y el restante 50 por ciento a la construcción de centros deportivos y de alta competición directamente y de uso público por el propio Ministerio, siendo tan sólo de la cifra total que aquí comentamos un 7 por ciento destinado a subvenciones de entes privados, frente a un 93 por ciento con las finalidades antes expuestas.

A través de ello se pretende promocionar una política de construcciones deportivas, de utilización de las mismas, con criterios de evidente racionalidad. No sólo están aquí mencionados los edificios, los inmuebles, sino también entidades que colaboran en lo que es la faceta tan interesante y tan importante del deporte como las Federaciones nacionales y provinciales, los cursos de formación, las competiciones, las becas, los entrenadores, las asambleas y los propios boletines en relación al deporte.

Es por todo ello que solicito que el voto de

esta Cámara sea contrario a estas enmiendas agrupadas del Partido Comunista a la Sección 26 del Ministerio de Cultura, y sea ratificado el dictamen de la Comisión y, en consecuencia, el Presupuesto remitido a esta Cámara. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora a la votación de las 21 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Comunista a la Sección 26, Ministerio de Cultura.

Efectuada la votación, dió el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 118; en contra, 164; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas las 21 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Comunista a la Sección 26 del Presupuesto, Ministerio de Cultura.

Quedan ahora las enmiendas al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social, también formuladas todas por el Grupo Parlamentario Comunista. El representante del Grupo Parlamentario enmendante tiene la palabra.

El señor CAMACHO ABAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados. Esta mañana me tocó a mí, en nombre de la Minoría parlamentaria comunista, defender la enmienda a la totalidad del Presupuesto en lo relacionado con la Seguridad Social.

Se trata ahora, de una manera lo más breve posible, porque pienso que el horno no está para bollos y, aparte de eso, la máquina de votar, aunque no funciona muy perfectamente, más o menos marcha, de no entretenerme demasiado y, de alguna manera, explicar, en el menor tiempo posible, por qué la Minoría comunista presenta estas enmiendas agrupadas.

En primer lugar, nosotros proponemos un incremento de 12.000 millones de pesetas en estas prestaciones y el objetivo de esta partida es cumplir el incremento del 30 por ciento acordado en el Pacto de la Moncloa. Esto, porque estimamos que el Gobierno parte de que la masa de pensiones durante 1977 será de 381.000 millones sobre los que aplica el 30 por ciento de incremento. No se da ningún tipo de justificación de esta estimación y

existe la posibilidad de que en la estimación no se hayan tenido en cuenta las elevaciones de las pensiones que ha habido en 1977 e, incluso, hay que tener en cuenta que de ser así, el incremento para 1978 sería por debajo del 30 por ciento pactado. Esto sin olvidar que hay por ahí un 13 por ciento que se prometió y que colea.

Está claro que, en este sentido, nosotros pensamos también que el crecimiento medio podría situarse por debajo de ese 30 por ciento del que se habla. Por eso, proponemos este aumento de 12.000 millones. Está claro que los incrementos se proponen de forma proporcional a los colectivos del Régimen General y de los Regímenes especiales, muy especialmente, también, en aquellos sectores más desfavorecidos.

Igualmente, en cuanto a la Invalidez Provisional, proponemos un incremento de 1.500 millones de pesetas en esta partida, de forma que el crecimiento de esta prestación, respecto a 1977, sea del 30 por ciento, beneficiándose así de lo acordado para las pensiones en el Pacto de la Moncloa. La razón para ello es doble: por un lado, la importancia social de esta prestación, así como su larga duración, junto a que el tratamiento habitual de esta prestación, a efectos de revalorización, ha sido siempre paralelo al de las pensiones y que no hay ninguna razón que pueda justificar un crecimiento inferior al que se prevé para ellas.

En cuanto a la Ayuda Familiar, nosotros proponemos que igualmente se incremente en 1.000 millones esta partida, partiendo, también, del criterio adoptado en el Pacto de la Moncloa de reestructurar dicha prestación. Con vistas a obtener una mayor eficacia redistributiva, no debe ser interpretado como una congelación del gasto monetario global destinado a este fin.

En cuanto al desempleo, nosotros creemos que igualmente debe incrementarse en 14.080 millones, ya que dada la gravedad de la situación económica, tanto en la ciudad, como sobre todo y muy especialmente en el campo, en los trabajadores agrícolas, los objetivos fijados con este fin en el Pacto de la Moncloa deben tener un tratamiento prioritario.

De esta manera, creemos nosotros que se

han aplicado y se pueden aplicar a esta prestación todas las reducciones de gastos operadas en otras partidas, de forma que los incrementos de gastos sean iguales a las reducciones. Es decir, nosotros proponemos unos incrementos de gastos y después hablaremos de ciertas reducciones para que no superen, naturalmente, el Presupuesto de una manera global.

En cuanto a los auxilios económicos, nosotros proponemos una reducción de 500 millones en los correspondientes a los Regímenes Especiales y otros 500 en los servicios comunes, dado el carácter arbitrario y graciable de esta prestación y dada la escasez de recursos para atender necesidades sociales prioritarias, para que sean atendidas por prestaciones reglamentarias y obligatorias.

Creemos igualmente que en lo que se refiere a la asistencia sanitaria con medios ajenos, debe proponerse una reducción de esta partida de 11.000 millones de pesetas, a repartir de la manera siguiente: 10.000 millones en el régimen general y 1.000 millones en lo que se refiere a la parte de accidentes de trabajo. Con ello se pretende racionalizar y restringir los conciertos de la Seguridad Social con las entidades privadas; de ninguna de las maneras disminuir las prestaciones a los trabajadores con estos fines. Un control público y social de la gestión de la Seguridad Social debe contribuir a su racionalización y a su reducción en una política de eficacia y gestión orientada a la minimización de costos.

Por otro lado, se tiende con ello a combatir la corrupción existente en este terreno y a poner fin a la tendencia de una privatización creciente de la Seguridad Social, como ya hablábamos esta mañana.

Creemos que igualmente en lo que se refiere a farmacia la reducción de esta partida del Gobierno resulta un tanto sorprendente, ya que en 1977 el gasto general en farmacia se estima en torno a 90.000 millones, mientras que para 1978 se presupuestan 57.979 millones. La reducción es más intensa si se tienen en cuenta las prestaciones en los precios de los productos farmacéuticos en 1975 y, recientemente, en 1977, así como, por otro lado, el automatismo de la demanda, que únicamente se puede modificar mediante una re-

forma radical del sistema de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que previsiblemente no se va a producir en corto plazo.

Todo ello parece indicar que la reducción en el gasto presupuestado por el Gobierno en esta partida se apoya en una interpretación peligrosa del «Pacto de la Moncloa», de su punto 4.º, apartado e), párrafo 2.º En él se dice: «Con objeto de frenar el consumo innecesario de productos farmacéuticos, se revisará la participación de los beneficiarios en el coste de estas prestaciones, excepto en lo que se refiere a medicamentos básicos y con exclusión en todo caso de los colectivos menos protegidos».

En este punto la negociación fue dura en la Comisión. Hay que señalar que da la impresión de que el Ministerio pretende interpretarla de manera que se produzca una abusiva subida del dique moderador, haciendo que la participación del asegurado llegue al 30 por ciento del coste, en igualdad con lo que ocurre en el régimen agrario.

La Minoría parlamentaria comunista considera que no se pueden pedir nuevos sacrificios a los trabajadores. Además, tenemos la seguridad de que esto iría en contra de una modernización y transformación de la Seguridad Social y en beneficio de la industria fuertemente monopolizada y colonizada. Sería una forma de salir del paso de alguna manera arbitrando recursos, pero no atacando los problemas de fondo de la Seguridad Social.

Nosotros creemos que también los gastos generales, los gastos de administración de la Seguridad Social, pueden reducirse en 10.000 millones de pesetas sobre la base de ir a la reestructuración, como decimos, de las actuales entidades gestoras de la Seguridad Social, de acuerdo con los principios de simplificación, racionalización, ahorro de costes, eficacia social y descentralización.

Estimamos también que podrían reducirse 7.000 millones en la dotación de reservas, que podrían reducirse 2.000 millones en ese objetivo de dichas inversiones y que, en una palabra, se podría combatir el despilfarro que ha caracterizado a las inversiones de la Seguridad Social.

Creemos que, igualmente, la compra de

títulos de valores podría reducirse en 3.000 millones. Asimismo, en las prestaciones, 2.000 más; es decir, creemos que en torno a cada uno de estos capítulos podrían encontrarse los medios para financiar una Seguridad Social más eficaz con esos incrementos de los que hablábamos anteriormente.

La Minoría parlamentaria comunista estima que, de aprobarse estas enmiendas que propone a la Cámara, se pueden mejorar las prestaciones sociales y, por supuesto, también disminuir los costos. Esto es lo que propone nuestra Minoría.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sarraga Gómez para defender la enmienda.

El señor SARRAGA GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con la misma brevedad que el digno representante del Grupo Parlamentario Comunista ha expuesto los argumentos correspondientes a sus trece enmiendas voy a procurar exponer los criterios que guían a Unión de Centro Democrático para solicitar que dichas enmiendas no prosperen. Para ello hemos agrupado las enmiendas en las que se pretende un aumento junto con las que se pretende una disminución.

Así, en la enmienda 158 se solicita un aumento de 12.000 millones de pesetas, basándose únicamente en que la previsión es de 381.000 millones de pesetas en 1977 y para ello el Grupo Parlamentario Comunista entiende que en lugar de 381.000 millones tenían que ser 390.000, pero sin presentar tampoco argumentos de ningún tipo. Las reducciones que corresponderían para estos aumentos serían baja en los capítulos I, artículo 7.º y capítulo II, artículo 2.º

La baja que se pretende en cuanto a las entidades puede parecer, a simple vista, motivada; pero debe tenerse en cuenta que dichas entidades solicitaron, en principio, un presupuesto de 15.000 millones y que dicha cantidad únicamente se consigna presupuestada de 3.263 millones, y que es la cantidad mínima que corresponde para poder atender a situaciones de perentoria necesidad, como

puede ser la asistencia sanitaria a quienes no tienen derecho a prestación reglamentaria, becas-salario, etc.

La disminución de 11.000 millones de pesetas en base a una supuesta racionalización de conciertos y reducciones de costes entendemos no ha lugar, puesto que la consignación para el ejercicio de 1978 es similar de la presupuestada y, hasta la fecha, gastada en 1977. El crecimiento es muy suave y, desde luego, Unión de Centro Democrático entiende también que debe reducirse el costo de servicios ajenos, dotando adecuadamente los servicios propios.

La enmienda 159, por la cual se solicita un aumento de 2.000 millones de pesetas, se basa en el supuesto de que debe aplicarse el mismo tipo de crecimiento para los casos de invalidez provisional que el que suponga para la masa general de pensiones. Aunque esto en la memoria-resumen no se especifica así, puedo tranquilizar al Grupo Parlamentario Comunista, puesto que se ha previsto que el aumento sea idéntico.

Por otra parte, es sabido que las cifras globales de este capítulo pueden adaptarse a las contingencias y que, en el supuesto de que fueran mayores los gastos, se solicitarían los créditos oportunos. Como disminución se solicitan también 2.000 millones de pesetas para compensar este aumento en el capítulo VIII, artículo 1.º Se pretende con ello potenciar los ambulatorios frente a los consultorios, cuando la práctica ha demostrado que, económicamente, sale más rentable el potenciar los consultorios que no los ambulatorios.

En las enmiendas 160, que pretende un aumento de 1.000 millones, y en la 165, la disminución también de 1.000 millones, en la motivación se habla de intentar potenciar o ayudar a la mujer trabajadora y creación de guarderías.

Pero ya que estamos en una ley presupuestaria que debemos cumplir, el Grupo Parlamentario Comunista tiene que saber, y sin duda lo sabe, que estas partidas, en primer lugar, no pueden ir a guarderías, sino que tienen que ir directamente a los propios beneficiarios, y que a la mujer trabajadora no se le conseguirá ningún beneficio, puesto

que al ser trabajadora no tendrá la condición de esposa para percibir dicho beneficio. La contrapartida de la disminución de la misma cantidad de 1.000 millones de pesetas no aparece justificada, puesto que únicamente se nos dice que es que en la memoria no se acompañaban los datos suficientes.

Respecto al aumento que se solicita en la enmienda número 161 de 14.080 millones de pesetas, para atender la dotación de desempleo, debe tenerse en cuenta que la cantidad presupuestada, que son 145.000 millones de pesetas, casi duplica la que en el momento actual se lleva devengada por parte del Ministerio.

Por otra parte, la reducción que se pretende en el capítulo IV, artículo 1.º, y en el capítulo VII, artículo único, respecto a los gastos de administración, la ley permite que éstos sean un 5 por ciento del total, y, en este caso, es únicamente del 3,63 por ciento. Se ha ido a una tendencia de disminución de los gastos administrativos.

En cuanto a reducir las reservas de accidentes, volvemos a tropezar otra vez con la ley actual, que obliga a que en dicha reserva de accidentes se constituyan las cantidades señaladas.

Por último, quedan tres únicas enmiendas, en que se pide la reducción de ciertas cantidades; en la 164 se argumenta que la racionalización de los gastos farmacéuticos no debe venir de un aumento abusivo del dique moderador, que tiene un tope máximo que no se ha utilizado, y sabido es de todos los aumentos que han tenido los productos farmacéuticos, lo que viene a significar que el beneficio del usuario es real.

La enmienda número 169 rebaja 3.000 millones de pesetas la partida «Accidentes de trabajo», para reducir compras de valores, quizá por falta de explicación de la propia memoria. Debe hacerse constar que esta cifra de 14.016 millones presupuestada son compras brutas, que quedan compensadas con ventas de 10.000 millones, y todo esto son operaciones de cambio correspondientes a la cartera del servicio de reaseguros de accidentes.

La última enmienda, 170, correspondiente al capítulo IX, artículo 2.º, reduce 2.000 mi-

llones de pesetas los préstamos laborales. Únicamente aclara que estos préstamos no laborales corresponden a préstamos y anticipos al personal de instituciones sanitarias y personal administrativo de la Seguridad Social, que es un derecho que tienen reconocido en sus estatutos, y, además, que en gran parte se financia con las amortizaciones de los que ya están en vigor.

El señor PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión de Presupuestos tiene la palabra para hacer una aclaración respecto a un error padecido en el «Boletín Oficial de las Cortes».

El señor GARCIA AÑOVEROS: Hemos observado en este momento en el anexo 1, «Créditos ampliables», del texto articulado, apartado A), número 4, en la Sección 16, Ministerio del Interior, donde dice «los destinados al pago de las siguientes atenciones: gastos de transferencias, giros y otros análogos de los servicios del giro postal», etc. (son todos referidos al giro postal), debe decir obviamente, «Sección 24, Ministerio de Transportes y Comunicaciones», y el error se arrastra desde el proyecto enviado por el Gobierno, y conviene salvarlo, porque no se refiere a ese Ministerio, sino al de Transportes.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Comunista del Congreso al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social. Se procede a la votación en bloque de la totalidad de las enmiendas.

Sometidas a votación las enmiendas fueron rechazadas por 110 votos a favor, 162 en contra y 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Comunista al Presupuesto-resumen de la Seguridad Social.

Antes de proceder a proclamar aprobados los Presupuestos Generales del Estado quisiera decir que quizá en el transcurso de esta sesión, para todos fatigosa, la Presidencia haya podido en algún momento aplicar

extensivamente alguna de las reglas que afectan al Reglamento de la Cámara. Ello ha sido así, a pesar de que este procedimiento era un procedimiento de urgencia, por entender que la importancia del tema de los Presupuestos (como acertadamente algún señor Diputado ha señalado, fue quizá el inicio precisamente de la competencia del régimen parlamentario), así lo merecía.

Ruego a los señores Diputados que excusen esta ampliación reglamentaria, que no será repetida en otra ocasión. Creo que el hecho de haberlo practicado con los Presupuestos tenía esa justificación.

Quedan, por tanto, aprobados los Presupuestos Generales del Estado formulados y conforme al dictamen de la Comisión correspondiente.

CREDITOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a proceder a la votación de los proyectos de ley de créditos y suplementos de crédito que figuran en el orden del día. Ruego al señor Secretario de la Cámara vaya dando lectura, uno a uno, para proceder a su votación.

El señor SECRETARIO (Ruiz-Navarro y Gimeno): «Crédito extraordinario de 716.000.000 de pesetas, al Ministerio de Agricultura», en concepto de subvención al FORPPA, para compensar a las empresas extractoras de granos de girasol y de granos de cártamo».

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del proyecto de ley correspondiente a la concesión del crédito a que se acaba de dar lectura por el señor Secretario de la Cámara.

Sometido a votación este crédito extraordinario, fue aprobado por 260 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley correspondiente al Presupuesto en vigor de la Sección 21, del «Ministerio de Agricultura», a que se acaba de dar lectura.

El señor SOLE BARBERA: Pido la palabra para una explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Solé Barberá.

El señor SOLE BARBERA: Señoras y señores Diputados: Necesariamente, en forma telegráfica, intentaré explicar en brevísimas palabras el por qué la minoría comunista ha votado en esta ocasión en contra del crédito del que estamos en estos momentos hablando y que Sus Señorías acaban de aprobar.

Las características y condiciones del FORPPA, de que estamos tratando en este momento, tiene unos aspectos negativos que son los que han obligado a la minoría comunista a votar en contra del proyecto de crédito al FORPPA.

En el terreno de la formulación teórica, la minoría comunista conoce la necesidad de que exista un organismo que cumpla las funciones del FORPPA.

Igual que en otras naciones, igual que en otras circunstancias, la agricultura necesita de un elemento regulador, que en nuestro país debería ser el FORPPA, pero entendemos los comunistas y entiende este Diputado, que tiene el honor de estar entre ustedes gracias a los votos de los campesinos de la provincia de Tarragona, que el FORPPA no ha cumplido en ningún momento la misión que le había sido encargada.

El FORPPA ha sido un instrumento al servicio de lo menos importante para nosotros en el terreno de agricultura, y los campesinos, el pequeño y mediano empresario de la agricultura no se ha visto en ningún momento beneficiado por la acción del FORPPA, sino que ha sido todo lo contrario.

Un instrumento que ignora en este momento que los cosecheros y campesinos de la avellana en la provincia de Tarragona han debido dejar en muchos sitios de recoger la cosecha porque resultaba antieconómico el recogerla y no ha concedido, sino que, al revés, ha negado una forma de subvencionar a los avellaneros de Tarragona, es un instrumento que no cumple con su misión. Un instrumento que en este momento no ha levantado su voz en contra de la perniciosa idea del Ministerio de Comercio de reanudar la vie-

ja táctica de importaciones de vino es un instrumento que no cumple con su deber. Un organismo que ha abocado prácticamente a la desaparición de nuestra personalidad en el mundo del aceite es un instrumento que no cumple con su deber.

Insistimos, señores Diputados, en la necesidad de que exista un organismo como el FORPPA, pero en esta ocasión no podemos dar nuestra confianza a la forma como el FORPPA ha venido desarrollando su labor. Nosotros tenemos un talismán, tenemos una forma de que el FORPPA sea el instrumento que nosotros necesitamos, y ese instrumento, señoras y señores Diputados, se llama democratización; una democratización que vosotros habéis aceptado en diferentes capítulos del Pacto de la Moncloa, una democratización que ha de permitir a los representantes de nuestros campesinos, en vez de ofrecerles un fin de semana en la Dirección General de Seguridad, que participen, con los elementos necesarios, en la reconversión de nuestra agricultura; un instrumento que colabore y dialogue con la Coordinadora de Organizaciones de Campesinos y Ganaderos y, especialmente, que colabore en los trabajadores junto con la catalana Unió de Pagesos.

Esta explicación de voto, señores Diputados, excusándome de nuevo por esta intervención, es la que tenía que daros la minoría comunista.

El señor PRESIDENTE: A continuación procederemos a la votación del proyecto de ley del que va a dar lectura el señor Secretario.

El señor SECRETARIO (Ruiz-Navarro y Gimeno): «Concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 23, "Ministerio de Comercio", de un crédito extraordinario de 7.274.262.394 pesetas, para que por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes puedan cancelarse varias pólizas de crédito concertadas con el Banco de España con motivo de la intervención en el mercado de aceite de soja».

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 240; en contra, 30; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 23, «Ministerio de Comercio», de que acaba de dar lectura el señor Secretario de la Cámara.

A continuación pasamos a la votación del proyecto de ley referente a la Sección 17, «Ministerio de Obras Públicas», de varios créditos extraordinarios, del que va a dar lectura el señor Secretario de la Cámara.

El señor SECRETARIO (Ruiz-Navarro y Gimeno): «Concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 17, "Ministerio de Obras Públicas", de varios créditos extraordinarios por un importe total de 8.774.000.000 de pesetas, para pago de obligaciones a cargo del Ministerio de Obras Públicas, por diversos conceptos anteriores al 31 de diciembre de 1975».

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 243; en contra, 28; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley sobre concesión de un crédito al Presupuesto en vigor de la Sección 17, «Ministerio de Obras Públicas», del que acaba de dar lectura el señor Secretario de la Cámara.

A continuación someteremos a votación el proyecto de ley de concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 16, «Ministerio de la Gobernación», del que va a dar lectura el señor Secretario de la Cámara.

El señor SECRETARIO (Ruiz-Navarro y Gimeno): «Concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 16, "Ministerio de la Gobernación", de un suplemento de crédito de 2.311.500.000 pesetas con destino a satisfacer los gastos que ocasionó la celebración de las Elecciones Legislativas».

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 266; en contra, 13; abstenciones, tres; nulos, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el proyecto de ley sobre

concesión de un suplemento de crédito a la Sección 16, del que acaba de dar lectura el señor Secretario de la Cámara.

Pasamos a continuación al proyecto de ley sobre concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 21, «Ministerio de Agricultura», del que el señor Secretario de la Cámara va a dar lectura.

El señor SECRETARIO (Ruiz-Navarro y Gimeno): «Concesión al Presupuesto en vigor de la Sección 21, "Ministerio de Agricultura", de un crédito extraordinario de 3.618.933.706 pesetas, para abonar al FORPPA, de diferencias de subvenciones satisfechas por el organismo correspondientes al año 1974».

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 231; en contra, 22; abstenciones, 28; nulos, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el proyecto de ley relativo a la concesión de un crédito al Presupuesto en vigor de la Sección 21, «Ministerio de Agricultura», del que acaba de dar lectura el señor Secretario de la Cámara.

Señoras y señores Diputados, dado lo avanzado de la hora y lo fatigoso de la jornada, levantamos la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.

Eran las once y cuarenta minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID